**AGENDA SESIÓN N° 06-2020**

**SUBCOMISIÓN ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS**

|  |
| --- |
| **I. INFORMACIÓN GENERAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Agenda:** | 06-2020 |
| **Asunto de reunión:** | Sesión ordinaria Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas  |
| **Lugar:** | Virtual (Sistema Oficial Microsoft Teams) |
| **Fecha** | 12-06-2020 |
| **Hora inicio:** | 13:30 horas  | **Hora final:** | 17: 15 horas |

|  |
| --- |
| **II. PARTICIPANTES**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sr. Jorge Olaso Álvarez, Coordinador Comisión de Acceso a la Justicia | Ausente por motivos laborales |
| Sra. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas | Presente |
| Sra. Melissa Benavides Víquez, Coordinadora Unidad de Acceso a la JusticiaSra. Angie Calderón, Unidad de Acceso a la Justicia | PresentePresente |
| Sra. Sandra Pizarro, representante Consejo Superior | Presente |
| Sr. Wilbert Kidd, Subdirector Ejecutivo del PJ | Ausente por motivos laborales |
| Sr. Dixon Li, Subdirector de Planificación | Ausente por motivos laborales |
| Sr. Marcos Guevara Berger, representante Escuela de Antropología de la UCR (Se reintegrará hasta el segundo semestre) | Ausente durante el primer semestre |
| Sra. Flor Arroyo Morera, Escuela Judicial | Presente |
| Sr. Jean Carlo Monge, Juez Penal II Circuito Judicial de San José | Ausente por motivos laborales |
| Sra. Yolanda Alvarado Vargas, Jueza Penal de Bribri | Ausente por motivos laborales |
| Sr. Geyner Blanco, Asesor de Casa Presidencial | Ausente por motivos laborales |
| Sra. Valeria Varas, Asesora INAMU | Ausente por motivos laborales |
| Sr. Alí García, Profesor UCR | Presente |
| Sra. Vanessa Villalobos Montero, Departamento de Trabajo Social y Psicología | Presente |
| Sra. Carmen María Escoto Fernández, Sociedad Civil  | Ausente |
| Sra. Ariana Céspedes, Fiscala IndígenaSuplente: Sra. Tattiana García Chaves | Ausente por permisoPresente |
| Sra. Ligia Jeannette Jiménez, Defensora Indígena | Presente |
| Sr. Erick Alfaro, Contralor de Servicios Poder JudicialSuplente Sr. Carlos Romero, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur | Ausentes por motivos laborales |
| Sra. Vivian Rímola Soto, Tecnología de la Información | Vacaciones |
| Sra. Marjorie Herrera, Defensoría de los Habitantes de la República | Presente |
| Sra. Yorleny Ferreto, Organismo de Investigación Judicial | Presente |
| Sr. Hugo Hernández, Oficina de Control InternoSuplente: Señora Indira Alfaro | Ausentes por motivos laborales |
| Sra. Cheryl Bolaños Madrigal, Gestión Humana | Presente |
| Sr. Robert García González, Auditoría JudicialSuplente: Sr. Jeremy Eduarte Alemán | Ausentes por motivos laborales |
| Sr. William Vega, ONU | Ausente |
| Sr. Cristian Alberto Martínez Hernández: Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional | Presente |
| Sra. Stephannie Phillips Asch, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional | Ausente |
| Sra. Patricia Bonilla Rodríguez, Centro de Información Jurisprudencial | Presente |
| Sra. Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión HumanaSuplente: Sr. Alex Guevara, jefe de UISA | Ausente por motivos laborales |
| Sra. Jovanna Calderón Altamirano, Dirección Nacional de Justicia Restaurativa | Presente |
| Sr. Franklin Paniagua, Ministerio de Justicia, DINARACSuplente: Sra. Kathy Piedra Corella | Ausentes por motivos laborales |

**II. ASUNTOS**

|  |
| --- |
| **III. ASUNTOS TRATADOS** |

**ARTÍCULO I**

Se conoce del Oficio 5395-2020 remitido a la Dirección de Planificación por la Secretaría General de la Corte el 11 de junio de 2020, con copia a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, que literalmente indica:

San José, 09 de junio de 2020

N° 5395-2020

Al contestar refiérase a este # de oficio

**Señora**

**Licda. Nacira Valverde Bermúdez**

**Directora de Planificación**

**Estimada señora:**

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión **N° 46-2020** celebrada el **12 de mayo de 2020,** que literalmente dice:

**“****ARTÍCULO XXXVIII**

**DOCUMENTO N° 1606,15, 5150-2020**

En sesión extraordinaria de presupuesto N° 38-2020 celebrada el 17 de abril del 2020, artículo XXI, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice:

**“Se acordó: 1.)** Aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, las cuales son; A la Jefatura de la Defensa Pública, Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo. En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria. Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población. Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo. A la Dirección de Gestión Humana. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en las que se indicó realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública. Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)”. Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas. Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como: Disposición para realizar las diligencias in situ, Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.), Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género. Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública. A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación, se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, tales como: Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física. Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios. A la Dirección de la Planificación. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019; Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio. **2)** En relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial. **3.)** Rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020. **4.)** Tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe. **Se declara acuerdo firme.**”

- 0 -

La máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, mediante oficio N° 782-DTI-2020 del 30 de abril de 2020, gestionó:

**“**En atención al oficio 3897-2020, en el que se transcribe el acuerdo de la sesión extraordinaria N°38-2020, artículo XXI, en el cual se conoció y aprobaron las recomendaciones del **Informe de Planificación N°507-PLA-RH-MI-2020**, relacionado con el **Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, en el cual literalmente se indica:**

Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.

Al respecto me permito remitir el oficio 779-DTI-2020, suscrito por la Msc. Vivian Rímola Soto, Jefa del Subproceso Sistemas Jurisdiccionales, mediante el que informa que parte de esa recomendación ya está implementada.”

- 0 -

Seguidamente, se trascribe el oficio N° 779-DTI-2020, que literalmente dice:

“En respuesta del oficio N° 3897-2020, donde se transcribe el acuerdo del Consejo Superior en sesión extraordinaria N°38-2020, celebrada el 17 de abril del 2020 y se solicita a la Dirección de Tecnología:

1. Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.

Se indica que, para el primer punto, en los diferentes sistemas es posible identificar cuando un intervienes es una persona servidora judicial e indígena, permitiendo este indicador generar reportes de la cantidad de asuntos en esta condición.”

- 0 –

**Se acordó:** Tener por rendido el informe N° 782-DTI-2020 del 30 de abril de 2020, suscrito por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, en que informe informa que la recomendación ya se encuentra aplicada, lo anterior en cumplimiento con la mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, que se formuló en el informe de Planificación N°507-PLA-RH-MI-2020, relacionado con el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública), a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.

La Subcomisión de Pueblos Indígena, la Defensa Pública, la Dirección de Planificación y la tomarán nota para lo que corresponda.**”**

**Atentamente,**

Rafael Rodríguez Jiménez

Prosecretario General interino

**Secretaría General de la Corte**

c:         Subcomisión de Pueblos Indígena

            Defensa Pública

            Dirección de Tecnología de Información

Diligencias / Refs: (**1606,15, 5150-2020**)

Iquesadac

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio 5395-2020 remitido a la Dirección de Planificación por la Secretaría General de la Corte el 11 de junio de 2020, con copia a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, mediante el cual se comunica el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión **N° 46-2020** celebrada el **12 de mayo de 2020,** Artículo XXXVIII, en el que se acordó tener por rendido el informe N° 782-DTI-2020 del 30 de abril de 2020, suscrito por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de Información, en que informa que la recomendación ya se encuentra aplicada, lo anterior en cumplimiento con la mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, que se formuló en el informe de Planificación N°507-PLA-RH-MI-2020, relacionado con el impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública), a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Se dispuso que la Subcomisión de Pueblos Indígenas, la Defensa Pública y la Dirección de Planificación tomarán nota para lo que corresponda. **Lo anterior, en relación con lo dispuesto en** sesión extraordinaria de presupuesto N° 38-2020 celebrada el 17 de abril del 2020, artículo XXI, en la que se acordó aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, las cuales son: A la Jefatura de la Defensa Pública, analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo. En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Además, se dispuso que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria y reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población; y continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo; mantener las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en las que se indicó realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública. Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)”. Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas. Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como: Disposición para realizar las diligencias in situ, utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.), Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género. Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública. A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación, se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, tales como: Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física. Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios. A la Dirección de la Planificación. Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019. Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio. Finalmente se acordó, en relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial; rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020; y, tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe. **2°** En seguimiento del Oficio N° 782-DTI-2020 del 30 de abril de 2020 de la Dirección de Tecnología de la Información, aprobado por el Consejo Superior, al haberse aplicado la mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que se permite identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física, se acuerda solicitar a esa Dirección la remisión de un reporte, a la mayor brevedad, de los procesos judiciales que se tramitan en el Poder Judicial, de las diferentes materias, en los que intervengan personas indígenas y Asociaciones de éstas, con indicación de los despachos donde se tramitan por materia y la fase o estado en que se encuentran, así como la cantidad de personas indígenas u organizaciones de éstas que participan en cada proceso. Solicitar que el reporte sea integral y a la vez, separado por Jurisdicción, que facilite la toma de decisiones. Valorar la posibilidad de que en el reporte se indiquen los números de expedientes para solicitar a los despachos la priorización de la tramitación y resolución de esos asuntos, y de ser viable, la indicación de la procedencia de asuntos, ya sea de algunos de los 8 pueblos o de los 24 territorios indígenas, que permitan identificar entre otros datos de interés, cuáles asuntos corresponden a los pueblos beneficiarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, los cuales requieren una atención pronta. 3° Solicitar a la Dirección de Tecnología de la Información informe sobre la posibilidad tecnológica de garantizar que en todos los procesos donde intervienen personas indígenas u organizaciones de éstos se coloque un distintivo de que el asunto es indígena y que por ende, debe priorizarse su tramitación y resolución, pues en ocasiones algunas personas servidoras judiciales no alimentan debidamente el sistema. Además, la posibilidad de verificar que los procesos cobratorios tengan también ese distintivo. 4° Por la trascendencia de este acuerdo se dispone por unanimidad declararlo firme y comunicarlo a la Dirección de Tecnología de la Información con la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTICULO II**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, informa acerca de la visita realizada a los pueblos Bribri de Salitre y Broran de Térraba los días 4 y 5 de junio con las personas representantes de otras instituciones para dar seguimiento a las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado. Señala, en esa oportunidad dio una rendición de cuentas de los avances realizados en el último período en relación con sus observaciones en visitas anteriores; además, informe de circulares vinculadas con las actuaciones del Poder Judicial ante la pandemia Covid-19 relacionadas con las medidas a considerar ante audiencias o atención de personas indígenas. De igual forma agrega, los cuestionamientos que se plantearon sobre el servicio de la Defensa Pública se trasladó de inmediato a la Subjefatura de la Defensa Pública, la cual rindió un informe que será puesto en conocimiento de las personas indígenas al concluirse se trata de un supuesto de intereses contrapuestos.

**SE ACUERDA**: Se toma nota.

**ARTICULO III**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, informa sobre la convocatoria que le hizo la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para el 22 de junio, a efecto de referirse al Expediente 21360 que es *“Investigación sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del dirigente indígena del territorio Salitre* ***Nombre 001*** *ocurrido el 18 de marzo de 2019, así como de las acciones adoptadas en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la resolución 16/15 de la CIDH, Medida Cautelar 321-12 de 30 de abril de 2015.”*

El señor Alí Garcia sugiere que el mensaje que se dé a la población indígena y sobre ésta, considere su cosmovisión.

**SE ACUERDA**: Se toma nota.

**ARTICULO IV**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, informa acerca del seguimiento dado a la petición de información de la Asociación Ditso, en su condición de defensores de los derechos humanos de las personas indígenas, luego de dos sesiones de trabajo convocadas por la Defensoría de los Habitantes de la República y la representante de Naciones Unidas en Costa Rica.

Refiere, parte de la información solicitada está vinculada con procesos judiciales de naturaleza penal, por lo que al existir limitaciones legales no se ha facilitado información concreta; pero sí se les remitieron varias circulares del Poder Judicial sobre el tema indígena y se mostró la disposición de participar en rendiciones de cuentas.

**SE ACUERDA:** Se toma nota.-

**ARTICULO V**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, informa sobre comunicado enviado a la Defensoría de los Habitantes de la República en el que muestra su disposición a participar en las actividades de rendición de cuentas a las personas indígenas sobre las acciones realizadas por el Poder Judicial sobre las MC 321-12 de la CIDH contra el Estado; e informe sobre las rendiciones de cuentas periódicas que realiza en las visitas a los territorios de Salitre y Térraba con representantes de otras instituciones involucradas. Así como la respuesta emitida por la señora Marjorie Herrera de la DHR.

La señora Marjorie Herrera indica, la Sra. Defensora había acordado con el Viceministro Otárola realizar una reunión de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en la Defensoría.  La idea es que participen todas las instituciones involucradas como INDER, Seguridad Pública, etc.  Se estimó oportuno invitar a doña Damaris por ser la representante del Poder Judicial en relación con la Medida Cautelar.  Por la situación de la Pandemia no se ha podido convocar.  Pero es una rendición de cuentas del Ejecutivo ante la Defensoría. Agrega, se tiene claro que las reuniones in situ son procesos de diálogo y construcción de acuerdos con las comunidades, peticionarios y beneficiarios de la Medida.

Además, la señora Vargas expone sobre la propuesta de Presupuesto 2021 para la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica y el reciente acuerdo de Corte Plena.

**SE ACUERDA**: Se toma nota.-

**ARTICULO V**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, informa sobre la importancia de coordinar con el Oficial de Simplificación de Trámites del Poder Judicial para la coordinación de revisión de Circulares vinculadas con la población indígena a efecto de cumplir con los lineamientos del Consejo Superior emitido en seguimiento de la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y su Reglamento; así como con personas indígenas involucradas. Cita los casos de las circulares vinculadas con ayudas económicas que exigen mucho “papeleo” y el reconocimiento de almuerzo hasta las 12 lo cual no corresponde a sus costumbres.

Doña Tattiana García refiere a la importancia y urgencia de esa actualización y simplificación de las circulares conforme a los requerimientos de la población indígena.

**SE ACUERDA**: Se toma nota de la propuesta y se dispone solicitar al señor Erick Alfaro, Contralor de Servicios del Poder Judicial, en su condición de Oficial de Simplificación de Trámites del Poder Judicial, colaboración para proceder a revisar todas las circulares emitidas por el Poder Judicial, vinculadas con la temática indígena, a fin de dar cumplimiento a la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y su Reglamento y los acuerdos del Consejo Superior, entre otros, los tomados en las sesiones 36-17 de 20 de abril de 2017, Artículo XXIII, 65-18 de 19 de julio de 2018, Artículo LXII, 73-18 de 16 de agosto de 2018, Artículo XLVII, entre otras. Instar al Consejo Superior para que autorice ampliación del plazo a tres meses para que la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas pueda coordinar con el Oficial de Simplificación de Trámites del Poder Judicial a efecto de revisar todas las circulares emitidas por el Poder Judicial para, de ser oportuno, emitir propuestas de modificación que impliquen una simplificación de los trámites, eliminación del exceso de requisitos y trámites administrativos a las personas usuarias indígenas y concertar posiciones con las personas indígenas y sus representantes, especialmente las beneficiarias de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, en cumplimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena. Por la relevancia de este acuerdo se dispone declararlo firme por unanimidad y comunicarlo al señor Erick Alfaro, Contralor de Servicios del Poder Judicial, en su condición de Oficial de Simplificación de Trámites del Poder Judicial; y al Consejo Superior del Poder Judicial, con la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTICULO VI**

Las personas representantes del Equipo de Capacitación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas informan sobre los avances realizados con ocasión de las sesiones de trabajo realizadas.

La señora Flor Arroyo expone informe de avances de la capacitación por medio de la plataforma de la Escuela Judicial, ya sea con actividades sincrónicas u otras.

Comunica Damaris Vargas que la DTI le informó la capacidad máxima de personas a capacitar es de 300 personas por teams; sin embargo, sugiere 150 para que sea más eficiente y se ofrece a dar capacitación sobre el manejo de la herramienta con fines de capacitación. Lo anterior, ante la necesidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos y de que esta capacitación contribuya a fortalecer las competencias de todas las personas servidoras judiciales, en especial aquellas que tienen mayor recargo de trabajo de procesos vinculados con personas indígenas. Agrega, debe considerarse en esa propuesta cada uno de los aspectos definidos por Corte Plena en la Circular 188-19.

La señora Cheryl Bolaños indica que metodológicamente lo adecuado es que sean 20 a 25 personas máximo; tal y como lo indicó doña Flor Arroyo.

La señora Melissa Benavides sugiere se trasladen esas inquietudes al equipo de capacitación.

**SE ACUERDA**: Se toma nota del informe de la señora Flor Arroyo, representante de la Escuela Judicial, sobre el Plan Anual de Capacitación Indígena 2020 vinculado con el Módulo Indígena, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas; así como el dato de que es un solo Módulo con varios temas con contenidos diferentes. Trasladar al equipo de capacitación de la Subcomisión las inquietudes planteadas para que hagan una propuesta concreta a la Subcomisión. Se declara este acuerdo firme por unanimidad por la trascendencia de que esta labor quede finiquitada y ejecutada este mismo año. Comuníquese a la Escuela Judicial y a las personas integrantes del Comité de Capacitación mediante la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTICULO VII**

La licenciada Rebeca Guardia Morales, Directora a.i. de la Escuela Judicial, en oficio EJ-IR-058-2020 del 30 de marzo de 2020, comunicó lo siguiente:

**EJ-IR-058-2020**

 **30 de marzo de 2020**

**Máster**

**Melissa Benavides Víquez**

**Coordinadora Unidad Acceso a la Justicia**

**Poder Judicial**

**Asunto:** **Respuesta a oficio CACC-97-2020**.

**Estimada señora:**

Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su oficio número CACC-97-2020, con respecto a capacitación sobre acceso a la justicia de pueblos indígenas, de fecha 30 de marzo del presente año, se informa lo siguiente:

1. Con respecto al acuerdo 2°, en el que se solicita la calendarización de las actividades del plan de capacitación propuesto, se reitera lo estipulado en el informe brindado EJ-INF-001-2020, en el sentido de que la Escuela Judicial requiere inicialmente la colaboración de la misma Subcomisión de Acceso a la Justicia de pueblos indígenas, para identificar cuáles de las actividades académicas propuestas por esta Subcomisión, cuentan con un diseño previo. Posterior a esto, se requiere de al menos una persona especialista que colabore para diseñar aquellas actividades que lo requieran. Finalizada esta labor, podremos calendarizar la ejecución de las actividades.

Actualmente, algunas actividades como la “Capacitación en temáticas vinculadas con pueblos y territorios indígenas”, desarrollada por la UCR, y el “Módulo didáctico sobre Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas” sí cuentan con una calendarización provisional, para los meses de agosto a octubre (la primera), y para los meses de noviembre y diciembre (la segunda).

De conformidad con lo acordado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en Sesión Extraordinaria virtual número 04-2020 del 17 de marzo pasado, la Escuela Judicial agradece a esta Subcomisión la selección del equipo conformado por el señor Jean Carlos Monge en representación del sector Judicatura, la señora Ariana Céspedes de la Fiscalía Indígena, la señora Ligia Jiménez de la Defensa Pública Indígena y el señor

 Wilbert Kidd, Subdirector Ejecutivo, en representación del sector Administrativo, para colaborar con la Escuela Judicial en el desarrollo de las actividades académicas de este plan de capacitación.

La Escuela Judicial iniciará la coordinación con este equipo, y en cuanto se pueda calendarizar la totalidad de actividades, se lo estaremos comunicando a esta Subcomisión. Para este efecto, la Escuela Judicial ha designado a las funcionarias Flor Arroyo Morera, Gestora de Capacitación, y Marisol Barboza Rodríguez, Especialista en Métodos de Enseñanza.

2. Con respecto a lo estipulado en el acuerdo 5°, la Escuela Judicial en el informe número EJ-INF-001-2020, manifestó que, en cumplimiento de lo expuesto en el eje de acción número 9, en las capacitaciones se dará prioridad a las personas juzgadoras y personal técnico de los despachos donde se tramite la mayor cantidad de procesos vinculados con personas indígenas. Y para ello se cuenta con el listado proporcionado por la Subcomisión de Acceso a la justicia de pueblos indígenas, según reporte de SIGMA.

Sin embargo, en comunicación del 3 de marzo pasado, la señora Ligia Jiménez manifestó su preocupación en cuanto a incluir a la Defensa Pública; y de igual forma, en comunicación del 24 de marzo, el señor Jean Carlo Monge expone que la estadística en cuanto al número de personas indígenas que se atienden en el Juzgado Penal de Coto Brus, no es correcta, pues hay una mayor cantidad de asuntos relacionados con esa población.

Por esta razón la Escuela Judicial, requiere la colaboración de esta Subcomisión para que se actualice la lista aportada de Despachos Judiciales con personas indígenas intervinientes, para realizar de mejor forma nuestra labor.

Sin otro particular,

 **Licda. Rebeca Guardia Morales**

**Directora a.i.**

**Escuela Judicial**

C. Arch. Consec.

fam

**SE ACUERDA**: 1° Se toma nota del oficio EJ-IR-058-2020 del 30 de marzo de 2020 remitido por la señora Rebeca Guardia Morales, Directora de la Escuela Judicial, en oficio EJ-IR-058-2020 del 30 de marzo de 2020, en el que reitera lo estipulado en el informe EJ-INF-001-2020. 2° Comunicar a la Dirección de la Escuela Judicial que el Equipo de Capacitación conformado por algunas personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos indígenas, representantes de Instituciones Públicas relacionadas y de personas indígenas y sus representantes, según recomendación que hará la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, se ocupará de colaborar con personas facilitadoras y diseñadoras de las capacitaciones que integren el Módulo Indígena, calendarizado por la Escuela Judicial para los meses de noviembre y diciembre. 2° Consultar a la Escuela Judicial sobre los avances de la capacitación a la que hace referencia en el oficio citado, coordinada con la Universidad de Costa Rica denominada “Capacitación en temáticas vinculadas con pueblos y territorios indígenas”, calendarizada para los meses de agosto a octubre de 2020. 3° Reiterar a la Escuela Judicial la importancia de que las actividades de capacitación cumplan con todos los elementos dispuestos por Corte Plena en la Circular 188-19, incluyendo el seguimiento. 4° Facilitar a la Escuela Judicial y a la Dirección de Gestión Humana un reporte actualizado de los despachos donde se tramiten mayor cantidad de procesos vinculados con personas indígenas y las materias relacionadas. El reporte se realizará por la Subcomisión en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información utilizando el sistema SIGMA, pues el informe que la Subcomisión había facilitado está desactualizado. 4° Comunicar este acuerdo a la Dirección de la Escuela Judicial y de Tecnología de la Información y Comunicación, por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTÍCULO VIII**

El juez Jean Carlo Monge Madrigal, mediante correo electrónico del 23 de abril de 2020 remitido a la señora Damaris Vargas Vásquez, en la condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, planteó propuesta para que la Subcomisión de Pueblos Indígenas se subdivida en tres comisiones o comités para atender los temas que son frecuentemente discutidos. Concretamente, señaló:

“… En este caso, creo que la Subcomisión podría dividirse en tres comisiones o comités que se encarguen de abarcar los temas que con más frecuencia se discuten. Desde mi perspectiva, a las comisiones se les asignarían tareas específicas con el objeto de que elaboren borradores de propuestas o proyectos, que luego sean validados por la totalidad de la Subcomisión. Sería algo así como lo que se hace en la Asamblea Legislativa. Revisando las actas de las sesiones anteriores, podrían existir tres comisiones:

1. La de Capacitación.
2. La de gestiones presentadas por personas funcionarias judiciales, como por ejemplo las preguntas que se remiten desde los distintos despachos.
3. La de seguimiento de las medidas cautelares de la CIDH.
4. La encargada de la Política Institucional Indígena.

Como se lo manifesté días atrás, creo que designar un pequeño grupo que avance con un determinado proyecto o producto, permite que la coordinación sea un poco más sencilla. Al ser tantas las personas que integran la Subcomisión, hay ocasiones en que un solo tema consume un importante espacio de la sesión. La división en grupos además, facilitaría la coordinación de las tareas, celebración de reuniones virtuales y el intercambio de ideas. Claro está que hay temas que no califican en ninguna de las tres comisiones pero esos podrían dejarse para ser analizados en pleno. De igual forma, la subdivisión que menciono es solo una propuesta. Podría existir un mejor planteamiento por parte del resto de las personas que actualmente integran la Subcomisión. El otro modelo, en el cual se delegan determinadas tareas a diferentes personas, también lo considero adecuado, sin embargo creo que las comisiones generarían algo así como una especialización en las personas que las componen, sobre todo por la variedad de temas que se atienden y que en ocasiones es difícil seguir el hilo conductor. Al asignarse responsabilidades específicas es más sencillo estar pendiente de los temas en que cada grupo debe avanzar…”

Se somete a conocimiento de las personas integrantes de la Subcomisión para su análisis y decisión.

**SE ACUERDA**: Se toma nota y se reserva para conocer la propuesta del señor Jean Carlo Monge una vez que se integre a las sesiones de trabajo. Comunicar este acuerdo al gestionante por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTICULO IX**

La Unidad de Acceso a la Justicia comunicó mediante el Oficio CACC-148-2020 a la Escuela Judicial, el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en el Artículo XIV de la sesión celebrada el 03 de abril de 2020, el cual se transcribe literalmente: *“****SE ACUERDA:******1°*** *Se toma nota del Oficio 048-DNJR-20/Mag. Gerardo Rubén Alfaro de 9 de marzo de 2020, dirigido por la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y de la integrante Ligia Jiménez, Defensora Pública Indígena, el señor Jean Carlos Monge, juez penal y el señor Carlos Romero, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.* ***2°*** *Solicitar a las Unidades de Capacitación y a la DNJR incluir en el proceso de construcción de los diseños de capacitación a personas indígenas, mujeres y hombres, representantes de pueblos indígenas, con el objetivo de que participen activamente en su elaboración en cumplimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena, quienes cuenten con el perfil específico que se construya para esa población, luego de la propuesta formulada por la señora Marisol Barboza Rodríguez, especialista en métodos de enseñanza. De igual forma, instar a la DNJR incorpore población indígena para que participe en el proceso de construcción del Protocolo de Justicia Penal Restaurativa. Tomando en consideración que en los territorios indígenas hay diferentes tipos de liderazgos de la población indígena, lo ideal es contar con personas que puedan aportar sustancialmente e incidir en la construcción de ambos procesos, no en forma accesoria. Con el objetivo de que la participación no sea impuesta desde el Poder Judicial, y garantizar que la designación se realice desde los pueblos indígenas, se dispone a solicitar a la Defensoría de los Habitantes de la República colaboración para que, en forma coordinada con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, se pueda tener contacto con las diferentes organizaciones de personas indígenas y los listados. En tanto se superan las limitaciones generadas por la Pandemia Covid-19, y para mayor celeridad, instar a la Defensoría de los Habitantes de la República colaboración para poder contactar al Grupo de Peticionarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH que cubre a los pueblos de Salitre y Térraba, el Foro Nacional de Mujeres Indígenas; además, al Tribunal de Derecho Propio de Boruca, Tribunal de Derecho Propio de Cabagra y el Tribunal Indígena de Bribri Talamanca, a fin de que designen una persona por cada organización que colabore con el diseño y la ejecución de las actividades de capacitación. Para hacer efectiva la participación de las personas indígenas, remitir solicitud a la Escuela Judicial acerca de la posibilidad de contar con recursos institucionales para cubrir la alimentación, viáticos y demás requerimientos de las personas indígenas; así como a las y los representantes ante la Subcomisión del INAMU, la DHR y el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, entre otros, a efecto de informen si hay opciones de colaboración. Las personas indígenas seleccionadas se integrarán al Comité de Capacitación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas previamente seleccionado al que se incorporan además la señora Marjorie Herrera por la DHR y la señora Jovanna Calderón por la DNJR.* ***3°*** *Se designa al juez Jean Carlos Monge para que coordine con la licenciada Ligia Jiménez, Defensora Pública Indígena y la señora Ariana Céspedes, Fiscala Indígena o a su suplente, la Fiscala Tatiana García, a efecto de que preparen una propuesta de capacitación integral que sirva de base al Comité de Capacitación para su análisis, previo a ser sometida a aprobación de la Subcomisión en pleno.* ***4°*** *Se tiene por planteado el perfil de las personas indígenas que participarán en el proceso de construcción de la capacitación, propuesto por la señora Marisol Barboza Rodríguez, especialista en métodos de enseñanza de la Escuela Judicial, en el que se señala debe tratarse de personas indígenas: a) líder o lideresa de un pueblo indígena, b) persona conocedora de la labor del Poder Judicial, c) persona conocedora de los procesos de acuerdo dentro de los pueblos indígenas, d) que hable español o en su defecto se le asignará una persona traductora, y con disposición para colaborar.* ***5°*** *Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución. Comuníquese integralmente a la DNJR, la DHR, la Escuela Judicial y Unidades de Capacitación del Poder Judicial; además, a las y los integrantes del Comité de Capacitación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas; para lo que se solicitará colaboración a la Unidad de Acceso a la Justicia.”*

La licenciada Rebeca Guardia Morales, Directora a.i. de la Escuela Judicial, en oficio EJ-IR-0073-2020 del 28 de abril de 2020, comunicó lo siguiente como respuesta al Oficio CACC-148-2020 de la Unidad de Acceso a la Justicia:

*“… En respuesta a su oficio número CACC-148-2020, de fecha 23 de abril del presente año, relacionado con capacitaciones sobre Acceso a la justicia de pueblos indígenas, en el que se indica “...remitir solicitud a la Escuela Judicial acerca de la posibilidad de contar con recursos institucionales para cubrir la alimentación, viáticos y demás requerimientos de las personas indígenas...”, se informa lo siguiente:*

*La Escuela Judicial se encuentra en la mejor disposición de cubrir la alimentación, traslado y hospedaje de las personas indígenas que participen como expositoras en las actividades académicas contempladas en nuestro plan de capacitación, a fin de que las mismas alcancen el éxito deseado. Tal es el caso del curso “Módulo didáctico sobre Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, el cual también es de mucho interés para la Subcomisión de Acceso a la Justicia de pueblos indígenas.*

*Por esta razón, la Escuela no puede comprometer sus recursos cubriendo las necesidades de otras actividades académicas, pues correría el riesgo de que posteriormente no cuente con el recurso requerido en las actividades previamente agendadas. Para poder hacer una mejor proyección de los recursos con los que contamos y determinar posibles saldos disponibles para otras acciones formativas, resulta importante contar con las listas de las posibles personas que serán invitadas a participar en las acciones propuestas de manera previa.”*

La señora Flor Arroyo informa que el Módulo Indígena constituye para 2020 el Plan Anual de Capacitación, para el cual, sí se tiene previsto viáticos para personas indígenas en caso de que deban trasladarse desde sus territorios indígenas.

**SE ACUERDA**: 1° Se toma nota del Oficio CACC-148-2020 remitido por la Unidad de Acceso a la Justicia a la Escuela Judicial, en el que le comunica el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en el Artículo XIV de la sesión celebrada el 03 de abril de 2020; y del Oficio EJ-IR-0073-2020 del 28 de abril de 2020 emitido por la señora Rebeca Guardia Morales, Directora de la Escuela Judicial en el que se informa que está en la mayor disposición de cubrir la alimentación, traslado y hospedaje de las personas indígenas que participen como expositoras en las actividades académicas contempladas en el Plan de Capacitación 2020, a fin de que las mismas alcancen el éxito deseado, a saber, el “Módulo didáctico sobre Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, pero que no puede comprometer sus recursos cubriendo las necesidades de otras actividades académicas, pues correría el riesgo de que posteriormente no cuente con el recurso requerido en las actividades previamente agendadas. 2° Trasladar a la Escuela Judicial por medio del Equipo de Capacitación el listado de posibles personas que serán invitadas a participar en las acciones de capacitación para que puedan hacer una mejor proyección de los recursos con los que cuentan. 3° Remitir atento recordatorio a las personas representantes de la Defensoría de los Habitantes de la República y de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, para la identificación de las personas indígenas que colaborarán con las actividades de capacitación. 4° Se declara firme este acuerdo por unanimidad y dada su trascendencia se dispone declararlo firme y comunicarlo tanto a la Dirección de la Judicial como al Equipo de Capacitación de esta Subcomisión, por medio de la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTÍCULO X**

La Unidad de Acceso a la Justicia comunicó mediante el **Oficio CACC-36-2020 de fecha 22 de enero de 2020** a la MBA. Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana, a la licenciada Chery Bolaños Madrigal, Jefa a.i. de Gestión de la Capacitación y a la licenciada Waiman Hin Herrera, Sub directora a.i. de Desarrollo Humano, el acuerdo estipulado en el Artículo III de la sesión celebrada el 7 de enero de 2020.

La MBA. Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana, a la licenciada Chery Bolaños Madrigal, Jefa a.i. de Gestión de la Capacitación y a la licenciada Waiman Hin Herrera, Sub directora a.i. de Desarrollo Humano licenciada Rebeca Guardia Morales, Directora a.i. de la Escuela Judicial, en oficio PJ-DGH-CAP-130-2020, comunicaron lo siguiente:

14 de abril de 2020

**PJ–DGH–CAP–130–2020**

Señora:

Máster Melissa Benavides Víquez

Coordinadora

Unidad de Acceso a la Justicia

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. En atención a lo solicitado mediante el oficio CACC-36-2020 con fecha del 22 de enero de 2020, en el que se remite el acuerdo tomado por la **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas** celebrada de manera virtual el pasado 07 de enero de 2020, el cual indica en el artículo III, sobre el “Seguimiento a gestión formulada por Pueblo Indígena Malecu a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia” y se acordó:

“5°. Trasladar a la Escuela Judicial, Dirección de Gestión Humana y demás Unidades de Capacitación de la Defensa Pública, Ministerio Público y OIJ, la solicitud de “capacitación y asesoramiento” planteada por el señor Emigdio Cruz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu), para su atención. En lo referente a la solicitud de asesoramiento que plantea el Pueblo Malecu, trasladar la petición a la Dirección de la Defensa Pública.”

La Dirección de Gestión Humana reconoce la importancia de la capacitación continua como parte del éxito de los procesos estratégicos que plantea el Poder Judicial, y como mecanismo útil para potenciar el desarrollo de las competencias, los conocimiento y las habilidades específicas a cada puesto de trabajo, y que, a su vez, permite incrementar y mantener la eficiencia, así como el desarrollo personal y laboral de cada persona funcionaria judicial, influyendo esto en la sensibilización de la población en temas relacionados con el servicio pública de calidad y la atención de poblaciones vulnerables.

Es por esta razón, que tomando en cuenta el diagnóstico sobre necesidades de la población judicial realizado por la Contraloría de Servicios, el Subproceso Gestión de la Capacitación implementará procesos de formación para las servidoras y servidores judiciales en los que se les facilitarán las herramientas básicas para brindar una atención de calidad a la población indígena, de manera que se garantice su acceso a la justicia.

Aunado a esto, durante los últimos años el Subproceso Gestión de la Capacitación enfocó sus esfuerzos en desarrollar herramientas de autoaprendizaje que faciliten la capacitación de la población judicial en temas relacionados con los derechos humanos y las políticas institucionales, entre ellas el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Es importante destacar que todos los procesos de capacitación que implementa el Subproceso se crean con asesoramiento metodológico lo que permite impactar en cierta medida las competencias de las personas servidoras judiciales y de manera transversal ayuda a mejorar el servicio público que se brinda a las poblaciones vulnerables y apoyar en la prevención y erradicación de las prácticas que atenten contra los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Además, solicitamos su colaboración para que en siguientes giras que se realicen a las zonas indígenas se invite a este Subproceso, en razón de poder identificar nuevas necesidades de capacitación en las que podamos colaborar.

Atentamente,

|  |  |
| --- | --- |
| **Lcda. Cheryl Bolaños Madrigal****Jefe a.i. Gestión de la Capacitación****Dirección de Gestión Humana** | **Lcda. Waiman Hin Herrera****Sub directora a.i de Desarrollo Humano****Dirección de Gestión Humana** |
| **MBA. Roxana Arrita Meléndez****Directora a.i.****Gestión Humana** |

Kas / Cbm

**SE ACUERDA**: 1° Se toma nota del Oficio CACC-36-2020 de fecha 22 de enero de 2020 remitido por la Unidad de Acceso a la Justicia a la Dirección de Gestión Humana en el que le comunica el acuerdo tomado por esta Comisión en el Artículo III de la sesión celebrada el 7 de enero de 2020; y del Oficio PJ-DGH-CAP-130-2020 de 14 de abril de 2020, enviado por la MBA. Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana, la licenciada Chery Bolaños Madrigal, Jefa de Gestión de la Capacitación y a la licenciada Waiman Hin Herrera, Sub directora de Desarrollo Humano, en el que se refiere al traslado que le hizo la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de la solicitud del señor Emigdio Cruz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu), para que se le brinde a su pueblo capacitación y asesoramiento en la actividad de inauguración del edificio de Los Chiles organizado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 2° Solicitar a la Dirección de Gestión Humana remisión del “Diagnóstico de necesidades de la población judicial” realizado por la Contraloría de Servicios y el Subproceso Gestión de la Capacitación conforme al cual se dispuso implementar procesos de formación para las servidoras y servidores judiciales en los que se les facilitarán las herramientas básicas para brindar una atención de calidad a la población indígena, de manera que se garantice su acceso a la justicia, lo anterior, a fin de conocer los resultados vinculados con las necesidades de la población indígena; así como informe donde señale en concreto, las herramientas de autoaprendizaje desarrolladas vinculadas con la población indígena. 3° Solicitar a la Contraloría de Servicios, Fiscalía General, Defensa Pública informar a la Dirección de Gestión Humana las fechas previstas para visitas a territorios indígenas organizadas una vez que se superen las limitaciones generadas por la Pandemia Covid-19, conforme a la Circular 94-20, entre otras. 4° Comunicar este acuerdo a las Direcciones de Gestión Humana, Defensa Pública, Fiscalía General y Contraloría de Servicios por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTÍCULO XII**

La MSc. Alba Gutiérrez Villalobos, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología mediante correo electrónico del 2 de abril de 2020, comunicó lo siguiente:

**Respuesta al Oficio CACC-106-2020**

**De:** Alba Gutiérrez Villalobos
**Enviado el:** jueves, 2 de abril de 2020 17:49
**Para:** Katherine Salazar Duarte <ksalazard@Poder-Judicial.go.cr>
**CC:** Vanessa Villalobos Montero <vvillalobos@Poder-Judicial.go.cr>; Departamento Trabajo Social y Psicología <trab\_social@Poder-Judicial.go.cr>; Henry Camacho Esquivel (Autorizado Reclutamiento y Selección) <hcamacho@Poder-Judicial.go.cr>; Angie Calderón Chaves <acalderonc@Poder-Judicial.go.cr>; Guiselle Corea Lopez <gcorea@Poder-Judicial.go.cr>
**Asunto:** RE: Oficio CACC-106-2020 Sra. Roxana Arrieta Meléndez - Acuerdo Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas 06 de marzo

Buenas tardes, atentos saludos.

De conformidad con lo solicitado informo:

Puesto N° 372009, perito judicial 2 en Trabajo Social nombrada en propiedad y destacada en **Buenos Aires** desde el 2015 a la fecha, en oficina prestada por la Fiscalía.

Puesto N° 371996 perito judicial 2 en Trabajo Social   y Puesto N° 371997 perito judicial 2 en Psicología, ambas plazas nombradas en propiedad y destacadas en **Limón** desde el 2015 a la fecha, dado que no hay espacio físico en **Bribri**, las profesionales si se desplazan a valorar ahí cuando consiguen una espacio donde hacerlo.

Quedo atenta a cualquier otra información.

Cordialmente,

**De:** Alejandra García Sánchez
**Enviado el:** lunes, 13 de abril de 2020 03:42 p.m.
**Para:** Henry Camacho Esquivel (Autorizado Reclutamiento y Selección); Katherine Salazar Duarte
**CC:** Melissa Benavides Víquez; Krissia Rojas Quirós; Secretaría Depto. Gestión Humana - Flory Campos Sandoval (Autorizada)
**Asunto:** RE: Oficio CACC-106-2020 - Acuerdo Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

Buenas tardes,

Según la Relación de puestos, los puestos indicados se encuentran adscritos a las siguientes oficinas presupuestarias:

**372009** 726-OFICINA TRABAJO SOCIAL I CIRC. JUD. ZONA SUR

**371996**          740-OFICINA TRABAJO SOCIAL I CIR.JUD. ZONA ATLANTICA

**371997** 740-OFICINA TRABAJO SOCIAL I CIR.JUD. ZONA ATLANTICA

Cualquier consulta con gusto,



**SE ACUERDA**: Se toma nota del comunicado electrónico remitido por la MSc. Alba Gutiérrez Villalobos, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología mediante correo electrónico del 2 de abril de 2020, a Katherine Salazar Duarte, con copia a Vanessa Villalobos Montero, el Departamento Trabajo Social y Psicología, Henry Camacho Esquivel, Angie Calderón Chaves y Guiselle Corea Lopez, en el que en seguimiento del Oficio CACC-106-2020 enviado a la señora Roxana Arrieta Meléndez por la Unidad de Acceso a la Justicia comunicándole el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas el 06 de marzo pasado, en el que informa que el Puesto N° 372009, perito judicial 2 en Trabajo Social está nombrado en propiedad y está destacada en Buenos Aires desde el 2015 a la fecha, en oficina prestada por la Fiscalía; el Puesto N° 371996 de perito judicial 2 en Trabajo Social y el Puesto N° 371997 de perito judicial 2 en Psicología, ambas plazas están nombradas en propiedad y destacadas en Limón desde el 2015 a la fecha, y que debido a que no hay espacio físico en Bribri, las profesionales se desplazan a valorar ahí cuando consiguen una espacio donde hacerlo.

**ARTÍCULO XII**

La licenciada Cheryl Bolaños M, Jefa a.i. Gestión de Capacitación, mediante correo electrónico dio respuesta al oficio CACC-137-2020, indicando lo siguiente: *“Respuesta al Oficio CACC-137-2020. Buenas tardes. Se analizará y coordinará lo necesario para incluir lo consecuente en el plan de capacitación del 2021. Saludos.”*

**SE ACUERDA**: Se toma nota.

**ARTÍCULO XIII**

La MSc. Jovanna Calderón Altamirano de la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa, en correo electrónico de data 27 de abril de 2020 enviado a Cheryl Bolaños Madrigal y Katherine Salazar Duarte, dio respuesta al oficio CACC-161-2020, tomó nota del oficio y de las indicaciones de la señora Cheryl Bolaños en correo del 27 de abril de 2020 remitido a Katherine Salazar Duarte, en el que indicó:

*“Estimada Katherine. En razón de lo acordado, procedo agregar y copio a Jovana para que sea de su conocimiento que por parte del Subproceso Gestión de la Capacitación no podríamos sugerir personas indígenas que apoyen la construcción de contenidos de capacitación porque esta oficina se encarga principalmente de capacitar a la población judicial con base en los criterios y contenidos desarrollados por personal experto que sí tiene ese acercamiento con los pueblos indígenas como son  las mismas personas que integran la Subcomisión. Por lo anterior en lo que podemos colaborar si a bien lo tiene Jovana y la DNJR, es con el apoyo metodológico de la compañera Yamileth Jiménez Luna, quien funge como la profesional en métodos de enseñanza de esta oficina. Quedo a la orden.”*

**SE ACUERDA**: Se toma nota. Informar a la Dirección de Gestión Humana, Dirección de Justicia Restaurativa y Escuela Judicial que conforme a lo acordado por esta Subcomisión, con el objetivo de que la participación no sea impuesta desde el Poder Judicial, y garantizar que la designación se realice desde los pueblos indígenas, se dispuso solicitar a la Defensoría de los Habitantes de la República colaboración para que, en forma coordinada con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, se pueda tener contacto con las diferentes organizaciones de personas indígenas y los listados. Además, en tanto se superan las limitaciones generadas por la Pandemia Covid-19, y para mayor celeridad, se dispuso instar a la Defensoría de los Habitantes de la República colaboración para poder contactar al Grupo de Peticionarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH que cubre a los pueblos de Salitre y Térraba, el Foro Nacional de Mujeres Indígenas; además, al Tribunal de Derecho Propio de Boruca, Tribunal de Derecho Propio de Cabagra y el Tribunal Indígena de Bribri Talamanca, a fin de que designen una persona por cada organización que colabore con el diseño y la ejecución de las actividades de capacitación. Estar a la espera de la remisión de esa información.-

**ARTÍCULO XIV**

El señor Marcos Guevara Berger, mediante correo electrónico de data 27 de abril de 2020 solicitó a Katherine Salazar Duarte de la Unidad de Acceso a la Justicia, *“por favor me excluya de la lista de correo a la Subcomisión, pues de momento no formo parte de la misma”.*

**SE ACUERDA**: Se toma nota.-

**ARTÍCULO XV**

Se conoce comunicado electrónico de 30 de abril de 2020, remitido por la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en el que traslada para conocimiento de las y los integrantes de la Subcomisión el Informe Anual 2020 de la CICR para México y América Central. Los datos fueron compartidos por la Oficinas de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial.

**SE ACUERDA**: 1° Se toma nota del informe. 2° Seguir remitiendo a las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia los asuntos que serán conocidos en las sesiones respectivas por medio del envío de la agenda, y no en forma separada en el transcurso del mes.

**ARTÍCULO XVI**

La Unidad de Acceso a la Justicia en comunicado electrónico del 23 de abril pasado hizo de conocimiento de las personas coordinadoras de las Subcomisiones la solicitud enviada por la OCRI vinculada con el Cuestionario sobre el Consenso de Montevideo, a efecto de que emitieran pronunciamiento a más tardar el 6 de mayo. La solicitud se hizo de conocimiento de las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas ese mismo día para que remitieran sus sugerencias; no obstante, no se recibieron propuestas, únicamente la señora Ligia Jiménez, representante de la Defensa Pública, indicó que ya había remitido sus ideas, sin incorporar las mismas en el comunicado.

El 6 de mayo de 2020, dentro del plazo conferido por la OCRI, la Coordinadora de la Subcomisión remitió a la OCRI con copia a la Comisión de Acceso a la Justicia el siguiente comunicado:

**De:** Damaris Vargas Vásquez
**Enviado el:** miércoles, 6 de mayo de 2020 12:48 a. m.
**Para:** Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial <ocri@Poder-Judicial.go.cr>; Karen Leiva Chavarría <kleiva@Poder-Judicial.go.cr>; Alexis Mora Cambronero <amorac@Poder-Judicial.go.cr>
**CC:** Acceso a la Justicia <accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr>
**Asunto:** RV: Cuestionario Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
**Importancia:** Alta

Estimada doña Karen:

Reciba un atento saludo. En mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Indígenas, dentro del plazo conferido, le remito cuestionario completo vinculado con la población indígena. Estaré atenta por si requieren información adicional.



**República de Costa Rica**

**Poder Judicial**

**Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales**

# **Instrucciones solicitadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN**

La información que brinde será muy valiosa para identificar los avances, lecciones aprendidas y principales nudos críticos/desafíos en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en Costa Rica.

Se solicita remitir el cuestionario con información que corresponde a la instancia que usted presenta, a más tardar el día **miércoles 06 de mayo de 2020,** a la OCRI a la dirección de correo: ocri@poder-judicial.go.cr, con copia a: amorac@poder-judicial.go.cr.

Todas las preguntas tratan sobre la vinculación del trabajo de la institución con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de no sentir vinculación puede colocar un No Aplica (N.A) y continuar con el cuestionario.

Se adjunta el Consenso de Montevideo, para mayor información puede consultar en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo>

# **Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo**

El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es el resultado de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013. Es el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de población y desarrollo y se ha transformado en una pieza fundamental del proceso de revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su seguimiento después de 2014.

De hecho, el Consenso es la expresión regional del Programa de Acción después de 2014. El amplio apoyo al Consenso de Montevideo en la región permitió que los países de América Latina y el Caribe se agruparan en torno a posiciones compartidas en foros internacionales y mostró un camino para compatibilizar el acuerdo mundial de lograr el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 con la especificidad regional.

El contenido del Consenso de Montevideo cubre todos los temas relevantes de población y desarrollo de América Latina y el Caribe y constituye la base de una carta de navegación integral y actualizada para el futuro de la acción regional en esa materia. Para transformarlo en una agenda operativa, los países de la región alcanzaron, en sucesivas reuniones, acuerdos y resoluciones sobre los procedimientos, las actividades, las responsabilidades y otras precisiones sobre el proceso de implementación del Consenso de Montevideo y el seguimiento de dicha implementación.

En Costa Rica, la Secretaría Técnica es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN. ([www.mideplan.go.cr](http://www.mideplan.go.cr/))

**Cuestionario sobre la implementación del Consenso de Montevideo**

1. ¿Previo al desarrollo de este cuestionario, conocía su organización sobre el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo?

Marca solo un óvalo.

( ) No

( X ) Sí

De conocer acerca de Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo ¿Cuáles capítulos están más vinculados con las intervenciones o acciones que realiza su organización?

Marque todos los que correspondan.

( X ) a) Integración Plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad.

( ) b) Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

( ) c) Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos.

( ) d) Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.

 ( X) e) Igualdad de género.

( X ) f) La Migración Internacional y la protección de los Derechos Humanos.

 ( X) g) Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad.

( X ) h) Pueblos indígenas: interculturalidad y Derechos.

 ( ) i) Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y discriminación racial.

¿Cuál ha sido el principal logro de su organización en la implementación de Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo durante los últimos tres años (2017-2029)?

El principal logro institucional está relacionado con la consideración de esta normativa internacional en el planteamiento del Plan Estratégico Institucional vigente; de igual forma, en la propuesta de construcción de la Política Indígena del Poder Judicial, la cual se está coordinando con MIDEPLAN considerando el Consenso de Montevideo.

¿Cuál ha sido el principal desafío de su organización en la implementación de Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo durante los últimos tres años (2017-2019)?

El principal desafío es cumplir con los compromisos que establece el Consenso de Montevideo vinculado con la población indígena y su transversalización en todo el quehacer institucional que vincula a la población indígena.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo A** sobre: Integración Plena de la población meta para el desarrollo sostenible con inclusión e igualdad? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

La integración plena de la población indígena en el Poder Judicial ha estado vinculada con la emisión de la Circular 188-19 de Corte Plena donde la jerarquía máxima institucional estableció la obligatoriedad de que las decisiones vinculadas con la población indígena sean consultadas previamente con éstas. Un segundo aspecto que podría resaltarse es la decisión de Corte Plena de dar intervención real y efectiva de dicha población en el desarrollo de actividades de capacitación institucionales.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo B** sobre: Niñez, Adolescencia y Juventud? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

No se relaciona con la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, pues hay una Subcomisión a cargo del tema.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo C** sobre: Envejecimiento y Protección Social? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

No se relaciona con la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, pues hay una Subcomisión a cargo del tema.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo D** sobre: Acceso Universal a los Servicios de Salud, Sexual y Reproductiva? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

No se relaciona con la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, pues hay una Subcomisión a cargo del tema.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo E** sobre: Igualdad de Género? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

Se solicitó expresamente al INAMU la inclusión de la Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y de la Unidad de Acceso a la Justicia en las sesiones de trabajo del Foro de Mujeres Indígenas. Además, se ha instado a la Dirección Ejecutiva para que incentive la participación de mujeres en los equipos de personas indígenas traductoras e intérpretes. De igual forma, se cuenta en la Subcomisión con una representante del INAMU y se incluye su intervención en actividades de capacitación.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo F** sobre: Migración Internacional y la Protección de los Derechos Humanos? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019). Contestar solamente si en la P35 fue seleccionado el capítulo F.

Se ha coordinado con cooperación internacional en el desarrollo de actividades de capacitación relacionadas con la población indígena migrante Gnobe.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo G** sobre: Desigualdad Territorial, Movilidad Espacial y Vulnerabilidad? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

Se han coordinado acciones con el INDER para brindar capacitación en Plan de Recuperación de Tierras Indígenas y se han realizado visitas continuas a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en atención de las medidas cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo H** sobre: Pueblos Indígenas, Interculturalidad y Derechos? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

Se solicitó a Corte Plena la aprobación de los 20 ejes de acción para la atención de los procesos vinculados con la población indígena, lográndose la aprobación de la Circular 188-19.

Se han establecido coordinaciones con la UCR para que en los procesos judiciales donde estén involucradas personas indígenas se realicen peritajes culturales, además de contar con roles de personas traductoras e intérpretes indígenas y reglas para la atención especial y prioritaria de ese tipo de procesos para garantizar el acceso a la justicia de la población indígena.

¿Qué intervenciones o buenas prácticas ha desarrollado su organización con respecto al **Capítulo I** sobre: Población Afrodescenciente: Derechos y Combate al Racismo y la Discriminación Racial? (Mencione un máximo de 2 intervenciones o buenas prácticas desarrolladas en el periodo de 2017-2019).

No se relaciona con la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, pues hay una Subcomisión a cargo del tema.

¿En la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo su organización ha establecido alianzas estratégicas con otros sectores sociales (instituciones públicas, organizaciones no estatales y Organizaciones de Sociedad Civil)?

Marca solo un óvalo.

( ) No

(X ) Sí

¿Con cuáles sectores ha establecido alianzas estratégicas? Contestar en caso de ser afirmativa la respuesta anterior.

Selecciona todos los que correspondan.

( X) Sector público

( X) Sector privado

( X) Organizaciones de Sociedad Civil

( X) Agencias de Naciones Unidas

Otro ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SE ACUERDA**: Se toma nota del informe enviado por la Coordinación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas a la OCRI.

**ARTÍCULO XVII**

Comunica la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas que fue convocada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para participar en una audiencia solicitada por la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, vinculada con la población indígena usuaria del Poder Judicial. De la sesión el Despacho de la Presidencia emitió la siguiente minuta y se realizaron los comunicados de los acuerdos a la Defensoría de los Habitantes de la República, al Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y a la Fiscalía General de la República, los cuales fueron comunicados a las personas asistentes a la sesión.

|  |
| --- |
| **I. INFORMACIÓN GENERAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Minuta:** | Ref 141-2020 |
| **Asunto de reunión:** | Moción de la Corporación Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria Acta 199-2020.  |
| **Lugar:** | 504 |
| **Fecha** | 21-04-2020 |
| **Hora inicio:** | 10:00 a.m.  | **Hora final:** | 12:00 m.d. |

|  |
| --- |
| **II. PARTICIPANTES**  |

|  |
| --- |
| **Asistentes** |
| Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de JusticiaRóger Mata Brenes, Director Despacho de la Presidencia Poder Judicial José Rojas Méndez, Alcalde Municipal de Buenos AiresFroilán Castro Valverde, Presidente del Concejo Municipal de Buenos AiresDanilo Villanueva Villalobos, AbogadoDamaris Vargas Vásquez, Magistrada de la Sala Primera y Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas |

**II. ASUNTOS**

|  |
| --- |
| **III. ASUNTOS TRATADOS** |

|  |
| --- |
| **Tema** |
| Moción de la Corporación Municipal de Buenos Aires, Sesión Ordinaria No.199-2020, celebrada el día 02 de marzo del 2020, en la cual se acordó analizar la aplicación de la Circular N-13ADM-2011 y sus consecuencias sociales, además otros temas con el objeto de mejorar la justicia y la garantía de los derechos humanos indígenas y no indígenas en el contexto de la diversidad de la población bonaerense.  |

**NTO AS**

|  |
| --- |
| **III. ACUERDOS TOMADOS** |

| **Descripción** |
| --- |
| 1-Solicitar a la Defensoría de los Habitantes que incorpore a la Municipalidad de Buenos Aires en la mesa de diálogo sobre la problemática de los territorios indígenas en la zona. 2- Se estimó conveniente procurar un acercamiento entre la Fiscalía General de la República y el señor Alcalde José Rojas Méndez, para que dentro de sus competencias constitucionales y legales, se sirva aclarar los alcances e interpretaciones en torno a la Circular N-13ADM-2011 del Ministerio Público.3-Ratificar la voluntad del Poder Judicial en participar en las reuniones de coordinación en procura de una solución de la problemática indígena en la zona de Buenos Aires. Aclarando que el rol del Poder Judicial se ve limitado a aspectos de carácter general, sin conocer casos particulares manteniendo en todo momento el principio de objetividad e independencia judicial.  |

El acuerdo Municipal que dio origen a la sesión, es el siguiente:

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Buenos Aires, Región de Culturas Aborígenes de Costa Rica, Decreto Nº. 32454-C

E-mail: jcalderon@munibuenosaires.go.cr / telefax: 2730 2422 ext. 118

“MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO POR EL CANTÓN QUE TODOS QUEREMOS”

Miércoles 04 de marzo 2020

Señor

Magistrado Fernando Cruz Castro

Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Estimado señor:

Transcribo moción de la Corporación Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria

199-2020, celebrada el día 02 de marzo del 2020, que en letra dice:

ARTICULO VIII.

Mociones del señor Alcalde.

Nombre de la Moción: Solicitud de audiencia al Presidente de la Corte Suprema de

Justicia.

Aclaratoria:

Vista la situación actual por la que atraviesa el cantón de Buenos Aires, en el marco de

los últimos hechos acaecidos en cuanto a que;

A- Por una parte una familia indígena Broram perdió uno de sus seres queridos (EI Líder

Indígena Broram Jerry Rivera Rivera), en el contexto de las acciones de recuperación de

tierras.

B- Que por otro lado también existe otra familia Indígena Boruca involucrada en estos

lamentables hechos poseedores de dichas tierras.

C- Que esta es una realidad innegable en este cantón Indígena como lo es Buenos Aires

en la que de uno o de otro lado se les debe garantizar los Derechos Humanos y el debido

proceso.

D- Que la circular N-13adm-2011\_ que se aplica para atender las acciones de

recuperación, pone en peligro confusiones tales como se dio en el caso de la muerte de

Jerry Rivera y genera un mayor caos social en la que se deja solo al gobierno local en la

que luego el estado no ofrece soluciones inmediatas. Y que en muchos casos ha pasado

por encima de la autonomía municipal.

E-De acuerdo al Decreto 32454-C del 27 de mayo del 2005 Artículo 1°-Declarese el

cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas como Región de las Culturas

Aborígenes de Costa Rica. Y por lo tanto el Cantón Buenos Aires debe atenderse en

forma diferenciada a los demás cantones por las siguientes razones:

1°-Que en el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, habitan pueblos

pertenecientes a cinco de las ocho etnias indígenas del país, a saber: Bribris,

Cabeceares, Borucas, Nobes y Teribes o Térrabas.

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Buenos Aires, Región de Culturas Aborígenes de Costa Rica, Decreto Nº. 32454-C

E-mail: jcalderon@munibuenosaires.go.cr / telefax: 2730 2422 ext. 118

“MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, TRABAJANDO POR EL CANTÓN QUE TODOS QUEREMOS”

Página 2-

Moción de la Corporación Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria 199-2020,

celebrada el día 02 de marzo del 2020.

2°-Que la presencia de asentamientos indígenas en el territorio de dicho cantón se

remonta, en la mayoría de los casos, a tiempos inmemoriales.

3°-Que las tradiciones culturales aborígenes forman parte del paisaje natural, humano y

Social del cantón.

4°- Que según el censo 2011, el 35% de los indígenas viven dentro de los territorios y el

65% de los indígenas viven fuera de los territorios, lo que vuelve más complejo el contexto

de la sociedad bonaerense.

5°-Que la identidad cultural del cantón de Buenos Aires se encuentra estrechamente

ligada a la presencia de las culturas indígenas, tanto en lo que respecta a su pasado

precolombino como en la actualidad lo que convierte a esta Municipalidad en un Gobierno

Local mixto indígena.

POR LO TANTO

Solicitamos con carácter de urgencia una audiencia con su autoridad con el fin de analizar

la aplicación de la Circular N-13ADM-2011 y sus consecuencias sociales, además otros

temas con el objeto de mejorar la justicia y la garantía de los derechos humanos

indígenas y no indígenas en el contexto de la diversidad de la población bonaerense.

SE ACUERDA: Acoger moción por Froilán Alberto Castro Valverde, Carol Yislenia Zapata

Zapata, William Vega Valverde, David Badilla Rodríguez, Jonathan Espinoza Vargas y

Elieth López Cortés.

SE ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión.

SE ACUERDA: Aprobar moción. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE

APROBADO.

Sin más por el momento, suscribe,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Licda. Juanita Calderón Bustamante

SECRETARIA a.i

C: Alcaldía

Archivo

**SE ACUERDA**: Se toma nota.-

**ARTÍCULO XVIII**

Se comunica que la señora Indira Alfaro Castillo, de la Oficina de Control Interno, remitió comunicado electrónico del 30 de marzo de 2020, en el que señala: “Dada la emergencia presentada por el COVID-19, por lo cual no podremos las sesiones de trabajo y reuniones, como lo hicimos con el trabajo de agrario y fue muy provechoso, me gustaría que viera este borrador de mi trabajo en lo solicitado con respecto a la población indígena. Me gustaría me indique, que podríamos mejorar o que debemos excluir dado un seguimiento que usted solicitó del cumplimiento de los 20 ejes. Además, le comentó que le pedí información a los compañeros Jean Carlo Monge Juez, Ariana Céspedes, Fiscal, Ligia Jiménez, Defensora Pública, así como también Carlos Romero, Contralor, sobre algunos controles que manejan. Quedo a la espera de su oportuna respuesta, Indira”.

La propuesta es la siguiente:

**PROPUESTA**

**Acciones de mejora vinculadas a la población indígena~~[[1]](#footnote-2).~~**

**Componentes funcionales**

1. **Ambiente de Control**

La Ley General de Control interno lo define como: “conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa.” Un aspecto de interés incluido en este informe es el siguiente:

* 1. **Capacitación[[2]](#footnote-3)**

Se considera oportuno mencionar que la norma 2.1 referente al Ambiente de Control, indica que el jerarca, así como a las y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del SCI, mediante el mantenimiento de personal comprometido y con competencia profesional para el desarrollo de las actividades y contribuir con el logro de los objetivos

Desde la Subcomisión de Asuntos Indígenas, se encuentran realizando grandes esfuerzos, con el fin de implementar varios proyectos de capacitación en coordinación con la Escuela Judicial y Unidades de Capacitación institucionales.

Actualmente se han emitido una serie de lineamientos internos entre ellos los 20 Ejes de Acción aprobados por Corte Plena en sesión N°20-19 del 27 de mayo de 2019, articulo XIX, con el fin de dar cumplimiento a una serie de actividades de mejora que coadyuvarán con el trato en los procesos vinculados con la población indígena. Una de esas propuestas de mejora es dar cumplimiento a capacitaciones dirigidas a los servidores judiciales sobre la historia, costumbres, formas de tenencia y de transmisión de la tierra, entre otros datos de interés, que incidan en la solución de los conflictos indígenas. Además de buscar la priorización del personal judicial que, con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, incluyendo a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Eje/~~**~~Control~~** | Actividad (porque es necesario) | **Acciones de mejora (como mejorar)** | Fundamento Legal | Responsable del cumplimiento |
| **Establecer control de personal capacitado y asociados a personas indígenas.** | Elaborar un control de personal capacitado y asociados a personas indígenas. | Llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión.Inclusión de los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas. |  | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasEscuela JudicialCentro de apoyo a la función jurisdiccionalUnidades de capacitación (OIJ, MP, DP).Jefaturas de despachos u oficinas judiciales responsables.  |

1. **Valoración del riesgo:**

Uno de los componentes funcionales de la normativa de Control Interno que corresponde a la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y la comunicación de los riesgos, con el fin del logro de los objetivos institucionales.[[3]](#footnote-4)

| **~~Eje/~~****~~Control~~** | **Actividad (porque es necesario)** | **Acciones de mejora (como mejorar)** | **Fundamento Legal** | **Responsable del cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación y análisis de riegos **(Matriz del SEVRI)** | Realizar el proceso de valoración integral de los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas vinculadas con la población indígena, establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2019/2024.  | Validar la información obtenida en el SEVRI, especialmente los riesgos identificados y las acciones de respuesta ​Implementar las medidas de control ​establecidas según los riesgos identificados​. Documentar y establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones con relación a la tramitación y resolución de los procesos judiciales en los que sean parte ​personas indígenas, priorizando las que sean miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre. ​Utilizar la información recopilada como insumo para la toma de decisiones, ​procurando que las acciones ​establecidas contribuyan a lograr que el nivel de riesgo organizacional en este tema sea aceptable. | Artículos 14 y 19 de la Ley General de Control Interno, las normas 3.1 y 3.2 del Manual de Normas de Control Interno para el sector público y la circular No. 99-09 de la Secretaría General de la Corte, publicada en el Boletín Judicial No. 188 del 28 de setiembre del 2009.Aplicación de la metodología SEVRI aprobada. | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasCONAMAJ (justicia abierta)Justicia Restaurativa.Jefaturas de despachos u oficinas judiciales responsables[[4]](#footnote-5)Dirección de Planificación |

1. **Actividades de Control**

Es uno de los cinco componentes funcionales de la normativa de Control Interno, se contempla el conjunto de factores del ambiente organizacional que se deben establecer y mantener para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el Control Interno, además, de propiciar un apropiado proceso de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Además, estas normas i

se interrelacionan y regulan el cumplimiento del Sistema de Control Interno

| **~~Eje/~~****~~Control~~** | **Actividad (porque es necesario)** | **Acciones de mejora (como mejorar)** | **Fundamento Legal** | **Responsable del cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atención preferencial a la persona indígena | Se debe atender a todas las personas indígenas en todas las materias, de acuerdo con sus necesidades, en atención a los pueblos indígenas de Teribe y Bribri de Salitre. | Utilizar una carátula[[5]](#footnote-6) con color (según color designado) para identificar los expedientes judiciales vinculados con la población indígena, específicamente en las materias de impacto social tales como: laboral, violencia doméstica, familia, y pensiones alimentarias, entre otras. Además, se les solicita a los servidores y servidoras judiciales procurar un trato igualitario en la tramitación y resolución de los procesos en que sea parte la población indígena. En los casos de expedientes físicos se requiere habilitar una casilla especial para el trámite ágil y la resolución de los expedientes judiciales en que intervenga una persona indígena. | CIRCULAR N° 4-2019, emitida por el la Defensa Pública.Circulares por acuerdo del Consejo Superior N°61-08,  | JefaturasServidores judiciales |
| Realización de diligencias in situ. | La ley establece que en casos de personas indígenas, las audiencias deban llevarse en cabo en los propios territorios indígenas.  | Las Autoridades Judiciales promoverán la realización de diligencias in situ, en aquellos lugares donde existan territorios indígenas[[6]](#footnote-7)Se debe fijar los señalamientos de las audiencias y juicios dentro de un horario accesible, contemplando las particularidades de cada zona.Debe llevarse un control en el que se indique cuantos casos de personas indígenas han ingresado y en cuántos se han efectuado ese tipo de diligencias.[[7]](#footnote-8) | Acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión 77-08, celebrada el 14 de octubre de 2008. Artículo XLI.Circular No. 10-09. Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las PoblacionesIndígenas.Protocolo para la realización de audiencias in situ en territorios indígenas | Los y las jueces, así como los y las funcionarios (as) judiciales .Juez o Jueza Coordinadores Coordinadores Judiciales |
| Prioridad a las personas indígenas que se apersonen a los despachos judiciales. | El personal judicial deberá dar prioridad a los procesos con personas indígenas que se apersonen a los despachos judiciales. | Los y las jueces, así como los y las funcionarios (as) judiciales darán prioridad de trato a las personas indígenas que se apersonen a los despachos judiciales.Las limitaciones que la persona usuaria podría experimentar en cuanto al idioma, de forma tal que el despacho determine si la persona indígena requiere el acompañamiento de un intérprete.creo que lo más importante es que los distintos juzgados que atienden población indígena, desarrollen una comunicación directa con grupos representativos de cada territorio, para de esta forma conocer más sobre las condiciones en que dicha población vive, pero sobre todo las necesidades en las que el Poder Judicial puede ir trabajando para ofrecer un mejor acceso a la justicia. trato digno y respetuoso que se le debe dar a las personas que pertenecen a ese tipo de población.  |  | Los y las jueces, así como los y las funcionarios (as) judiciales |
|  |  |  |  |  |
| Cumplimiento de Medidas Cautelares[[8]](#footnote-9) | Garantizar la seguridad y la vida de los integrantes del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre. | Informar sobre las Medidas Cautelares que ya se han adoptado. para investigar los presuntos hechos.[[9]](#footnote-10)Realizar sesiones de trabajo en los territorios indígenas en coordinación con personas traductoras.[[10]](#footnote-11) | Aplicación de las Medidas Cautelares N 321-12 del 30 de abril de 2015 establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica. | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasJefaturas de despachos u oficinas judiciales responsables.  |
| Reuniones periódicas con la presentación de informes de avances. | Informar a miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre beneficiarias de las medidas cautelares de la CIDH  | Realizar sesiones periódicas en las que se informe sobre los avances alcanzados de las medidas cautelares a miembros del pueblo indígena beneficiarias.Nuevamente es importante insistir en el tema de las visitas a las comunidades indígenas, pues es necesario que los despacho publiciten los derechos y garantías que cubren a la población indígena. En caso de efectuarse esas visitas bien podría pensarse en una pequeña charla o taller informativo con el que brinde ese tipo de información. |  | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasDespacho de la PresidenciaConsejos de AdministraciónOficinas y despachos responsables según zona. |
| Cumplimiento de normativa vigente. | Acatamiento de la normativa vigente en procesos judiciales en los que actúen personas indígenas de Teribe y Bribri de Salitre. | Promover documentar, actualizar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de control que garanticen el fortalecimiento del SCI. Mejorar el desempeño de las funciones vinculadas con los procesos judiciales en los que intervengan personas indígenas. | Articulo N°15 Actividades de Control, inciso a. Ley de Control Interno. Documentar, mantener actualizados y divulgar las políticas, normas y procedimientos de control que garanticen el fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional. | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasSecretaria General de la CorteContraloría de ServiciosDepartamento de Prensa y comunicación Despacho de la Presidencia.Jefaturas de despachos u oficinas judiciales responsables. Inspección Judicial  |
| Cumplimiento y regulaciones internas dirigidas al personal judicial | Circulares dirigidas a todas las personas servidoras judiciales que tramiten procesos judiciales vinculados en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre | Elaboración y cumplimiento de circulares dirigidas a todas las personas servidoras judiciales que tramiten procesos judiciales vinculados con la población indígenaFacilitar intérpretes u otros medios eficaces para la compresión en los procedimientos legales iniciados.Facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales, o a los organismos encargados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales.Otorgamiento de una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población en general y que conforman su identidad cultural, sus características económicas y sociales, su posible situación de vulnerabilidad, entre otros. | Reiterar el deber de ser garantes del acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas, la no discriminación y eliminación de barreras.[[11]](#footnote-12) | Consejo Superior Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasSecretaria General de la CorteDepartamento de Prensa y comunicación CONAMAJ (justicia abierta) (A través de los facilitadores) valorarJefaturas de despachos u oficinas judiciales responsables.  |
| Indicadores institucionales[[12]](#footnote-13) | Inclusión de indicadores en los procesos judiciales vinculados con personas indígenas.  | Establecer en las estadísticas institucionales indicadores que visibilicen los procesos judiciales que estén vinculados con personas indígenas.Se debe incorporar datos de interés que sirva de insumo importante para la toma de decisiones.* Estadísticas de procesos con personas usuarias indígenas.
* Estadísticas de las sentencias donde alguna de las personas intervinientes sean personas indígenas.
* Estadísticas de las personas funcionarias judiciales indígenas, y de esta forma incorporar como una acción afirmativa la contratación de personas indígenas de los diferentes pueblos indígenas.
 | Los indicadores, permiten dar seguimiento al desempeño de la oficina, logrando información necesaria para la toma de acciones tanto preventivas como correctivas en busca de la mejora continua. | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasDirección de PlanificaciónJefaturas de despachos u oficinas judiciales responsables.  |
| Actualización de convenios interinstitucionales | Incluir a la Facultad de Derecho y la Escuela de Antropología para fortalecer el programa de peritajes culturales y de capacitaciones a las personas servidoras judiciales. | Establecer acciones conjuntas con otras Escuelas de la UCR que puedan ofrecer insumos importantes en los peritajes culturales. |  | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.Universidad de Costa RicaFacultad de Derecho, Escuela de AntropologíaEscuela JudicialUnidades de capacitación (OIJ, MP, DP)Despacho de la Presidencia |
| Brindar protección y seguridad a las personas indígenas | Analizar opciones para brindar protección y seguridad a las personas indígenas beneficiarias de las medidas cautelares, dentro de sus territorios y acordes a sus costumbres. | Valorar la protección y seguridad a las personas indígenas beneficiarias de las medidas cautelares, dentro de sus territorios y acordes a sus costumbres |  | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas |

1. **Sistema de Información**

| ~~Eje/~~**~~Control~~** | Actividad (porque es necesario) | **Acciones de mejora (como mejorar)** | Fundamento Legal | Responsable del cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Gestión documental institucional** | Se debe contar con un sistema de información en relación con la tramitación y resolución de los procesos judiciales vinculados en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre. | Establecer un sistema de información que permita tener una gestión documental institucional en relación con la tramitación y resolución respecto a procesos judiciales vinculados a la población indígena.El sistema de información debe permitir que la información institucional se debe almacenar, recuperar de manera oportuna y eficiente.  | Normativa 5.4 Gestión documental. Ley de Control Interno.[[13]](#footnote-14) | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasDirección de Tecnología de la información.Dirección de Planificación |
| **Identificar los expedientes de las personas indígenas** | Lograr que se identifiquen en los sistemas de información institucionales los expedientes en los cuales sean parte las personas indígenas | Establecer en los sistemas de información institucional el color que se disponga que identifique a las personas usuarias indígenas en los procesos con, con el fin de priorizar la atención en todos los despachos. | Acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión 77-08, celebrada el 14 de octubre de 2008. Artículo XLI.CIRCULAR No. 10-09. Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las PoblacionesIndígenas. | Consejo SuperiorSecretaria de la CorteSubcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasDTISecretaria General de la CorteDepartamento de Prensa y comunicación  |

1. **Seguimiento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Eje/~~**~~Control~~** | Actividad (porque es necesario) | **Acciones de mejora (como mejorar)** | Fundamento Legal | Responsable del cumplimiento |
| **Medidas de seguimiento** | Con el fin de medir el impacto de las capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales. | Establecer un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de capacitaciones y contar con una evaluación de resultados de la capacitación judicial en el desempeño laboral. |  | Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos IndígenasEscuela JudicialUnidades de capacitación (OIJ, MP, DP)Dirección de Planificación |

**SE ACUERDA:** 1° Se toma nota de la propuesta de controles mínimos vinculados con la temática indígena que deben llevar los despachos judiciales, planteada por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena. 2° Se confiere audiencia a las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas para que se pronuncien en el plazo de 5 días y remitan sus sugerencias para la construcción del documento. 3° Comunicar este acuerdo a la Unidad de Control Interno y las personas integrantes de la Subcomisión por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTICULO XIX**

La señora Patricia Bonilla, Jefa del Centro de Información Jurisprudencial, remitió informe de avances realizados con ocasión de la coordinación realizada con el Dr. Marco Guevara Céspedes de la UCR, el juez Jean Carlo Céspedes del Juzgado Mixto de Buenos Aires de Puntarenas, la jueza Penal de Bribri señora Yolanda Alvarado Vargas y la magistrada Damaris Vargas Vásquez, acerca de la ejecución del acuerdo del Consejo Superior vinculado con la administración de la información contenida en los peritajes culturales insertos en los procesos judiciales para el resguardo de su privacidad y uso permitido de éstos para capacitaciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos dispuestos en la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Refiere, contó con el aporte del juez penal del II Circuito Judicial de San José, Jean Carlos Monge y la señora Ligia Jiménez, Defensora Pública Indígena.

**SE ACUERDA**: Se toma nota. Estar a la espera de que el Dr. Marcos Guevara Berger, representante de la Universidad de Costa Rica, se integre.

**ARTICULO XX**

Comunica la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas que la Cancillería le solicitó un informe de avances en el cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado; y el asesinato del líder indígena Jerhy Rivera Rivera, en la comunidad indígena de Térraba. Señala, solicitó información a las principales jefaturas institucionales sobre los avances, las que contestaron debidamente, datos que fueron incorporados al informe enviado. El informe se envió dentro del plazo conferido con copia a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el Despacho de la Presidencia, la Comisión de Acceso a la Justicia, Fiscalía General y Organismo de Investigación Judicial.

**De:** Damaris Vargas Vásquez
**Enviado el:** martes, 21 de abril de 2020 2:58 a. m.
**Para:** Natalia Cordoba Ulate <ncordoba@rree.go.cr>; direccion.juridica.rree@gmail.com
**CC:** Presidencia de la Corte <presidencia@Poder-Judicial.go.cr>; Despacho de la Presidencia de la Corte <despacho\_pre@Poder-Judicial.go.cr>; Fiscalía General <fgeneral@Poder-Judicial.go.cr>; Organismo de Investigación Judicial <oij@Poder-Judicial.go.cr>; Acceso a la Justicia <accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr>; Subcomisión de Pueblos Indígenas <spindigenas@Poder-Judicial.go.cr>; Fernando Cruz Castro <fcruz@Poder-Judicial.go.cr>; Roger Mata Brenes <rmata@Poder-Judicial.go.cr>; Emilia Navas Aparicio <enavas@Poder-Judicial.go.cr>; Walter Espinoza Espinoza <wespinoza@Poder-Judicial.go.cr>; Víctor Andrés Guzmán Rodriguez <vguzman@rree.go.cr>; Marianela Campos Soto <mcamposs@Poder-Judicial.go.cr>
**Asunto:** Informe a Cancillería sobre avances en el cumplimiento de las MC 321-12 de la CIDH contra el Estado por el Poder Judicial y otro

**Señora**

**Máster Natalia Córdoba Ulate**

**Directora Jurídica**

**Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto**

**Estimada Señora:**

Sirva el presente para externarle un saludo muy respetuoso y cordial desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial. En esta ocasión, tengo el agrado de dirigirme a usted, a efecto de enviar el Oficio N° DVV-S1-054-2020 que es informe pedido por la Cancillería acerca de los datos solicitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con “el asesinato del líder indígena Jerhy Rivera Rivera, en la comunidad indígena de Térraba”, en seguimiento de la videoconferencia que se señala, se realizó el 25 de febrero de 2020, entre la CIDH y altas autoridades del equipo interinstitucional en la Cancillería.

De igual forma, se brinda información sobre la petición adicional vinculada con las medidas y acciones que se han tomado desde el Poder Judicial sobre las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, para proteger los derechos y libertades de las personas indígenas. Lo anterior, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 41131-RE del 10 de abril de 2018 que “Declara de interés público los trabajos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de la dirección jurídica en la defensa del Estado Costarricense ante el Órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Atentamente,

Magistrada Damaris Vargas Vásquez

Coordinadora

Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

**SE ACUERDA**: Se toma nota.-

**ARTÍCULO XXI**

El Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado Rector de Justicia Restaurativa, comunicó mediante Oficio 80-DNJR-20, de 4 de mayo de 2020, lo siguiente:

“04 de mayo del 2020

No. 80-DNJR-20

Msc. Melissa Benavides

Comisión de Acceso a la Justicia

Poder Judicial

Estimada doña Melissa:

Reciba un atento saludo.

Por este medio me es grato referirme al oficio CCAC-156-2020, mediante el cual nos traslada la comunicación electrónica remitida por la representante legal de Forest People a la Presidencia de la República en la que se informa sobre la carta de varias organizaciones no gubernamentales, reunidas en Ginebra, para discutir el tema de los defensores de derechos y ambiente, concretamente sobre la violencia reciente en territorios indígenas en Buenos Aires.

En ese sentido, respetuosamente, me permito comunicarle que dentro del marco de actuación que nos fija la Ley de Justicia Restaurativa, no incluye la temática sujeta a consulta, por lo que en esta oportunidad, no podemos emitir nuestro criterio.”

**SE ACUERDA:** Se toma nota.-

**ARTÍCULO XXII**

La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, mediante correo electrónico remitió para conocimiento de los integrantes de esta Comisión las propuestas de campañas planteadas por la señora Stephannie Phillips Asch del Departamento de Prensa, que contiene las sugerencias hechas al planteamiento inicial por algunas de las personas integrantes, así como propuesta de campaña del Plan de Acción. Se les solicitó remitieran sus sugerencias en el plazo de 3 días.

Al respecto en correo del 11 de mayo la Licda. Cheryl Bolaños Madrigal, presenta sus observaciones al señalar:

 *“Mis recomendaciones sobre la campaña tienen que ver con lo siguiente:*

1. *El envío de cápsulas informativas por correo tiene sus limitaciones. La totalidad de las personas no las verá por la saturación de correos e información a la que se ve expuesta la población judicial. Lo ideal es que esta sea una alternativa de varias, es decir, solicitaría a Prensa que nos indique qué otros canales podrían utilizarse que vayan más allá del envío de correos masivos.*
2. *Por otro lado, es mucha información, considero que se defina el objetivo de la información; si es el conocimiento de la Ley, limitemos a eso y luego hacemos otra campaña sobre los otros temas.*
3. *Se debe mejorar profundamente el diseño de esa campaña que genere un mayor impacto visual y sugiero mejorar el uso del color que le dé más vida a las cápsulas.*
4. *Para terminar hay mucha información que va dirigida a poblaciones específicas como son las personas juzgadoras, sugiero buscar canales dirigidos a esas personas para hacer la divulgación a esas poblaciones que son críticas en la aplicación de esta ley.*

*Saludos.”*

Doña Cheryl señala que en su criterio la campaña contiene exceso de información; además, hay que buscar otras opciones aparte de la campaña, con las limitaciones generadas por la pandemia. Así mismo, hizo sugerencias sobre la presentación misma, los colores u otros aspectos que nos garanticen le llegue a la población meta. Utilizar otras formas de comunicación de la Judicatura y otros sectores. Al final se pasó a Prensa la línea gráfica del curso virtual.

**SE ACUERDA:** Se toma nota. Solicitar a la Dirección de Gestión Humana remita a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas la línea gráfica que se utilizó para la realización del curso virtual a fin de valorar utilizarla o hacerle ajustes con ocasión de las demás actividades vinculadas con población indígena. Comunicar este acuerdo a la Dirección de Gestión Humana por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTÍCULO XXIII**

La Máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información remite oficios 495-DTI-2020 y 495-DTI-2020, ambos del 3 de marzo que literalmente indican:

**499-DTI-2020**

03 de marzo 2020

**Magistrada**

**Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora**

**Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas**

Estimada señora:

En atención al oficio 6418-19, en el que se transcribe el acuerdo tomado por Corte Plena en su sesión 25-19, artículo II, en el cual se expone el Informe Ejecutivo sobre el cumplimiento de las Medidas Cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica, me permito remitir el oficio 495-DTI-2020, suscrito por las Licenciadas Karla Urtecho Madrigal y Vivian Rímola Soto, Jefas del Subproceso de Sistemas Administrativos y Subproceso de Sistemas Jurisdiccionales, respectivamente, mediante el cual solicitan se aclaren algunas observaciones para poder cumplir con los ejes que competen a esta Dirección.

Esta Dirección queda a su disposición para lo que estime pertinente.

Atentamente,

**Kattia Morales Navarro**

**Dirección de Tecnología de la Información**

**-0-**

 495**-DTI-2020**

San José, 03 de marzo de 2020

**MBA**

**Kattia Morales Navarro, Directora,**

**Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones**

**S. D.**

Estimada señora:

En respuesta al oficio N°6418-19, donde se trascribe el acuerdo tomado por Corte Plena, en la sesión N°25-19, celebrada el 24 de junio del año en curso, donde se expone el informe ejecutivo sobre el cumplimiento de las Medidas Cautelares N 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica y aprobar los 21 ejes de acción para ser desarrollados por diferentes instancias del Poder Judicial, es necesario para la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones se aclaren las siguientes observaciones para poder cumplir con los ejes que le competen:

* Con respecto al eje número 4, donde se solicita un sistema de información que permita establecer la gestión documental institucional, se consultó a la oficina de Acceso a la Justicia si es posible implantar en dicha oficina el Sistema Integrado de Gestión Documental (SICE), el cual permite llevar el control documental de la oficina y por ende de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas. En caso de recibir una respuesta positiva se procederá con la capacitación y definición de datos como usuarios, tipos de documentos, entre otros aspectos necesarios para dicha implantación.
* Con respecto al eje número 5, donde se solicita incluir en las estadísticas institucionales indicadores que visibilicen los procesos judiciales que estén vinculados con personas indígenas, incorporando información relativa a los pueblos relacionados, los territorios, entre otros datos de interés para la toma de decisiones. Actualmente los sistemas permiten registrar e identificar cuando un interviniente es una persona indígena, adicional se está en desarrollo de mejoras en los sistemas que permita registrar la información de pueblos y territorios y actualmente es posible generar reportes de las causas con intervinientes con estas características, por lo que se solicita se detalle cuáles serían los “otros datos de interés” para la toma de decisiones.

Además, es importante señalar que la Dirección de Planificación es la encargada de planear, diseñar y construir indicadores, por lo que quedamos a la espera de los insumos de los indicadores necesarios por parte de ellos para proceder con la construcción de estos.

* En cuanto al eje número 7, priorización de los procesos judiciales en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre, actualmente, los sistemas generan alertas y avisos cuando en un expediente judicial está involucrado una persona indígena, por lo que se solicita indicar si esta alerta satisface los requerimientos para la priorización de los procesos judiciales o son necesario otros mecanismos, en tal caso indicar el detalle de lo requerido o bien el contacto de la persona con quien se podría aclarar el tema.
* Con respecto al eje número 13, donde se solicita llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión, se está realizando en este momento un proceso de integración entre el Sistema de Gestión Humana y el Sistema SAGA (utilizado por la Escuela Judicial para el control de capacitaciones), con el objetivo de mantener centralizada toda la información de capacitaciones que se imparten en la institución y que posteriormente se pueda tomar en cuenta en los procesos de reclutamiento y en la evaluación del desempeño de ser necesario.

Sin más por el momento,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Msc. Vivian Rímola Soto** **Jefa a.í. Subproceso Sistemas Jurisdiccionales****Dirección Tecnología Información y Comunicaciones.** |  | **Lic. Karla Urtecho Madrigal** **Jefa, a.í. Subproceso Sistemas Administrativos****Dirección Tecnología Información y Comunicaciones** |

Se atiende informe de la integrante Cheryl Bolaños sobre los avances realizados en el equipo de trabajo que se ocupa de ese tema e indica que el sistema de GH incluye no solo sus propias capacitaciones sino además, de las Unidades de Capacitación de Ministerio Público, sector Administrativo y de la Defensa Pública, no así del OIJ.

La señora Melissa Benavides informa que la Comisión de Acceso a la Justicia tomó el acuerdo el jueves 4 de junio pasado para que los asuntos de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se lleven mediante el sistema SICE.

**SE ACUERDA: 1°** Se toma nota de los Oficios 495-DTI-2020 y 495-DTI-2020, ambos del 3 de marzo, remitidos por la señora Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información, en atención al Oficio 6418-19, en el que se transcribe el acuerdo tomado por Corte Plena en su sesión 25-19, artículo II, en el cual se expone el Informe Ejecutivo sobre el cumplimiento de las Medidas Cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica. 2° En seguimiento de las aclaraciones solicitadas por la Dirección de Tecnología de la Información, al señalar: *“Con respecto al eje número 4, donde se solicita un sistema de información que permita establecer la gestión documental institucional, se consultó a la oficina de Acceso a la Justicia si es posible implantar en dicha oficina el Sistema Integrado de Gestión Documental (SICE), el cual permite llevar el control documental de la oficina y por ende de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas. En caso de recibir una respuesta positiva se procederá con la capacitación y definición de datos como usuarios, tipos de documentos, entre otros aspectos necesarios para dicha implantación.”*, se le informa que la Subcomisión de Acceso a la Justicia hizo de conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia la anuencia de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de utilizar la herramienta institucional SICE, quedando a la espera de la decisión que se tome desde dicha Comisión. 3° Sobre la consulta vinculada al eje número 5, donde se solicita *”incluir en las estadísticas institucionales indicadores que visibilicen los procesos judiciales que estén vinculados con personas indígenas, incorporando información relativa a los pueblos relacionados, los territorios, entre otros datos de interés para la toma de decisiones. Actualmente los sistemas permiten registrar e identificar cuando un interviniente es una persona indígena, adicional se está en desarrollo de mejoras en los sistemas que permita registrar la información de pueblos y territorios y actualmente es posible generar reportes de las causas con intervinientes con estas características, por lo que se solicita se detalle cuáles serían los “otros datos de interés” para la toma de decisiones.”,* se le informa que la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas está en la mayor disposición de recibirles en una audiencia para definir los datos que la Dirección de Planificación requiere, con la indicación de que en este país existen 8 pueblos indígenas ubicados en 24 territorios indígenas y la participación en los procesos judiciales es individual o bien, por medio de sus organizaciones representativas incluyendo las Asociaciones de Desarrollo Integral. 4° En relación con la indicación de la Dirección de Planificación de que *“es importante señalar que la Dirección de Planificación es la encargada de planear, diseñar y construir indicadores, por lo que quedamos a la espera de los insumos de los indicadores necesarios por parte de ellos para proceder con la construcción de estos.”,* se dispone trasladar a la Dirección de Planificación lo señalado con el objetivo de que, en cumplimiento de la Circular 188-19, brinde la asesoría y colaboración necesarios para planear, diseñar y construir indicadores, los cuales constituyen insumos necesarios a fin de que la Dirección de Tecnología de la Información continúe con el proceso. 5° Sobre la consulta formulada vinculada al eje número 7 en la que indica: *“priorización de los procesos judiciales en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre, actualmente, los sistemas generan alertas y avisos cuando en un expediente judicial está involucrado una persona indígena, por lo que se solicita indicar si esta alerta satisface los requerimientos para la priorización de los procesos judiciales o son necesario otros mecanismos, en tal caso indicar el detalle de lo requerido o bien el contacto de la persona con quien se podría aclarar el tema.”,* se le solicita a la Dirección de Tecnología de la Información colaboración para que las alertas sean más efectivas de acuerdo a sus experticias mediante la automatización de datos. Además, solicitar a la DTI la creación de una alerta especial, aparte de la ya existente, en el caso de procesos judiciales en los que intervengan personas indígenas beneficiarias de las medidas cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, que permita la trazabilidad de esos procesos para verificar se les de la prioridad respectiva en la tramitación y resolución. 6° Respecto a la consulta vinculada con el eje número 13, donde se solicita *“llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión, se está realizando en este momento un proceso de integración entre el Sistema de Gestión Humana y el Sistema SAGA (utilizado por la Escuela Judicial para el control de capacitaciones), con el objetivo de mantener centralizada toda la información de capacitaciones que se imparten en la institución y que posteriormente se pueda tomar en cuenta en los procesos de reclutamiento y en la evaluación del desempeño de ser necesario.”,* se dispone que en los datos integrados se incluyan las capacitaciones de las Unidades de Capacitación del OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y sector Administrativo sobre indígenas. 7**°** Solicitar a la Dirección de Tecnología brinde capacitación para que desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se siga llevando los informes por medio de SICE y la reactivación de la dirección electrónica de la Subcomisión que en su momento fue eliminada.-

**ARTÍCULO XIV**

La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, mediante correo electrónico remite para conocimiento de los integrantes de esta Comisión el oficio 4320-2020 que transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 37-2020 celebrada el 16 de abril de 2020, que literalmente dice:

+

**“Señora Magistrada**

**Dra. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora**

**Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**

**Estimada señora:**

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión **N° 37-2020** celebrada el **16 de abril de 2020,** que literalmente dice:

## “ARTÍCULO XXXVI

**Documento N° 1810-2020 / 4225-2020.**

La doctora Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, remitió el oficio N° DVV-SI-0050-2020 de 3 de abril de 2020, a saber:

“Reciban un atento saludo. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas para solicitarles que tanto Corte Plena como el Consejo Superior, en las directrices que emitan en relación con la realización de audiencias judiciales en territorios indígenas, consideren los lineamientos establecidos en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas” diseñado por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Salud.

La realización de audiencias en territorios indígenas por parte de las personas servidoras judiciales deben ser coordinadas previamente con los Comités de Salud Comunitarios, activos en cada uno de los 24 territorios indígenas, cuyos contactos constan en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas”.

Para tal efecto, solicito se socialice lo antes posible el Plan en referencia con todas las personas servidoras judiciales.

Estoy a su disposición de requerir información adicional.”



- 0 –

Indica la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva: “Sería comunicarlo mediante una circular.”

-0-

**Se acordó:** Acoger la solicitud presentada en oficio N° DVV-SI-0050-2020 del 3 de abril de 2020, suscrito por la doctora Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en consecuencia, autorizar la publicación de una circular en la que se haga de conocimiento de las personas servidoras judiciales los  lineamientos establecidos en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas” diseñado por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Salud.

La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines correspondientes**.**”

**Atentamente,**

**Lic. Carlos T.  Mora Rodríguez**

**Subsecretario General Interino**

**Corte Suprema de Justicia”**

**-0-**

El lunes 11 de mayo la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, mediante correo electrónico remitió al Presidente de la Corte y al Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia el oficio VPDC-229-2020, suscrito por el señor Ministro Randall Otárola Madrigal, Viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de Presidencia de la República de Costa Rica , que indica:

**“Señor**

**Dr. Fernando Cruz Castro**

**Presidente Corte Suprema de Justicia**

**Señor**

**Dr. Jorge Olaso Álvarez**

**Coordinador Comisión de Acceso a la Justicia**

**Estimado Señores:**

Remito para su conocimiento el Oficio VPDC-229-2020 fechado 8 de mayo de 2020 dirigido por el señor Ministro Randall Otárola Madrigal, Viceministro en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica al señor David Hinkley, quien se indica es activista de derechos humanos y activista de derechos humanos y ex funcionario de Amnistía Internacional USA, con ocasión de una consulta que le fuera enviada el 23 de abril pasado. En el documento se informa en el idioma inglés, lo siguiente, lo cual es una traducción personal, no oficial:

“Espero que esta respuesta le encuentre bien, ya que me gustaría abordar sus inquietudes territorios indígenas expresados en su correo electrónico del 23 de abril de 2020.

Sobre la primera pregunta, estos son los cuatro desalojos ejecutados:

1) Rafael Salazar: Fecha de ejecución: 10 de junio de 2019.

2) Rafael Rojas: Fecha de ejecución: 10 de junio de 2019.

3) Gerardo Noguera: Fecha de ejecución: 3 de diciembre de 2019.

4) Ronald Lezcano: Fecha de ejecución: 3 de diciembre de 2019.

Los cuatro desalojos tuvieron lugar en el Territorio Indígena de Salitre.

Sobre la segunda pregunta que hizo en su correo electrónico. Aquí en Costa Rica, el poder democrático se ha dividido en tres poderes diferentes. El ejecutivo (Presidencial), el parlamentario (conocido como "Asamblea Legislativa") y el Judicial (Jueces y enjuiciamientos). Cada poder tiene un nivel de independencia y autonomía que garantiza la sostenibilidad del poder democrático. La información usted nos está pidiendo que proporcionemos, son en muchos casos, en el proceso de conocimiento de la Jueces y pendientes de juicio o incluso, en la investigación inicial. Sin embargo, puede escribir a esta dirección de correo electrónico dvargas@poder-judicial.go.cr, que estamos copiando en esta carta también. Para llegar a la información que necesita de la fuente primaria.

Sin ninguna otra preocupación, extiendo un saludo amable,

Randall Otárola Madrigal

Viceministro en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano

Ministerio de la Presidencia

República de Costa Rica”

Estaré atenta a sus indicaciones en relación con dicho comunicado.

Magistrada Damaris Vargas Vásquez

Coordinadora Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

**De:** Viceministerio Presidencia <dialogociudadano@presidencia.go.cr>
**Enviado el:** lunes, 11 de mayo de 2020 9:46 a. m.
**Para:** davidhinkley2017@gmail.com
**CC:** Charlyn Sánchez García <charlyn.sanchez@presidencia.go.cr>; Randall Otarola Madrigal <randall.otarola@presidencia.go.cr>; Geyner Blanco Acosta <geyner.blanco@presidencia.go.cr>; Carolina Chacón <carolina.chacon@presidencia.go.cr>; Damaris Vargas Vásquez <dvargas@Poder-Judicial.go.cr>; paniagua@mj.go.cr
**Asunto:** VPDC-229-2020 \_David Hinkley\_Respuesta segunda nota abril 2020

**Honourable,
David Hinkley
Human rights activist and
Former long-time official of Amnesty International USA,**

Dear Mister,

Respectfully, I extend you a kind greeting and hereby, inform you of the following document, answering your questions of April 23, 2020.

Best regards

**“**

**-0-**

Posteriormente la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, remitió correo electrónico al licenciado Hugo Vega Castro en su condición de Jefe del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, y a efecto de dar seguimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior, así mismo se indica que desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se está en la mayor disposición de establecer las coordinaciones respectivas con el objetivo de que esa campaña se ejecute lo antes posible ante los riesgos propios de la realización eventual de audiencias en territorios indígenas sin considerar ese Plan de Trabajo. Lo anterior, al margen de otras campañas que se están trabajando con la señora Stephannie Phillips.

**SE ACUERDA: 1°** Se toma nota del Oficio 4320-2020 que transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 37-2020 celebrada el 16 de abril de 2020, Artículo XXXVI, en el que se acogió la solicitud presentada en oficio N° DVV-SI-0050-2020 del 3 de abril de 2020, la señora Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, y autorizó la publicación de una circular en la que se haga de conocimiento de las personas servidoras judiciales los  lineamientos establecidos en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas” diseñado por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Salud. 2° Informar al Consejo Superior que Corte Plena emitió una Circular sobre este tema, que es la número 103-2020, por lo que se les solicita valorar la posibilidad de omitir otra circular en tal sentido. 3° Solicitar al Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional la socialización de la campaña respectiva. 4° Comunicar este acuerdo al Consejo Superior y al Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTÍCULO XXV**

La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas hizo de conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión los Oficios 4337-2020 y 4272-2020 de la Secretaría de la Corte. En relación con el primero se les solicitó, tomar en consideración los diferentes acuerdos tomados por el Consejo Superior en ese Artículo para que desde las oficinas que representan ante la Subcomisión, colaboren impulsando la ejecución desde sus competencias. Entre esos acuerdos están las comunicaciones a las Universidades Estatales.

El oficio 4337-2020 de 8 de mayo de 2020, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión 39-2020 celebrada el 21 de abril de 2020, que literalmente indica:

**“ARTÍCULO XI**

**DOCUMENTO N°** **13995-15**

Mediante oficio Nº 3168-2020 del 31 de marzo de 2020, se procede al análisis del acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 20-2020 celebrada el 12 de marzo del 2020, que literalmente dice:

“[…]

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión **N° 20-2020** celebrada el **12 de marzo del 2020**, que literalmente dice:

##

## “ARTÍCULO XXXIII

**DOCUMENTO N°13995-15, 2515-20, 3032-20**

La máster Damaris Vargas Vásquez, en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, mediante oficio N° DVV-S1-022-2020 del 28 de febrero de 2020, gestionó lo siguiente:

“…Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, a fin de dar respuesta a la solicitud de información contenida en el Oficio Nº 3967-19 de 29 de abril de 2019, en el que la Secretaría General de la Corte comunicó el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 28-19 celebrada el 28 de marzo de 2019, Artículo XXXV, que literalmente dice:

**“Se acordó: 1.)** Devolver el informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019 a la Dirección de Planificación, para que actualice los datos contenidos en el citado informe. **2.)** Solicitar a la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General de la República, un criterio de la situación actual de la atención de los asuntos indígenas en la localidad Buenos Aires. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, del Ministerio Público y la Defensa Pública.**”**

El Informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019 fue emitido por la Dirección de Planificación con ocasión del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 20 de diciembre del 2016, artículo LVI, asociado al estudio para determinar la necesidad de las plazas de Fiscal Auxiliar y Técnico Judicial 2 en la Fiscalía de Buenos Aires, así como una plaza de Juez 4 para el Tribunal de la Zona Sur, un Fiscal y Defensor Público, asignada mediante permiso con goce de salario y sustitución, para atender prioritariamente los asuntos indígenas en Buenos Aires.

Al respecto, es importante señalar que la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas emitió pronunciamiento, según evidencia que consta en el Oficio N° 11983-18 del 20 de noviembre del 2018 de la Secretaría General de la Corte. El acuerdo de la Subcomisión fue comunicado gracias a la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia en el Oficio N° CACC-408-2018 de 16 de noviembre de 2018. En el acuerdo, la Subcomisión solicita se valore devolver la plaza de defensor y fiscal a la jurisdicción de Buenos Aires para la atención de los procesos vinculados con personas indígenas.

La Dirección de Planificación en el Informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019, recomendó:

“(…)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V.****Recomendaciones** | Por lo anterior, se recomienda lo siguiente:**Fiscalía de Buenos Aires****5.1.-**En cuanto a la necesidad de las plazas de Fiscal Auxiliar y Técnico Judicial 2 asignadas con permiso con goce de salario y sustitución para atender el ejercicio de la acción penal de los posibles delitos de usurpación de tierras en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires, y en atención de la medida cautelar impuesta por la Corte Interamericana al Estado costarricense, esta Dirección no puede recomendar su creación en virtud de algunos conceptos, a saber:  Al igual que en estudios anteriores, se ha determinado que la carga de trabajo no justifica plenamente la creación de los recursos que se han venido desempeñando, tanto en la Fiscalía de Buenos Aires, como en el I Circuito Judicial de la Zona Sur.   La coyuntura presupuestaria de la Institución y las limitaciones existentes a nivel de las propuestas para crear permisos con goces de salario.A pesar de lo anterior, esta Dirección también es consciente de la importancia de atender con prioridad los asuntos en los que están involucrados grupos vulnerables de la sociedad, como en este caso, los grupos indígenas de esas zonas. De igual forma, se reconoce el abordaje y las actividades investigativas ya realizadas por los permisos concedidos en el 2017 en el caso de Térraba (17-000125-634-PE), que es un territorio más amplio, por lo que se estima que se tomará más tiempo en la investigación que el caso de Salitre.  Asimismo, se es consciente de una nueva solicitud de personas indígenas y la ONG para ampliar la medida cautelar, al pueblo de Bribri de Cabagra y se debe tomar en consideración el resto de los territorios, a los cuales también hay que brindar el servicio público de administración de justicia.Por lo anterior se recomienda que la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, valoren si existen recursos internos que puedan trasladarse a la zona de Buenos Aires, para que asuman las importantes funciones que se han venido desarrollando y en los que están involucrados los grupos indígenas de esa zona. Esta misma medida aplicaría en relación con la plaza de Fiscal que se ha establecido en el I Circuito Judicial de la Zona Sur.Realizar la gestión ante la Administración de Pérez Zeledón para que les brinden colaboración con el respectivo cronograma de trabajo, dado que la Fiscalía General destacó en Buenos Aires un Fiscal durante el primer trimestre del presente año para la atención de los asuntos indígenas, no así la plaza de Técnico Judicial para las labores de apoyo, razón por la cual se coordinó con la Administración.**5.2.-** Se recomienda que la Fiscalía de Asuntos Indígenas lleve un control de las estadísticas de los asuntos indígenas por fiscalía, y a partir de la experiencia de Bribri Salitre defina un cronograma de atención a los territorios indígenas en el Cantón de Buenos Aires y brinde seguimiento al proyecto. Asimismo, que rinda informes trimestrales a la Dirección de Planificación de las actividades realizadas por las plazas asignadas y el desarrollo del proyecto, con el fin de tener datos y elementos para evaluar la necesidad del recurso otorgado.**Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur****5.3.-** Después del análisis de carga de trabajo, la Dirección de Planificación reitera la recomendación emitida en el informe anterior de NO recomendar la propuesta del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en cuanto a nombrar otra jueza o juez en forma permanente en Buenos Aires, con su respectiva oficina, y una sala de juicio en forma regular; a efectos de atender las apelaciones y demás vistas de los asuntos de  Buenos Aires; realizar juicios unipersonales e integrar colegio con dos profesionales de Pérez Zeledón para realizar los juicios previamente señalados.**5.4.-** La Defensa Pública deberá igualmente, valorar la posibilidad de un traslado de algún recurso que exista y que pueda reubicarse en esa zona para continuar con la atención de los asuntos donde están involucrados los grupos indígenas, una vez que se lleven a cabo estudios de reestructuración y reorganización de oficinas, en caso de estimarse necesario. Sobre este tema indicó el Lic. Erick Núñez Rodríguez, Subdirector de la Defensa Pública, que de los análisis que se están realizando para redistribución de plazas de acuerdo a las necesidades institucionales y procurando asignar los recursos donde mayormente se requiere, se determinó la necesidad de atender prioritariamente la Zona de Buenos Aires.**5.5**.-En virtud de los inconvenientes presentados en el local que se alquila del ANDE en Buenos Aires, se recomienda a la Administración Regional de Pérez Zeledón agilizar las gestiones que actualmente realiza para que a la brevedad posible se alquile un local en el Cantón de Buenos Aires para habilitar una sala de juicios específica, que permita instalar un equipo de videoconferencia para las vistas y lecturas de sentencias desde Pérez Zeledón. **5.6.-** Finalmente se reitera la recomendación, en el sentido de que si el órgano superior  **estima conveniente apartarse del criterio técnico antes expuesto** y ofrecer el servicio de administración de justicia penal en Buenos Aires (a nivel de Tribunal Penal), con la finalidad de brindar mayor accesibilidad a la población vulnerable identificada (personas indígenas),  se presentan algunas estimaciones de costos mínimos asociados con la puesta en funcionamiento de una **“Sede de Tribunal”** en esa localidad, para asumir la atención de juicios unipersonales, apelaciones, vistas y procesos abreviados en materia Penal; esos recursos contarían con la integración de dos profesionales del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur para celebrar juicios colegiados: **COSTOS MÍNIMOS ESTIMADOS[[14]](#footnote-15)[::1]**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

    **Estructura mínima de 5 plazas nuevas**:

|  |  |
| --- | --- |
| **PUESTO** | **COSTOS ESTIMADOS****2018** |
| 1 Jueza o Juez 4 | 64.124.000,00 |
| 1 Coordinadora o Coordinador Judicial 3 | 19.060.000,00 |
| 1 Técnica o Técnico Judicial 3 | 16.179.000,00 |
| 1 Custodia/o de Detenidas/os | 17.211.000,00 |
| 1 Auxiliar de Seguridad (Guarda de Juicio) | 13.602.000,00 |
| **TOTAL** | **¢ 130.176.000,00** |

    **Mobiliario y Equipo de Oficina**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUESTO** | **COSTOS ESTIMADOS****2018** |
| 1 OFICINA NUEVA (a) | 1.918.673,00 |
| 1 Jueza o Juez 4 | 846.295,00 |
| 1 Coordinadora o Coordinador Judicial 3 | 391.398,00 |
| 1 Técnica o Técnico Judicial 3 | 391.398,00 |
| 1 Custodio de Detenidos **(b)** | 2.288.449,00 |
| 1 Auxiliar de Seguridad (Guarda de Juicio) **(b)** | 1.497.651,00 |
| **TOTAL** | **¢ 7.333.864,00** |

**NOTAS: (a)** Incluye 1 Reloj de pared, 6 Sillas de espera (visita), 3 Archivadores metal tipo legal 4 gavetas, 2 Ventiladores de pared, 2 Bibliotecas de metal y 4 Butacas de 4 plazas.  **(b)** Costos de equipamiento básico.    **Alquiler de local** (para albergar al personal y habilitado con una sala de juicios considerando un área de 125 metros cuadrados): ¢ 1.500.000,00 colones por mes**[[15]](#footnote-16)[. ))…” -”A ic:      ()          12]**, para **un monto anual de ¢18.000.000,00 colones**.  **Por tanto, los costos totales anuales estimados por habilitar una “Sede de Tribunal” en Buenos Aires serían de alrededor de ¢ 155.509.864,00 colones**Adicionalmente, se debe contemplar el costo de **¢ 112.575.000,00** correspondiente a una plaza de Fiscala o Fiscal Auxiliar (¢ 57.101.000) y una de Defensora o Defensor Público (¢ 55.474.000), para completar el equipo de trabajo.Cabe indicar que las recomendaciones antes expuestas fueron formuladas considerando los resultados obtenidos por la Licda. Graciela Lugo Solano, Profesional 2 (Socióloga) de la Dirección de Planificación, en el análisis sociodemográfico de la zona de Buenos Aires.**Relación del Informe con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018**Las recomendaciones antes expuestas están en concordancia con el tema Nº 7 del Plan Estratégico Institucional, para el período 2013-2018, que indica:**“7.- Planificación institucional**Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”Asimismo, los planteamientos son consecuentes con los siguientes ejes transversales:       **Servicio Público de Calidad.** La propuesta tiene como fin acercar el servicio de justicia penal a las personas usuarias, y principalmente a los grupos vulnerables socialmente, del Cantón de Buenos Aires.       **Accesibilidad.** Existen problemas evidentes de accesibilidad en el servicio en los grupos vulnerables identificados, principalmente en las personas indígenas por las condiciones socioeconómicas en que viven y lo complejo de los traslados hasta Pérez Zeledón. |
| **Realizado por:** | Licda. Marlene Alpízar López, Profesional 2.Licda. Graciela Lugo Solano, Profesional 2. |
| **Aprobado por:** | Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefa del Subproceso Organización Institucional.Máster Allan Pow Hing Cordero, Jefe del Subproceso de Planificación Estratégica.  |
| **Visto bueno:** | Ing. Dixon Li Morales, Jefe del Proceso de Ejecución de las Operaciones. |

Como antecedentes se citan en el Oficio en referencia los siguientes:

En sesión Nº 75-16 celebrada el 9 de agosto del año 2016, artículo XXIV, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a la plaza N° 96502 de Técnico Judicial 2 de la Fiscalía de Buenos Aires, ocupada en propiedad por el servidor Heiner Bermúdez Anchía, para que llevara a cabo las labores de apoyo al fiscal auxiliar designado para la dirección funcional y ejercicio de la acción penal de los posibles delitos de usurpación de territorio indígena, en perjuicio del pueblo indígena Bribri de Salitre en primera instancia, para luego pasar a analizar lo atinente al pueblo indígena Teribe ubicado en Térraba, cantón de Buenos Aires de Puntarenas, lo anterior a partir del 16 de agosto y hasta el 23 de diciembre del 2016.

Posteriormente, en sesión N° 113-16 del 20 de diciembre del 2019, artículo LVI,  se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución a la plaza N° 96502 de Técnico Judicial 2 de la Fiscalía de Buenos Aires, ocupada por el servidor Heiner Bermúdez Anchía, y a la plaza N° 19899 de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Buenos Aires, ocupada por el licenciado Esteban Ceciliano Matamoros a fin de que se dedicaran a las labores que se dieron cuenta, lo anterior a partir del 24 de diciembre del 2016 y hasta el 31 de marzo del 2017.

Seguidamente, en sesión N° 2-17 celebrada el 12 de enero del 2017, artículo LXXVI, se concedió permiso con goce de salario y sustitución, a una plaza de Juez 4, para el Tribunal del Primer Circuito de la Zona Sur, así como a un fiscal y un defensor o defensora, para completar el equipo, a partir del 16 de enero del 2017 y hasta por tres meses y se dedicaran a las labores indicadas con el fin de dar un trato prioritario a las comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires.

Luego en sesión N° 29-17 del 28 de marzo del 2017, artículo LV, se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre 2017, a las plazas N° s 96502 de Técnico Judicial 2 y 19899 de Fiscal Auxiliar, ambas de la Fiscalía de Buenos Aires, a fin de que se dedicaran a las labores que se dan cuenta.

En sesión N° 32-17 celebrada el 4 de abril del 2017, artículo XLV, se prorrogaron los permisos con goce de salario y sustitución, a una plaza de Juez 4 y a una de Fiscal, del 17 de abril del 2017 y hasta por tres meses, para que se dedicaran a las labores indicadas con el fin de dar un trato prioritario a las comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires.

En sesión N° 34-17 del 5 de abril del 2017, artículo LXXXIX, se prorrogaron los permisos con goce de salario y sustitución, a una plaza de Defensor Público, del 16 de abril del 2017 y hasta por tres meses más, para que se dedicaran a las labores indicadas con el fin de dar un trato prioritario a las comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires.

Luego en sesión N° 40-17 celebrada el 27 de abril del 2017, artículo XXXVIII, se comunicó al máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Planificación, que este Consejo requiere el estudio solicitado en sesión Nº 113-16 del 20 de diciembre del 2016, artículo LVI, para determinar la necesidad de mantener los permisos con goce de salario y sustitución a la plaza N° 96502 de Técnico Judicial 2 y a la plaza N° 19899 de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Buenos Aires.

Posteriormente, en sesión N° 42-17 del 4 de mayo del 2017, artículo LXIII, se tuvo por rendido el informe de la Dirección de Planificación con respecto al estudio solicitado en sesión N° 40-17 del 27 de abril del 2017, artículo XXXVIII.

En sesión N° 63-17 del 04 de julio del 2017, artículo XCVII, se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución de la plaza de juez 4 asignada al Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, hasta el último día laboral del 2017, para que se dedicara las labores indicadas y se concedió permiso con goce de salario y sustitución a una plaza de Técnico Judicial del citado despacho, del 01 de setiembre hasta el último día laboral del 2017, siempre y cuando exista contenido presupuestario, de lo contario se instó a la administración regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, a mantener dentro de las posibilidades el técnico supernumerario a fin de que continuara con la colaboración del juzgador en los debates y vistas a realizar en el cantón de Buenos Aires.

Seguidamente, en sesión N° 66-17 del 13 de julio del 2017, artículo XCI, se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución a una plaza de Defensor Público, hasta el último día laboral del 2017, para que se dedicara a las labores indicadas, en el cantón de Buenos Aires.

Finalmente, en sesión N° 96-17 celebrada el 19 de octubre del 2017, artículo CII, se aprobó el traslado de la plaza de Juez 4 del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, por lo que restaba del año 2017.

En relación con lo anterior, la Subcomisión mantiene la misma posición que externó en su momento y amplía la misma para que se valore con los recursos institucionales existentes, amplíe el equipo de trabajo para atender de manera prioritaria los procesos judiciales vinculados con la población indígena de Buenos Aires de Puntarenas, al tratarse de una población en situación de vulnerabilidad; con especial atención de los procesos relacionados con personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado. Lo anterior, a fin de poder cumplir con la responsabilidad del Poder Judicial como parte del Estado, en lo que a sus competencias se refiere. De igual forma, la petición anterior obedece al cumplimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena.

**Recomendaciones:**

 Se solicita establecer una acción afirmativa en beneficio de la población indígena de Buenos Aires de Puntarenas y de China Quichá de Pérez Zeledón, que consiste en reforzar tanto la jurisdicción de Buenos Aires como Pérez Zeledón, con nuevas plazas que permitan  conformar un equipo de trabajo completo que integre representantes de Judicatura, Defensa Pública, Fiscalía de Asuntos indígenas, OIJ, personal de apoyo, recursos tecnológicos y materiales tales como vehículos para transporte y oficinas, entre otros que sean necesarios para que la labor del equipo de trabajo pueda ser eficaz, eficiente y efectiva, a efecto de atender los procesos judiciales vinculados con las personas indígenas citadas. Lo anterior, con fundamento en la normativa internacional que regula los derechos de la población indígena: Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016, la cual tiene carácter supraconstitucional según reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional al tratarse de convenios referidos a derechos humanos; el artículo 1 de la Constitución Política que refiere a Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural; así como la normativa interna, entre otras, la Ley Indígena y la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

En relación con lo anterior, debe tomarse en consideración que los conflictos en Buenos Aires de Puntarenas han aumentado considerablemente, por lo que la recomendación planteada en esta recomendación y en la siguiente, se refieren a la autorización de un equipo de trabajo en materia penal por medio de la aplicación del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conforme a la Metodología de Administración de Proyectos para el control y seguimiento debidos. Además, debe tomarse en consideración que los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas corresponden a una competencia territorial diferente al territorio de China Quichá de Pérez Zeledón.

 Para la valoración de la urgencia del citado recurso se tome en cuenta no solo aspectos estadísticos, sino que se tome en cuenta la especificidad con que los funcionarios deben atender la población indígena y el abordaje diferenciado de las causas, que implica un aumento en las cargas de trabajo de manera que para atender adecuadamente los usuarios se debe contar con más personal, con el cual sea posible atender prioritariamente la conflictividad que enfrenta la zona.

 En seguimiento del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica, que obligan al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, concertar las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y así evitar su repetición, se solicita al Consejo Superior en cumplimiento a lo que compete al Poder Judicial como parte del Estado, el reforzamiento de las oficinas judiciales que atienden este tipo de procesos en las materias penal, agraria y contenciosa administrativa, con el personal necesario a efecto de que las decisiones judiciales sobre ese tipo de asuntos se atienda de manera prioritaria y se emitan de conformidad con la normativa nacional e internacional que regula los derechos de la población indígena. Lo anterior, debido a que las medidas cautelares y provisionales de la CIDH tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica de derechos en posible riesgo, hasta en tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final, según la CIDH. Con ocasión de lo anterior, a fin de que el Estado pueda cumplir con la decisión final de las Medidas y, de ser necesario, con las reparaciones ordenadas, es necesario reforzar los equipos de trabajo humanos y materiales a disposición para atender este tipo de procesos, con especial referencia a la materia penal que es objeto de análisis.

 A efecto de atender la "gravedad de la situación", vinculada con el serio impacto que la acción u omisión estatal pueda tener sobre los derechos protegidos o sobre el efecto eventual de las decisiones pendientes ante la CIDH; así como la "urgencia de la situación", que se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza son inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; el "daño irreparable" vinculado con la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización, se solicita la atención prioritaria e inmediata de los requerimientos de recursos materiales y tecnológicos, así como el talento humano necesario para conformar el equipo de trabajo que continúe dando respuesta a los procesos vinculados con la población indígena beneficiaria de las Medidas Cautelares.

 A efecto de cumplir con la Circular 188-19 de Corte Plena, solicitar a la Escuela Judicial para que priorice el fortalecimiento de las competencias del equipo de trabajo que está a cargo y que, de aceptarse las recomendaciones anteriores, se designe de manera inmediata para la atención de los procesos judiciales penales vinculados con la población indígena de Buenos Aires de Puntarenas y de China Quichá de Pérez Zeledón, indistintamente de la cantidad de procesos pendientes o la proyección que se tenga ante los altos niveles de conflictividad en la zona, atendiendo sobre todo a la exigencia de la normativa supraconstitucional que regula los derechos de esa población y los requerimientos de la CIDH. Lo anterior, para disminuir en lo posible desde las funciones del Poder Judicial, la serie continua de ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, identificados por los gestionantes de las Medidas Cautelares como posibles factores generadores de riesgo que incidirían en su situación, asociados a lo que la CIDH califica como un presunto clima de tensión y hostilidad, en vista que los miembros de ambos pueblos indígenas estarían cohabitando un área en la que se encontrarían personas no indígenas, en el marco de un conflicto territorial que habría perdurado por varios años; y supuestas represalias, debido a la labor que los miembros de ambos pueblos indígenas estarían adelantando, con el fin de que se reconozca y delimite su territorio.

 Se solicite a la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial continuar con la atención de los procesos indígenas de la zona citada, coadyuvando en la búsqueda de soluciones legalmente posibles y con pertinencia cultural, en cumplimiento del mandato que les confiere la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica. Lo anterior, considerando que, según refiere la CIDH en las Medidas Cautelares 321-15, el 7 de julio de 2014, el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica expresó "su preocupación por la violencia registrada en el territorio indígena de Salitre [...l, que ha provocado movilización de personas, quema de ranchos y bloqueo de caminos. La ONU confía en que el Estado impulse urgentemente la resolución pacífica del conflicto de manera que se proteja el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y también se garantice los derechos humanos de todos sus habitantes y a los actores involucrados para que rechacen cualquier tipo de violencia"

 Solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, ante la posibilidad de que la situación de riesgo pueda exacerbase aún más en la zona de Buenos Aires y de China Quichá de Pérez Zeledón, por la continuidad del clima de tensión y las medidas destinadas a delimitar los territorios, se tomen medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. Se recomienda que las medidas necesarias que se tomen para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, deben tener pertinencia cultural.

 Solicitar a las personas servidoras judiciales y oficinas involucradas en los equipos de trabajo que se conformen, emitir informes de su gestión, según la periodicidad que la Dirección de Planificación sugiera al Consejo Superior y éste disponga, a efecto de verificar el acceso a la justicia de la población y la atención prioritaria y oportuna.

 Instar a la Dirección Ejecutiva para asegurar que el equipo de personas traductoras e intérpretes, conformado tanto por mujeres como por hombres, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, sea suficiente para la atención de los procesos judiciales en los que estén vinculadas personas indígenas de las zonas referidas, para garantizar que no se constituya en un atraso en la gestión de los diferentes equipos de trabajo.

 Solicitar a la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Pérez Zeledón a cargo de Buenos Aires, y a los despachos involucrados, tomar las medidas necesarias para que el pago a las personas traductoras e intérpretes se realice de manera oportuna y cumpliendo con todos los requerimientos legales y políticas institucionales, para poder seguir contando con este apoyo.

 Solicitar colaboración a la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica que, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica, para que coadyuven con los peritajes culturales necesarios para la atención de los procesos judiciales que atienda el equipo de trabajo que se conforme, a cargo de reforzar la atención de los asuntos indígenas de la zona de Buenos Aires de Puntarenas y China Quichá de Pérez Zeledón.

 Solicitar a la Escuela Judicial, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica y la Circular 188-19 de Corte Plena, brinde capacitación de manera prioritaria al equipo de trabajo que se conforme para atender los asuntos penales de la zona, con el objetivo de fortalecer sus competencias en Derecho Indígena, siguiendo los lineamientos dispuestos en la circular en referencia que incluyen aspectos relacionados con contenidos mínimos, verificación de asistencia y seguimiento del impacto de la capacitación. Instar a la Escuela Judicial verifique que, en los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos: a) Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (Convenio 107 OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016; b) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017, c) Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, entre otras; d) Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; d) Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas; además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico. Incluyendo, el establecimiento de un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de esas capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales que asistan y su concreción en las resoluciones –incluyendo las sentencias- que emitan en los procesos propios de su competencia, con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros. Al respecto, la Institución tiene experiencia pues para tal seguimiento del impacto de la capacitación se diseñó el Manual para realizar las evaluaciones de resultados de la capacitación judicial en el desempeño laboral por parte de la Escuela Judicial.

 Declarar obligatoria la participación de las personas servidoras judiciales en las capacitaciones sobre Derecho Indígena, ampliar a sensibilización, atención y acceso a la justicia de pueblos indígenas en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, especialmente quienes tengan competencia material y territorial para conocer de procesos judiciales vinculados con el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y la Circular 188-19 de Corte Plena.

 Solicitar a la Escuela Judicial llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión, y valorar su inclusión en los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, ya sea para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas.

 Instar al CACMFJ para que, junto con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, divulgue la Circular 188-19 de Corte Plena; en especial el eje sexto referido a las personas juzgadoras de todas las materias que atienden procesos vinculados con personas indígenas, en el que se señala: “Con absoluto respeto al principio de independencia judicial, emitir circulares dirigidas a todas las personas servidoras judiciales en las que se les reitere su deber de ser garantes del acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas, la no discriminación y eliminación de barreras, a saber: **i)** asegurar que los miembros de la comunidad puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin; **ii** proporcionar el acceso a los pueblos indígenas y tribales a asistencia técnica y legal en relación con su derecho a la propiedad colectiva, en el supuesto de que estos se encontrasen en una situación de vulnerabilidad que les impediría conseguirla, y **iii** facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales, o a los organismos encargados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, así como facilitar la participación de los pueblos en el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, sin que ello les implique hacer esfuerzos desmedidos o exagerados, ya sea debido a las distancias o a las vías de acceso a dichas instituciones, o a los altos costos en virtud de los procedimientos. Además, el otorgamiento de una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población en general y que conforman su identidad cultural, sus características económicas y sociales, su posible situación de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, así como su especial relación con la tierra, y respeto de los mecanismos internos de decisión de controversias en materia indígena, los cuales se encuentren en armonía con los derechos humanos, según los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Kaliña y Lokono versus Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 y las disposiciones de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.” Así como el sétimo que indica: “**7.** Con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros, establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, en lo relacionado con la aplicación del Derecho Indígena, con el objetivo de ofrecer a las personas usuarias indígenas una justicia pronta, cumplida, sin denegación y accesible; priorizando lo vinculado con los procesos judiciales en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.”

 Solicitar a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Comisión de Acceso a la Justicia y Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, y el eje octavo de la Circular 188-19, priorizar la realización de encuentros entre el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre, a efecto de que estas últimas les expongan el funcionamiento del Poder Judicial en sus diferentes ámbitos. En forma previa a su ejecución, solicitarles concertar con las personas indígenas de los pueblos indígenas de Buenos Aires la identificación de los contenidos mínimos de los aspectos sobre los cuales desean ser informados y los mecanismos que ofrece el Poder Judicial para el acceso a la justicia. Así mismo, que en forma coordinada con la Escuela Judicial y demás Unidades de Capacitación de la institución, coordinen encuentros entre representantes del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y personas funcionarias judiciales con competencia para conocer procesos judiciales vinculados con esa población, a efecto de que las personas indígenas capaciten a las y los servidores judiciales sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y de transmisión de la tierra, entre otros datos de interés, que incidan en la solución de los conflictos indígenas; priorizándose a quienes laboren en las oficinas judiciales con competencia material y territorial para conocer de procesos vinculados con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, incluyendo a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Iniciar el proceso de capacitación con personas servidoras judiciales de las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, de todas las instancias; y luego se continuará con las demás.

Se adjuntan documentos de interés y desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas nos ponemos en la mayor disposición en caso de que requieran una ampliación del informe.



- 0 -

El máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial, mediante oficio N°0206-DG-2020 del 4 de marzo de 2020, comunicó lo siguiente:

**“…**según el oficio n° 3967-2019; del 29 de abril de 2019, sobre el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 28-19 celebrada el 28 de marzo de 2019, Artículo XXXV, me permito hacer un recuento de la labor desplegada por la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, así como reseñar la labor que por ley nos compete.

Como es de su conocimiento, los asuntos indígenas relacionados con la recuperación de tierras, en los últimos años han tomado un rumbo violento (Homicidios y otros) producto de los enfrentamientos entre la parte indígena con la no indígena, hecho que tiene al Gobierno Central comprometido y las autoridades de la región en alerta y a la expectativa de lo que pueda ocurrir, incluso recientemente la recuperación de tierras indígenas se activó en la localidad de China Quichá de Pérez Zeledón, por lo que el conflicto se extiende presentándose en ambos cantones.

En respuesta el Poder Judicial ha otorgado recurso humano y material a la Fiscalía, Defensa, Judicatura de los sitios de interés con el propósito de hacerle frente a los casos surgidos del conflicto, pero sin considerar a las oficinas inmersas del Organismo de investigación Judicial, por lo que internamente se han realizado algunos reacomodos para lograr contar con posibilidades de hacer frente a la situación, aspectos que actualmente no bastan para la magnitud del problema ya que las cargas de trabajo se han incrementado exponencialmente en comparación con lo que se atendía años atrás. En este momento definitivamente la Unidad Regional del OIJ de Buenos Aires no cuenta con personal suficiente para poder atender los casos de una forma eficiente y, más bien el exceso de trabajo ha venido provocando problemas de saludo y curva de rendimiento decreciente.

En razón de lo anterior se solicita que el Organismo de Investigación Judicial sea reforzado como otros ámbitos en la zona lo han sido con plazas profesionales y técnicas para atender estos asuntos, por lo menos es imperioso el refuerzo de la Unidad Regional del OIJ en Bueno Aires con una pareja de investigadores y un auxiliar (03 plazas), para poder brindar atención oportuna a los asuntos indígenas de la región de Pérez Zeledón y Buenos Aires, para lo cual se propone autorizar un permiso con goce de salario y sustitución en los términos permitidos por el numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, en lo referente a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, cabe indicar que del año 2016 a la fecha se han realizado nueve estudios de seguridad de la zona indígena de Buenos Aires, el último de ellos en diciembre del 2019.

Se han atendido un total de 69 solicitudes de acompañamientos para brindar protección a diferentes diligencias e instancias del poder judicial, entre ellas; personal de Ministerio Público en especial de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Así como de la Defensa Pública, personal de la Judicatura y peritos judiciales del área de topografía de Ciencias Forenses.

Partiendo de lo observado en el último estudio de seguridad realizado en la zona, existe la necesidad urgente de contar con personal de protección de víctimas en el lugar, esto con el fin de poder atender de manera inmediata cualquier situación que se pudiese dar y que requiera de nuestros servicios. Es por lo anterior que en fecha 17 de febrero último se inauguró una nuestra de la UPROV en el cantón de Perez Zeledón dentro del OIJ en el tercer piso del edifico de los Tribunales de Justicia, la cual cuenta con cuatro agentes de protección y un vehículo todo terreno, además contamos con el ofrecimiento de poder utilizar un segundo vehículo de la Oficina de Atención del Ministerio

Público. Es de importancia indicar que a partir de la fecha de la muerte del líder indígena Jerry Rivera Rivera, se asignaron cinco agentes más en el lugar a fin de poder atender todas las solicitudes que a raíz del acontecimiento ingresaron, las cuales a la fecha son en total 27 requerimientos.

En torno a lo indicado por la señora Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en punto número 7 de su exposición, donde literalmente indica “Solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, ante la posibilidad de que la situación de riesgo pueda exacerbase aún más en la zona de Buenos Aires y de China Quichá de Pérez Zeledón, por la continuidad del clima de tensión y las medidas destinadas a delimitar los territorios, se tomen medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. Se recomienda que las medidas necesarias que se tomen para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, deben tener pertinencia cultural”.

Me permito indicar que al tenor de lo que indica la Ley 8720 a la cual no debemos, al día de hoy se han atendido de la mejor manera todas las solicitudes de protección emanadas de la Oficina de Atención y Protección para la Víctima del Delito del Ministerio Público, quienes por mandato de ley son los encargados de hacer las valoraciones y dictar las correspondientes medidas de protección, el artículo 6 de la ley establece “ Administración del Programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes del proceso penal…… continuando con el desarrollo de este artículo, la indicada Ley le confiere a la Oficina de Atención del Ministerio Público una serie de atribuciones que nacen a raíz de las valoraciones realizadas por el equipo especializado de evaluadores, la cuales las realizan a las víctimas que así lo deseen, definiendo en cada caso la o las medidas que correspondan, este punto en particular es de suma importancia para nuestra labor destacar que los diferentes casos tendrá sus propias medida de acuerdo al nivel de la amenaza o el riesgo, siendo que esto nos limita a realizar aquellas acciones de carácter operativo destinadas a cumplir con las medidas dictaminadas, cabe destacar que dentro de las medidas algunas de estas se aplican directamente en la zona de conflicto, como por ejemplo los monitoreos, que son ingresos previamente determinados donde se nos pide ir hasta donde se encuentre la víctima y asegurarnos de que se encuentra en buen estado de salud físico y psicológico.

Por lo indicado en líneas anteriores, queda claro que la función de la UPROV está supeditada a un requerimiento formal emanado del “Equipo Técnico

Evaluador” del Ministerio Público, quienes ante la voluntad de un usuario que así lo promovió mediante denuncia y que fue evaluado por ellos para dictar una serie de medidas, las cuales fueron aceptadas por la víctima y ejecutadas por nosotros en UPROV.

También es importante resaltar que en principio la aplicación de la Ley 8720 es de carácter voluntario, artículo 4. Ámbito de Aplicación último párrafo “

Podrá otorgarse la protección aun cuando la denuncia no se haya interpuesto.

Sin embargo, una vez acordada la protección, la denuncia por el hecho que la genera deberá interponerse en un plazo razonable. Aquí el derecho que la ley le confiere a la víctima en su carácter voluntario es precisamente que las medidas de protección en alguna medida son restrictivas de derechos de las personas, he ahí la posibilidad de someterse o no al proceso.

Para hacer efectiva la protección de las víctimas de riesgo o amenazas señaladas en la presente ley, el estado delegó en el Organismo de Investigación Judicial y este a su vez la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, la función de realizar todas aquellas acciones tendientes a la protección de estas víctimas, quienes voluntariamente se acogieron al programa mediante la formulación de la respectiva denuncia y aceptando las medidas extraprocesales establecidas por el Ministerio Público. Esta función no debe de confundirse con la labor de prevención que realiza el Ministerio de Seguridad Pública a quien le compete la seguridad ciudadana de manera generalizada, en todo caso la capacidad de acción de la Unidad de Protección es sumamente limitada.”

- 0 -

Manifiesta la integrante Castillo Vargas: “Presidente, magistrado Cruz Castro, estimo que por la complejidad y la amplitud de peticiones que nos hace la Subcomisión, el tema debemos analizarlo detalladamente en relación con los recursos que eso implica y las posibilidades, entonces mi sugerencia es que se rote, para que alguno de los integrantes lo analicemos y vayamos corroborando, que es viable y que no, para atenderle en la mayor medida de lo posible, lo que la subcomisión nos indica, pero de manera que sea realista”.

Indica el Presidente, magistrado Cruz Castro: “Me parece muy razonable la sugerencia, porque es muy complejo y además muy delicado para el país”.

Analizada por este Consejo Superior la presente gestión, **se acordó:** Turnar al o la integrante que por rol corresponda, para estudio e informe a este Consejo.

[…]”

- 0 –

Manifiesta el integrante Montero Zúñiga: “Este tema fue una gestión de la Subcomisión Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, y que también pidió un estudio de la Dirección de Planificación sobre las necesidades que se deberían satisfacer para mejorar el servicio de la población Indígena sobre todo en las localidades de Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Cuando el tema se discutió aquí en sesión, venían una serie de recomendaciones muy grandes y muy ambiciosas, y se pidió que se sacara para estudio, para no repetir lo que viene ahí, efectivamente se hizo el trabajo de tomar cada una de las recomendaciones y entre ellas, de manera muy general venía, reforzar la Defensa Pública, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial, con plazas adicionales, con equipo, con vehículos y demás; analizando cada una de estas, por ejemplo de las propuestas 1, 2, 3 y 4 que se refiere a la creación de plazas, se indica que si bien se comparte el criterio respecto a la necesidad de reforzar esa jurisdicción, debe indicarse que por las limitaciones presupuestarias y el acuerdo de Corte donde se prohíbe la creación de nuevas plazas, pero que sin embargo el Consejo sí reconoce que son necesarias. Luego analizando, cada una de las propuestas, viene un grupo de la 6, 7 y 8, que se hacen de conocimiento del Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio Público, para que tomen acciones referentes a esos sistemas que no corresponden a la creación de plazas, si no a reasignación de recursos, y vienen otra serie de recursos para la Escuela Judicial, en cuanto a la capacitación que requieren las personas que atienden a la población indígena de esas regiones, como parte del resumen que les expongo.

La parte de mayor estudio, del informe de la Dirección de Planificación y lo que requería la Subcomisión de Asuntos Indígenas, es para reforzar las oficinas con recursos adicionales, lo cual pareciera que de momento no es posible, conforme a la propuesta de acuerdo; agrupando las recomendaciones que creemos que podrían implementarse y las que presupuestariamente no es posible acoger”.

Consulta la Vicepresidenta, magistrada Patricia Solano Castro: “¿Estamos de acuerdo con la propuesta?.

En esto les comento que ayer la Corte Plena conoció también un informe de la magistrada Vargas, que tiene que ver con poblaciones Indígenas y con la celebración de las audiencias.

Con ocasión de la emergencia nacional de la pandemia COVID 19, los pueblos Indígenas se han bloqueado en cuarentena, entonces poder realizar audiencias, haciendo las coordinaciones con los diferentes Tribunales que conocen de los asuntos que tienen que ver con ellos. Entonces les comento que la Corte Plena, tomó nota del acuerdo para coordinar con los diferentes despachos y de señalarle a las Comisiones que se tienen para respetar las disposiciones de los pueblos Indígenas”.

Analizada por este Consejo Superior la presente gestión, **se acordó: 1)** Tener por rendido el oficio N° 3168-2020 del 31 de marzo de 2020 en donde se compila el informe de la Subcomisión Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, sobre diversos requerimientos en dicha jurisdicción, especialmente en la zona Sur del país. **2)** En cuanto a las recomendaciones señaladas en el citado informe, se debe indicar respecto a la 1, 2, 3 y 4, que se comparte el criterio respecto a la evidente necesidad de reforzar esa jurisdicción. Sin embargo, debe indicarse que por las limitaciones presupuestarias y el acuerdo de Corte donde se prohíbe la creación de nuevas plazas, no es posible atender los requerimientos planteados. Asimismo, en cuanto a las recomendaciones 6, 7, 8, 9, 10 y la 1, 2 posteriores a la 14, se ordena hacer de conocimiento a las diferentes oficinas relacionadas como la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Dirección Ejecutiva, Contraloría de Servicios, Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial y Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, para que valoren en sus diferentes planes de gestión la atención prioritaria de estas necesidades. Por su parte, respecto a las recomendaciones 5, 12, 13 y 14, se ordena hacerlas de conocimiento de las unidades de capacitación y la Escuela Judicial, para que valoren dichas disposiciones dentro de la programación de capacitación y posibilidades presupuestarias. Por último, sobre la recomendación número 11, se ordena al Despacho de la Presidencia a efectuar las gestiones necesarias, para que el Poder Judicial disponga de la colaboración de la Universidad de Costa Rica y otros centros de Educación Superior, para el desarrollo de peritajes en temas afines con la población indígena costarricense. **3)** Hacer el presente oficio de conocimiento de las instancias señaladas en el presente acuerdo para la atención de las recomendaciones.**”**

**Atentamente,**

**Lic. Carlos T.  Mora Rodríguez**

**Subsecretario General Interino**

**Corte Suprema de Justicia”**

**-0-**

El oficio 4272-2020 transcribe el acuerdo tomado por la Corte Plena, en sesión 21-2020 celebrada el 20 de abril de 2020, literalmente indica:

## “ARTÍCULO XVIII

**Documento N° 4225, 4587-2020**

La magistrada Vargas en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en oficio DVV-SI-0050-2020 de 3 de abril en curso, manifestó:

“Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas para solicitarles que tanto Corte Plena como el Consejo Superior, en las directrices que emitan en relación con la realización de audiencias judiciales en territorios indígenas, consideren los lineamientos establecidos en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas” diseñado por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Salud.

La realización de audiencias en territorios indígenas por parte de las personas servidoras judiciales deben ser coordinadas previamente con los Comités de Salud Comunitarios, activos en cada uno de los 24 territorios indígenas, cuyos contactos constan en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas”.

Para tal efecto, solicito se socialice lo antes posible el Plan en referencia con todas las personas servidoras judiciales.

Estoy a su disposición de requerir información adicional.”

- 0 –

Por su parte el licenciado Roger Mata Brenes, Director del Despacho de la Presidencia, mediante oficio Nº DP-193-2020, de 16 de abril de 2020, comunicó lo siguiente:

“Me dirijo a ustedes en seguimiento a las acciones en el marco de la circular No. 72-2020, aprobada mediante acuerdo de Corte Plena, en Sesión N° 20-2020 del 15 de abril de 2020, en relación con la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.

Se hace de su estimable conocimiento y fines consiguientes, el oficio DVV-SI-0050-2020, suscrito por la señora Magistrada Damaris Vargas Vásquez en su calidad de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, donde solicita expresamente lo siguiente:

[..] “**solicitarles que tanto Corte Plena como el Consejo Superior, en las directrices que emitan en relación con la realización de audiencias judiciales en territorios indígenas, consideren los lineamientos establecidos en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas”** diseñado por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Salud.

La realización de audiencias en territorios indígenas por parte de las personas servidoras judiciales deben ser coordinadas previamente con los Comités de Salud Comunitarios, activos en cada uno de los 24 territorios indígenas, cuyos contactos constan en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas”.

Para tal efecto, solicito se socialice lo antes posible el Plan en referencia con todas las personas servidoras judiciales.” **(Resaltado no es del original)**

Se anexan documentos relacionados con la solicitud de la Magistrada Vargas Vásquez.”



* 0 –

Expresa el Presidente, magistrado Cruz: "Este asunto es sobre una petición de la magistrada Vargas y solicita que la Corte Plena como el Consejo Superior en directrices que emitan en relación a la realización de audiencias judiciales en territorios indígenas, consideren los lineamientos establecidos en el Plan de Trabajo abordaje a la emergencia del virus Covid-19 en territorios indígenas, diseñado por el Viceministerio de la Presidencia de asuntos políticos y diálogos ciudadanos y el Ministerio de Salud".

Se concede el uso de la palabra a la magistrada Vargas, quien expone: “Esta gestión se está planteando porque el abordaje a la población indígena se está trabajando de manera interinstitucional. Inclusive el Poder Judicial se ha sumado a eso con ocasión del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica. Entonces, el Ministerio de Salud ha emitido algunas órdenes, en este caso vinculadas con la población indígena, en forma coordinada con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Diálogo Ciudadano, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Justicia y Paz, la Comisión Nacional de Emergencias y Acueductos y Alcantarillados.

El objetivo de esto es el lineamiento sobre el ingreso a los territorios indígenas, por eso es que se solicita se haga de conocimiento de las personas servidoras judiciales estos lineamientos del Ministerio de Salud en primer orden. En segundo lugar, es instarles a que en forma previa a ejecutar audiencias en territorios indígenas, en el eventual caso que tengan que realizarse, porque estamos haciendo por vía de excepción, que se coordine previamente con los Comités de Salud Comunitaria de cada uno de los 24 territorios indígenas del país.

En el documento que se adjunta a la propuesta, están incluidas las personas responsables y los sitios donde contactarles para poder hacer la articulación de acciones respectivas. A esto se le suma de más, la reciente resolución que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es la 01-2020 del 10 de abril pasado, denominado: Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.

En este último documento, la Comisión Interamericana emite lineamientos de cuál tiene que ser el abordaje que se tome en las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el caso de la población indígena señala, entre otras cosas, que tiene que respectarse de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dado los graves impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y la sobrevivencia como pueblo. Además, extremar las medidas de protección, respetando siempre la pertinencia cultura y la cosmovisión de esa población.

En el caso de Costa Rica, nosotros en los términos propiamente dichos, no tenemos población indígena en aislamiento voluntarios, pero sí tenemos algunos territorios indígenas que han emitido lineamientos restrictivos al acceso a la población para que no se generen contaminaciones, lo cual se está coordinando con el Ministerio de Salud.

El objetivo de la propuesta es que, no solamente se haga esto de conocimiento de las personas servidoras judiciales, sino que, también se inste como le señalé para que se coordinen previamente a realizar cualquier eventual audiencia que haya que hacerse con los Comités de Salud de cada uno de los territorios, el ingreso a estas diferentes áreas".

Señala el Presidente, magistrado Cruz: "A mí en principio me parece una propuesta muy razonable y pertinente, porque es necesario e indispensable señalar esas particularidades y que sean tomadas en cuenta al hacerlo en la forma en la que usted lo propone.

Yo le propondría a Corte que lo aprobemos, pero no sé si hay algún compañero que tiene alguna observación sobre el tema o compañera. ¿Están de acuerdo?"

Indica la magistrada Rojas: "No me da la palabra, pero yo quería hacer una pregunta a la magistrada Vargas.

Entiendo la orden de la Corte es una gran preocupación en términos de que un contagio del Covid-19 para esta población, podría inclusive provocar su desaparición, sobre todo, tomando en cuenta las escasas posibilidades de equipos especializado como de cuidados intensivos en esa zona, no creo que haya suficientes si tenemos una situación de este tipo.

Estimo que la primera norma de la disposición de la Corte es que estos son pueblos que hay que protegerlos de unos virus que no son propios de ellos, que los tenemos nosotros lo que ellos llaman: "blancos" y que podríamos hacerle mucho daño al punto casi que de aniquilación.

Mi pregunta es, si de acuerdo con las reglas de la técnica, teniendo ya este mandato o esta instrucción de la Corte, es conveniente realizar juicios, si todos, cuáles, si no sería más conveniente precisamente para garantizar que el virus no se propague sobre todo porque vi en televisión, no todas, pero algunos de estos grupos inclusive tienen cerrado el acceso a sus territorios y que con respecto a ello se dice no se quede en casa, quédese en su territorio.

Ellos han sido sensibilizados en términos que tienen que quedarse en su territorio, no salir que en este momento hay peligro, al menos eso dijo el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, yo diría que, para hacer un juicio en estas condiciones con presencia de ellos, habría que especificar muy bien cuál es la necesidad y por qué no esperar hasta el 30 de abril, que es cuando la Corte dio las medidas para por lo menos las cautelares para los procesos orales, ver qué pasa entonces, y tomar un acuerdo con respecto a que pueden continuar, pero solo aquellos aspectos que podrían no causarles daño, porque ahora la primera prioridad es proteger su vida y la existencia de la etnia.

A mí me preocupa que por continuar algunos juicios que tal vez pueden esperar, es decir, en el balance de los bienes jurídicos yo prefiero la vida y la protección del grupo.

No sé hasta dónde pueda ser una buena idea en este momento continuar con los juicios en esa zona sin un criterio técnico.

Yo no lo tengo, no soy técnica, soy abogada, por el 16 de Ley General me rijo por las reglas de la técnica y salvo que algún médico o el Ministerio de Salud me dijera que no hay posibilidad, a mí me daría literalmente mucho temor de arriesgar estos grupos.

Esa es la pregunta, si hay algún criterio técnico, si hay alguna urgencia o si hay alguna propuesta para que esto se pueda hacer, ¿a partir de qué fecha? Esa es la inquietud, todo en aras de que lo hagamos de la mejor forma posible".

Refiere la magistrada Vargas: "Ese planteamiento de la magistrada Rojas, es precisamente lo que da fundamento al planteamiento que se está haciendo en el documento que hago de su conocimiento, porque está basado no solamente en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sino también, en pronunciamientos que ha emitido Naciones Unidas sobre el tema Covid-19 en la población indígena.

El planteamiento que hace el Ministerio de Salud para esta población se dio antes de que saliera esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se emitió el 10 de abril del 2020. Es decir, días antes ya nosotros íbamos con lineamientos similares, que precisamente lo que está señalando el Ministerio de Salud son restricciones bastante fuertes para el acceso a los territorios indígenas, porque hay que proteger a esa población para su supervivencia.

Si nosotros nos remontamos a la circular y al acuerdo que emitió Corte Plena el viernes antes de Semana Santa y que hace poco lo extendimos hasta el 30 de abril del 2020, eso lo ejecutó el Consejo Superior ya más específicamente con las diferentes comisiones jurisdiccionales y emitió nuevas circulares que iban dirigidas a cada una de las jurisdicciones.

Muchas de las jurisdicciones ordenaron la apertura de realizar audiencias de manera bastantes restrictiva, pero siempre quedó la opción de hacerlas. Por ejemplo: en medidas cautelares, en sumarios de río, en casos interdictales para definirles un poco en relación con la materia agraria y que se están ejecutando pero de manera excepcional, pero a pesar de las restricciones que ya nosotros planteamos en Corte Plena y que también planteó el Consejo Superior en las circulares vinculadas, debe tomarse en consideración lo que indica este documento, no podemos irnos a meter a un territorio indígena, hasta tanto no hayamos coordinado previamente con este Comité que se está organizando de salud comunitaria, que están las personas respectivas.

De manera tal, que si pretende un ingreso a un territorio indígena tiene que hacerse coordinado con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, no puede ser de otra manera, que son más rígidos que en el resto de la población de este país.

Eso más bien nos da una tranquilidad, si se ejecuta que no vamos a generar desde el Poder Judicial algún nivel de contaminación a la población indígena.

Las audiencias que eventualmente se puedan realizar son bastante restrictivas, aún más, con ocasión de este lineamiento que se está dando. Lo que pasa es que es urgente que las personas servidoras judiciales conozcan de este documento que ya se hizo de conocimiento de la Presidencia de la Corte y de la Comisión de Emergencias y ahora se está socializando con los señores magistrados y magistradas.

En el caso del Consejo Superior agregó esto en la parte de las audiencias en materia agraria. Sin embargo, recordemos que los procesos vinculados con población indígena se ven en las diferentes jurisdicciones y hay lineamientos por ejemplo: en materia penal de las audiencias que ellos están realizando y en algunas otras materias que pueden involucrar población indígena y necesariamente tienen que tomar en consideración esto, en esta coyuntura de la pandemia".

Manifiesta el magistrado Castillo: "Como a este tema están vinculados los acuerdos de Corte y ya tengo conformado el Tribunal de Sala Constitucional por lo menos en seis asuntos y hay tres que está por conformarse el Tribunal para ver todos estos amparos y habeas corpus que vienen contra los acuerdos de Corte, yo prefiero abstenerme porque están vinculados con los temas que ustedes han venido resolviendo.

Dejar constancia que sobre todo ya en seis asuntos está conformado el Tribunal y espero en Dios que en tres que quedan pendientes en las próximas semanas se conforme el Tribunal".

Refiere el Presidente, magistrado Cruz: "Vamos a votar la propuesta de la magistrada Vargas, creo que no habría objeción".

Indica la magistrada Rojas: "No, no habría objeción. Yo no la estaba objetando, lo que quería era que quedara absolutamente claro cuál era la intención o el propósito, porque me preocupan mucho las comunidades.

Sí quisiera plantear si es absolutamente necesario que se hagan audiencias en este momento, porque me parece que salvo en materia penal, para efectos eventualmente de recoger indicios que permitan determinar presuntos autores responsables de un delito, y cumpliendo con todos los campos, las otras medidas no deberían aplicarse a la población indígena, yo la protegería a un rango mayor en el sentido este, me parece que dándolo solo a penal, pero más bien el espíritu mío es todavía más restrictivo, no sé qué necesidad hay en este momento de exponerlos por un interdicto o por estas cosas, creo que salvo la investigación delictiva, que por su supuesto eso es lo que nos tiene acusados, que no somos capaces de resolver los conflictos y los delitos que se cometen en ese territorio y no podemos desatendernos de eso, o si hay una acción, etcétera, no se puede dejar de entrar para tomar muestras, etcétera, o un homicidio, creo que salvo materia Penal, no debería mientras el COVID-19 esté, nadie ingresar a estos territorios. Más bien sería que fuera todavía más restrictivo para estos territorios.

Estoy totalmente de acuerdo con la magistrada Vargas, más bien me gustaría que todavía estuviera más ampliado, pero tal vez ella tiene más elementos, por lo demás estoy totalmente de acuerdo”.

Dice la magistrada Vargas: “En relación con la preocupación de la magistrada Rojas absolutamente razonable, le comento para su tranquilidad que en muchos de los territorios indígenas de Costa Rica se ha organizado la población indígena, y han colocado obstrucciones para que las personas no indígenas no puedan ingresar a sus territorios para no contaminarlos.

Inclusive la apertura se ha dado para el gobierno, por la asistencia que se está dando con alimentos o con medicinas, pero ya ellos tomaron esa decisión, inclusive un análisis que se está haciendo a nivel Latinoamericano de la reacción de la población indígena, lo que se ha señalado es que esto ha fortalecido más bien la autonomía de la población indígena, porque se han unido con ocasión de la pandemia, pero esto va a tener sus repercusiones a futuro, luego que termine este periodo”.

Consulta el Presidente, magistrado Cruz: “¿Están de acuerdo con la propuesta de la magistrada Vargas? Creo que va en un sentido muy razonable ¿Están de acuerdo en aprobarlos?”.

Refiere el magistrado Aguirre: “Estamos de acuerdo”.

Añade la magistrada Varela: “Sí señor”.

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores magistrados presentes, **se acordó:** Acoger la solicitud planteada por la magistrada Vargas, en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, por ende, tanto esta Corte como el Consejo Superior en las directrices que emitan en relación con la realización de audiencias judiciales en territorios indígenas en atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, considerará los lineamientos establecidos en el “Plan de Trabajo: Abordaje de la emergencia del virus COVID-19 en territorios indígenas” diseñado por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Salud. Lo anterior, en el entendido de que los despachos judiciales de país coordinarán previamente a realizar cualquier eventual audiencia que haya que hacerse con los Comités de Salud de cada uno de los territorios, el ingreso a estas diferentes áreas.

La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo, a fin de que mediante circular se haga de conocimiento de los despachos judiciales del país, el Plan de Trabajo que se da cuenta.

El magistrado Castillo se abstuvo de votar.”

**Atentamente,**

Licda. Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

**Corte Suprema de Justicia”**

**SE ACUERDA: 1°** Se toma nota de los Oficios 4337-2020 y 4272-2020 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; donde se transcriben los acuerdos tomados por el Consejo Superior en sesión 39-2020 celebrada el 21 de abril de 2020, Artículo XI, y el acuerdo de Corte Plena, en sesión 21-2020 celebrada el 20 de abril de 2020, Artículo XVIII, respectivamente. 2° Se tiene por publicada la Circular 103-2020 por parte de Corte Plena. 3° Incluir esta información en las diferentes rendiciones de cuentas que se hacen a personas indígenas. 4° Dar seguimiento a la divulgación de los acuerdos tomados por Corte Plena y Consejo Superior con la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTÍCULO XXVI**

El licenciado Danny Alberto Gutiérrez Gómez, Juez Coordinador del Juzgado Contravencional de Buenos Aires, remitió el oficio 085-JCBA-2020, para conocimiento del Consejo Superior, detalla la información:

**085-JCBA-2020**

**Corte Suprema de Justicia**

**Consejo Superior**

**Estimados (as) Señores (as)**

 Quien suscribe; Danny Alberto Gutiérrez Gómez, en mi calidad de Juez Coordinador del Juzgado Contravencional de Buenos Aires, les saludo y a la vez expongo situaciones relacionadas con el funcionamiento de este Juzgado.

 Desde agosto del año 2018 he estado presentando ante este honorable Consejo distintas gestiones relacionadas con la organización y funcionamiento del Juzgado Contravencional de Buenos Aires. Situaciones que inciden de manera directa en el rendimiento y funcionamiento de esta oficina. En gran parte de mis gestiones he externado mi preocupación por la carencia de personal suficiente que permita atender la marejada de asuntos que ingresan a este recinto, por consiguiente, no es posible, con el recurso humano actual, lograr a cabalidad las metas propuestas y erradicar la mora judicial que nos afecta. Al día de hoy, seguimos sin contar con el informe técnico que debe emitir la Dirección de Planificación en relación con el rediseño de este Juzgado, es decir, ha transcurrido alrededor de siete u ocho meses y aún estamos a la espera del informe ut supra. Por otra parte, la infraestructura en la que nos ubicamos no cumple con los requerimientos legales relacionadas con accesibilidad y seguridad, lo anterior de conformidad con el informe técnico emitido por el área de Salud Ocupacional del Poder Judicial e inspección realizada por el Ministerio de Salud, aunado a ello, desde el año dos mil quince, el Consejo de Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, tomó decisiones sobre la organización de este Juzgado sin medir el impacto y sin tener ningún tipo de informe técnico que lo justificara. En este sentido, movieron la plaza de notificador de este despacho para el Juzgado Penal y a partir de ese momento se acrecentó el declive de este recinto judicial, ya que le recargó la labor de notificación a los tres técnicos restantes que ya de por sí tenían que cubrir alrededor de otras dieciocho funciones a través de roles, según lo he venido detallando en mis gestiones anteriores desde hace casi dos años. Nótese que este Juzgado no cuenta con manifestador ni técnico judicial de servicios generales, tampoco cajero o tesorero.

 Existen muchas maneras de afectar la imagen del Poder Judicial, entre ellas ubicar a un Juzgado en una edificación que no puede brindar los servicios demandados por las personas usuarias. Con la emergencia del Covid-19, hemos tenido que realizar una serie de cambios a fin de cumplir con las medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud y dado lo pequeño de este Juzgado, no es posible tener a más de una persona adentro de la oficina, por lo que las demás personas deben esperar afuera, prácticamente en la calle, bajo el sol y lluvia de la época. Estas situaciones las he trasladado a la Administración Regional del I Circuito Judicial de la Zona Sur, todo con el ánimo de buscar alguna solución, debido a que soy yo quien debe rendirle cuentas a los usuarios cada vez que se mojan o sufren bajo el inclemente sol, también es mi deber recurrir a todas las instancias en aras de evitarle a las personas usuarias esta afectación a su dignidad. Es un tema de derechos humanos que causa indignación entre las personas y algunos abogados litigantes se han acercado a indagar al respecto. Este Juzgado tampoco cuenta con el espacio físico o iluminación necesaria para realizar nuestras funciones, en otras palabras, nosotros debemos trabajar en un ambiente hostil en el que existe una exposición a riesgos constantes en nuestra salud o seguridad, producto del hacinamiento, sin que la institución los contrarreste. Existe además una imposibilidad de realizar audiencias o juicios con más de dos personas por la misma situación del espacio físico tan reducido ya que, de realizarse las diligencias indicadas, se harían en detrimento de las medidas de salud ordenas por el Ministerio de Salud. Si bien actualmente se encuentra a nuestra disposición una sala de juicios en el edificio recién construido contiguo al Juzgado Civil de Buenos Aires, se ubica a 500 metros de distancia, situación que dificulta considerablemente el traslado desde el Juzgado Contravencional de Buenos Aires hasta dicha sala de juicios puesto que, todos los días llueve y al menos 350 metros de camino no cuentan con aceras y según consultas realizadas a la señora Administradora, no podríamos disponer de vehículo para trasladarnos y de darse esa posibilidad de que nos asignen el vehículo, no podríamos trasladar a las personas usuarias, es decir, Jueces y técnicos iríamos en carro, mientras que los usuarios tendrían que ir caminando bajo la lluvia o sol y sobre vías públicas sin aceras. Cabe mencionar que, según me informó la señora Administradora en visitas a este Juzgado, el edificio nuevo indicado líneas atrás, está destinado para los compañeros de Trabajo Social y la Oficina de Comunicaciones de Buenos Aires, que de paso está decir, aún no existe, o sea, se asignó espacio físico a una oficina que aún no ha sido creada, mientras que al Juzgado Contravencional, pese a conocer todas nuestras necesidades ni siquiera se nos tomó en cuenta para un posible cambio de ubicación.

 Es importante tomar en cuenta que alrededor del 95% de nuestros usuarios son personas indígenas y muchos de ellos vienen de zonas muy alejadas y quizás lo menos que la institución podría ofrecerles es un lugar para esperar su turno sentados y sin verse expuestos a las inclemencias del tiempo. Curiosamente, este es el único Juzgado que no cuenta con las condiciones estructurales para albergar usuarios, es decir, esta situación no ocurre en el Juzgado Penal ni en el Juzgado Civil de Buenos Aires, cuyas instalaciones son nuevas, modernas y con suficiente espacio físico, aún cuando no atienden en ellas la cantidad de alrededor de dos mil personas que nosotros recibimos por mes. Ignoro la motivación de las decisiones administrativas, pero lo cierto es que nosotros no tenemos ni siquiera cambiadores para niños y genera el repudio de muchas personas usuarias que vienen diariamente a solicitar nuestros servicios con niños en brazos que requieren ser cambiados. Existe además un sin fin de situaciones que tampoco han podido solucionarse en casi dos años, por ejemplo; el mal funcionamiento de los aires acondicionados. El instalado en mi oficina, no puede ser utilizado por el olor que desprende que ocasiona tos a todos los presentes en el debate o práctica de prueba. Por otro lado, el de los compañeros técnicos tampoco es utilizado con frecuencia por el ruido constante que ocasiona al estar encendido, de igual manera, el exceso de humedad se evidencia en las paredes y seguimos sin tener un espacio donde almacenar evidencias. También resulta importante mencionar que desde hace más de tres años este Juzgado no ha podido dispone de la motocicleta asignada al técnico en comunicaciones ya que se encuentra dañada y no ha sido posible repararla y las que han enviado ya están dañadas y seguimos sin tener dicho vehículo, lo que dificulta en gran medida el diligenciamiento de notificaciones y citas, pero sobre este tema ya me referí en otra gestión anterior. En síntesis, lo que se evidencia través de mi relato y las fotografías e informe que aporto es un abandono institucional y una distribución irregular de los recursos destinados para este Circuito Judicial en detrimento del Juzgado que más servicios brinda y a la mayor cantidad de personas del Cantón de Buenos Aires. Basta nada más con recordar el evento de rendición de cuentas de la Administración Regional del I Circuito Judicial de la Zona Sur; Pérez Zeledón, celebrado en junio o julio del año 2019 para analizar que, de las 50 diapositivas utilizadas en su exposición, 48 fueron sobre proyectos destacados en Pérez Zeledón, entre ellos una planta de acopio o reciclaje, anexo de la reforma procesal civil, mientras que dos de las proyecciones restantes fueron sobre Buenos Aires, a saber; el edificio donde actualmente se ubica el Juzgado Civil, que tengo entendido que era parte de la reforma civil y laboral, y un dispositivo de contención de palomas instalada en el segundo piso de este edificio donde se ubica el Organismo de Investigación Judicial, con la finalidad de evitar que excremento de las palomas ingresara al edificio, mientras que para brindarle al Juzgado Contravencional de Buenos Aires 3 basureros y cumplir así con metas y objetivos del Plan Anual Operativo, fue necesario esperar casi tres años. Es inconcebible que la Unidad Administrativa que no recibe usuarios, demandas, denuncias, no realiza juicios, audiencias de conciliación y muchos menos atiende a Facilitadores Judiciales o realiza capacitaciones, tenga mejores condicione de infraestructura y mobiliario que un Juzgado que brinda un servicio esencial relacionado con el acceso a la justicia y que los Jueces tengamos que buscar soluciones temporales para problemas reales y diarios ante la inacción de quienes deben atender estos asuntos. Resulta emocionalmente agotador, pero debemos hacerlo por las personas usuarias y seguiré exponiendo esta situación a lo interno de los tres Poderes de la República hasta que se de alguna solución. Las personas usuarias merecen respeto y quizás por la sencillez de nuestros usuarios, no han acudido a denunciar el maltrato institucional que reciben por las condiciones lamentables en las que son atendidos.

 Dentro de las decisiones administrativas tomadas por la Administración, como lo mencione anteriormente, destaca la movilización de una plaza de este Juzgado hacia el Juzgado Penal de Buenos Aires, plaza que desde octubre del año 2019, la traje de vuelta para este Juzgado con el propósito de supervisar de mejor forma el trabajo realizado del técnico en el puesto. También resulta impensable eliminar de forma "temporal" según lo mencionó el Consejo de Administración en acta 14-2015 el espacio dedicado para atender a las personas con discapacidad. Además de ser un acto discriminatorio e ilegal, jamás un acuerdo del Consejo de Administración podrá tener mayor eficacia jurídica que una norma de orden público como la Ley de Igualdad de Oportunidades N° 7600 y su reglamento. En este sentido condeno plenamente dicha decisión por atentar contra la dignidad de las personas con discapacidad y afectar de manera directa la organización y funcionamiento de este Juzgado, así como, la imagen del Poder Judicial; decisión tomada sin ningún informe técnico. De esta decisión, conocí el acuerdo hasta el día 12 de mayo del año en curso, ya que durante más de un año solicité la minuta o acuerdo sin que me lo facilitaran con anterioridad. A continuación, transcribo el acta ut supra:

Acta Nº 14-2015

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR

San Isidro de El General, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diez de setiembre de dos mil quince.

Sesión extraordinaria del Consejo de Administración del I Circuito Judicial de la Zona Sur, con asistencia de las y los integrantes:

1. Licda. Maureen Castillo Vargas, representante de la Defensa Pública, quien preside la sesión.

2. Licda. Patricia Zúñiga Vega en sustitución del Lic. Randy Trejos Morales, representante del O.I.J, quien se encuentra atendiendo funciones propias del cargo.

3. Lic. Oscar Mena Valverde en sustitución del Lic. Gustavo Barrantes Morales, representante de los jueces 1, quien se encuentra en audiencia en San José.

4. Lic. Franz Loney Castro Solís, representante de las y los Jueces 2.

5. Lic. Norman Herrera Vargas en sustitución de la Licda. Ruth Piedra Vargas, representante de las y los Jueces 3, quien se encuentra en audiencias.

6. Licda Marjorie Navarro Castro, representante de las y los Jueces 4.

7. Lic. Jose Efraín Sanders Quesada, en sustitución del Máster Edgar Ramírez Villalobos, representante del Ministerio Público.

8. Licda. Wendy Beita Ureña, Secretaria.

9. Licda Ana Alfaro Carranza en sustitución de la Licda. Cynthia Hernández Quirós, representante de las trabajadoras y los trabajadores.

10. Lic. Carlos Romero Rivera, Contralor Regional de Servicios (Acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, sesión N° 33-15 del 14 de abril de 2015, Artículo LXXIII, Documento 3766-15.)

Ausentes:

11. Licda. Gabriela Vargas Céspedes, representante de las y los litigantes.

Aunado a ello, se contó con la participación de los servidores judiciales:

· Lic. Luis Aguilar Alvarado, jefe a.i. de la Delegación Regional del OIJ en Buenos Aires.

· Lic. Harold Ríos Solórzano, juez del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Buenos Aires.

· MSc. Esteban Jiménez Godínez, Coordinador de Proceso de apoyo a la Gestión Judicial.

En la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

(…)

Se acordó: Reestructurar el edificio de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires, ya que se ha podido evidenciar que el mismo no cuenta con los requerimientos de accesibilidad establecidos en la Ley 7600, tanto en baños como en las oficinas.

(…)

Se acordó: Instalar una puerta corrediza en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Buenos Aires, debido a que la que actualmente se utiliza abre hacia dentro, por lo que se podría provocar daños a algún usuario.

Se acordó: a) Eliminar de forma temporal la oficina para personas con discapacidad por cuanto actualmente casi no se usa debido al ancho de la puerta, ya que no pasa una silla de ruedas, y en ese lugar se han instalado unos racks para el buen funcionamiento del equipo informático. b) El Juzgado Contravencional habilitará un espacio para las personas con discapacidad, en especial las que se ubican en el segundo piso, ya que no se cuenta con ascensor. c) Reubicar a la notificadora Judicial que se encuentra en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía para el Juzgado Penal de Buenos Aires. d) Presentar la propuesta gestada al señor Denis Villalta González, Arquitecto del Departamento de Servicios Generales, para la valoración sobre la factibilidad de la misma.

(El subrayado y negrita no es del original)

 El Juzgado está atravesando su peor momento por los cambios relacionados con el Covid-19 y la ausencia de recursos permanentes. Actualmente no podemos contar con el recurso meritorio y ellos, en gran parte, son un apoyo esencial para realizar muchas labores de las que no se cuenta con personal a cargo.

 De la forma más respetuosa y sin ánimo de extender mucho más mis argumentos, hago un llamado a buscar una solución a corto plazo que permita atacar la mora judicial en el trámite y mejorar las condiciones de funcionamiento de este Juzgado tanto para usuarios internos y externos. Nótese que Juzgados como el de Pensiones Alimentarias de Pérez Zeledón, tienen alrededor de diez técnicos judiciales y tres Jueces, mientras que el Juzgado Contravencional de Buenos Aires, que en principio es parte del mismo Circuito Judicial, no tiene ni la mitad de los recursos de este otro Juzgado, siendo nosotros quienes atendemos la demanda de servicios solicitados en su gran mayoría por personas indígenas en pensiones alimentarias, contravenciones y procesos de tránsito.

 Buenos Aires tienen una extensión geográfica muy amplia y las condiciones en las que trabajamos no son las mejores para brindar un servicio público de calidad. Reitero nuestro compromiso con las personas usuarias a quienes cada vez que podemos visitamos en giras de más de trescientos kilómetros en medio de montañas y aún entre tanta adversidad, le brindamos colaboración a otras oficinas como por ejemplo al Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón la notificación de señalamientos a juicio, así como a la Defensa Pública, a quienes tratamos de darles ciertos espacios para que puedan atender a personas usuarias con discapacidad cuando no pueden subir al segundo piso por la falta de ascensor. Con mayores recursos y condiciones favorables de trabajo, podríamos tener mejores resultados.

 Solicito se autorice la sustitución de técnicos judiciales hasta por un día.

 Adjunto documentos de interés.

 Señalo como medio para recibir notificaciones mi correo electrónico institucional dgutierrezg@poder-judicial.go.cr

 Saludos cordiales.

Lic. Danny Alberto Gutiérrez Gómez

Juez Coordinador”

Informa la máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia, que la gestión del juez Danny Alberto Gutiérrez ya fue conocida por la Unidad de Acceso a la Justicia en sesión del 4 de junio pasado.

**SE ACUERDA: 1°** Se toma nota de la gestión planteada por el licenciado Danny Alberto Gutiérrez Gómez, Juez Coordinador del Juzgado Contravencional de Buenos Aires, en Oficio 085-JCBA-2020, remitido al Consejo Superior; y del informe de la señora Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia, en el sentido de que la solicitud del juez Danny Alberto Gutiérrez ya fue conocida por la Comisión de Acceso a la Justicia en sesión del 4 de junio pasado. 2° Solicitar a la Comisión de Acceso a la Justicia informe a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas lo acordado sobre la gestión del licenciado Gutiérrez Gómez y lo acordado por el Consejo Superior. 3° Se dispone comunicar este acuerdo a la Comisión de Acceso a la Justicia y al señor Danny Alberto Gutiérrez Gómez, Juez Coordinador del Juzgado Contravencional de Buenos Aires, con la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTÍCULO XXVII**

El señor Kenneth Aguilar Hernández, Prosecretario General Interino de la Secretaría General de la Corte , remitió oficio 3975-19 del 29 de abril de 2019, que transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior de la sesión 28-19 celebrada el 28 de marzo de 2019, artículo L, que literalmente indica:

En sesión N° 103-18 celebrada el 27 de noviembre del 2018 artículo XCIX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora interina de la Unidad de Acceso a la Justicia, mediante oficio N° CACC-407-2018 del 2 de noviembre de 2018, comunicó lo siguiente:

**“**Por este medio se remite para su estimable conocimiento, y fines consiguientes, el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas, en la sesión celebrada el pasado miércoles 19 de setiembre de 2018, el cual se transcribe literalmente:

**Artículo V**

**Informe sobre la Gira en Pérez Zeledón los días 23 y 24 de agosto.**

Doña Melissa Benavides Víquez hace un resumen de lo que fue la Gira a los Territorios Indígenas, sean estos los Tribunales de Derecho Consuetudinario de Cabagra y Boruca y al día siguiente con distintos grupos conformados por personas indígenas.

Doña Ligia Jiménez propone que se valore y se envíe al Consejo Superior para que se valore la posibilidad de una plaza en temas especializada para atender los asuntos en donde una parte sea una persona indígena.

Don Erick Núñez comenta que existía una plaza en Buenos Aires que luego se eliminó, por esto la Defensa Pública ha venido dando tumbos pues solamente hay dos defensores públicos, por eso se ha pedido que en esta comisión se revalore un defensor in situ, en Buenos Aires especializado en materia indígena. Existen muchos problemas en lo penal, con la Ley de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas nos amplían las competencias, se recarga esto las materias agrarias.

Doña Ariana Céspedes indica que el Tribunal justificó, por un tema de números, que no se sostenía una tercera sección por ello se eliminó este tribunal.

Doña Ligia Jiménez expone que existen cinco fiscales, pero solamente dos plazas de defensores.

Don Geiner Blanco plantea que hay que dar un paso más al frente pues se denuncia mucha desatención en distintos temas, como subcomisión debemos buscar una estrategia para atender estos problemas y no siga pasando.

Doña Carmenmaría Escoto comenta que en Turrialba manifiestan recargo por tener que ir a las audiencias in situ, aunque no tengan la sensibilidad para atender la problemática que se suscita en los territorios indígenas, el sentir de la comunidad es que no exista un deseo de ir a los lugares en busca de las personas indígenas, además de la contratación de una persona de planta intérprete indígena, esto se hace en ignorancia de las reglas.

Doña Ariana Céspedes propone que se deben involucrar a las Administraciones Regionales para garantizar las condiciones para efectuar los juicios, además para apoyar a los despachos para que garanticen las mejores condiciones para realizar las audiencias pues muchas veces no existen estas condiciones para las víctimas y para las personas testigas.

Don Geiner Blanco explica que es importante hacer una lista de las necesidades expuestas, un mapeo de las demandas constantes de personas indígenas, así se marca un rumbo de donde hay que ir, además que da seguridad a las personas indígenas y asegurar un acceso a la justicia para estas poblaciones.

Doña Ligia Jiménez indica que es algo muy común que las personas indígenas no cuenten con intérprete para enfrentar sus derechos, cuestiona la forma de que se realizan estas diligencias.

Don Jean Carlo Monge establece que es importante que ahora que se hagan las visitas a las comunidades indígenas se puede levantar una lista de cuáles son las necesidades de las distintas comunidades, así se podrán conocer las necesidades de distintas comunidades.

Doña Melissa Benavides expone sobre la importancia de formar profesionales y pregunta de qué forma el Colegio pueda coadyubar con el acceso a la justicia para las personas indígenas.

Doña Ligia Jiménez plantea si existe la posibilidad de que se formule un curso sobre derecho indígena.

Don Jorge Leiva expone que existe una Comisión de Pueblos Indígenas en el Colegio de Abogados y Abogadas y para los efectos de las capacitaciones se puede conversar con ellos.

Doña Yerma Campos comenta que hubiese sido provechoso que se escuchara previo a los y las funcionarias judiciales antes de enviar a la Inspección Judicial las quejas interpuestas en la Gira.

Doña Violenta propone que de la iniciativa que se haga a la Comisión de Asuntos Indígenas se haga copia a la Junta Directiva también indica que podría hacerse a partir de marzo capacitación a las Defensorías Sociales, el Poder Judicial propondría nombres para los capacitadores e incluso grabarlas en youtube.

Doña Carmenmaría indica que existe un convenio con la Escuela Judicial para capacitar personas que no trabajan al Poder Judicial, se podría pensar en incluir al Colegio de Abogados y Abogadas en esto, estos cursos son importantes y son esenciales, se aprende muchísimo.

Don Geiner Blanco propone hacer un diagnóstico de problemáticas, propone que se haga un objetivo estratégico para poder llegar a las personas que toman decisiones y que se enteren de todo esto que estamos hablando pues existe resistencia y mucha burocracia.

Doña Carmenmaría consulta sobre si es posible por parte de Don Geiner de realizar ese diagnóstico.

Don Geiner Blanco indica que se puede realizar una sistematización con el histórico.

Don Jorge Leiva propone que se puede auxiliar con el informe de labores de la Defensoría de los Habitantes, además que existe una problemática de que las personas no se apuntan a los cursos de derecho indígena.

Don Alí García dice que en mundo indígena no se dice, sino que se hace, se comprende mejor la acción que hablar, es muy cansado, espera que estos acuerdos se cumplan.

Don Juan Carlos Campos indica que el Poder Judicial debería tomar acciones para poder contratar personas que conozcan del derecho indígena y sean de la comunidad indígena que sirvan de traductores.

Don Gonzalo Gutierrez indica que ha hecho muchos sacrificios para estudiar, que está anuente para optar por cualquier tipo de capacitación para optar por un puesto, hay muchos compañeros que quieren optar por puestos, pero no los llaman.

Doña Carmenmaría expone que en Turrialba le han expuesto la necesidad de que existan traductores y es necesario que el Poder Judicial nos dote de un técnico judicial para que sea intérprete y un medio para que sea un puente de las necesidades de los pueblos indígenas y que la Comisión sea también ese puente.

Don Erick Alfaro cuestiona que por qué los despachos cuando tienen la posibilidad de contratar personas no contratan personas indígenas.

Doña Ligia Jiménez comenta que es necesario hacer el proceso para poder entrar, y es necesario establecer cuotas para las distintas instancias para poder contratar personas indígenas.

Don Jean Carlo Monge establece la importancia de continuar promoviendo la cuota de contratación de personas indígenas.

**Se acordó: 5)** Consultar a Consejo Superior y al Tribunal de la Inspección Judicial que indiquen a cuáles territorios indígenas se han visitando en razón de sus cargos y por parte de los distintos Tribunales, esto en razón de las acciones aprobadas por Corte Plena.”

-0 -

**Se acordó: 1.)** Devolver el presente acuerdo a la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas lo anterior para que aclare a este Consejo Superior lo solicitado, no obstante, es menester comunicar que los diferentes Consejo de Ampliados convocan a la población indígenas a que asistan a estos consejos. **2.)** Debido a lo anterior deberá la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas informar a este Consejo cuales despachos están incumpliendo las circulares emitidas para disponer lo correspondiente.**”**

- 0 –

La máster Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en nota del 20 de marzo del 2019, comunicó lo siguiente:

“Reciban un atento saludo. A la vez, en cumplimiento del acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°103-18 celebrada el 27 de noviembre del 2018, Artículo XCIX, en el que se dispuso:

“Se acordó: 1.) Devolver el presente acuerdo a la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas lo anterior para que aclare a este Consejo Superior lo solicitado, no obstante, es menester comunicar que en los diferentes Consejos Ampliados convocan a la población indígenas a que asistan a estos consejos. 2.) Debido a lo anterior deberá la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas informar a este Consejo cuales despachos están incumpliendo las circulares emitidas para disponer lo correspondiente.”

Les informo:

En cumplimiento de la normativa nacional e internacional (Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016, entre otros), que regula los derechos de los pueblos indígenas, y en especial, en seguimiento de la Medida Cautelar N° 321-12 impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Costarricense en Resolución 16/15 de 30 de abril de 2015, planteada por el Pueblo Indígena Teribe y Bibri de Salitre respecto de Costa Rica, que literalmente dispone:

“La Comisión solicita al Gobierno de Costa Rica que: a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes se encontrarían en la región sureste del departamento de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre. b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.”, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en coordinación con la Defensoría de los Habitantes de la República, Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, INAMU, Fiscalía Indígena, Defensa Pública Indígena, Contraloría de Servicios, Administración Regional de Buenos Aires de Puntarenas, personas juzgadoras de Buenos Aires y Pérez Zeledón, entre otros, se realizó un encuentro en Buenos Aires de Puntarenas con personas usuarias indígenas, así como con integrantes de los Tribunales Consuetudinarios de Cabagra y Boruca, los días 23 y 24 de agosto de 2018, a efecto de atender los requerimientos que tienen para la atención eficaz, eficiente y de calidad de los procesos judiciales vinculados con esa población desde su cosmovisión, y en general, sus recomendaciones para la coordinación de acciones.

En ese encuentro, algunas de las personas usuarias indígenas presentaron documentación donde enlistaron quejas en relación con la tramitación que se está dando a varios procesos judiciales tramitados en los tribunales del Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, con detalle de cada proceso y causal de inconformidades.

Las quejas fueron direccionadas por la Unidad de Acceso a la Justicia a la Inspección Judicial el 4 de setiembre de 2018, al estimar es el competente para atender ese tipo de gestiones.

Con ocasión del requerimiento de información que plantean las y los integrantes del Consejo Superior, se remitió atenta solicitud a la Inspección Judicial para que informaran el estado de tales quejas. En comunicado electrónico enviado por el señor Jason Alonso Alfaro Carballo el pasado 18 de marzo, indicó que la causa se tramitó en el expediente 18-001953-0031-IJ contra ignorado, ingresó el 11 de setiembre 2018, por escrito de la Máster Melissa Benavides Viquez y ya se encuentra con sentencia firme de desestimación emitida mediante voto 473-2019 de las 14 horas 43 minutos del 4 de marzo de 2019.

Se cumple así con lo peticionado por el Consejo Superior. Además, se aprovecha para informarles que se reportan resoluciones emitidas por las tres Salas de Casación en las que se anulan resoluciones emitidas por tribunales de diferentes materias en las cuales se ha verificado el incumplimiento, entre otros lineamientos institucionales, de realizar las audiencias en los territorios indígenas.

Aparte de los antecedentes señalados, la Subcomisión no cuenta con datos concretos de despachos en los que se haga generado incumplimiento de las circulares y políticas institucionales; sin embargo, ya se está dando seguimiento mediante información que se desprende de SIGMA (inteligencia de negocios) de los despachos que tramitan procesos vinculados con personas indígenas a efecto de remitirles solicitud de que prioricen la tramitación de esos asuntos y los resuelvan tomando en consideración la cosmovisión de dichos pueblos (por medio de peritajes culturales) y el Derecho Indígena; además, la realización de las audiencias en los territorios indígenas, entre otros lineamientos emitidos por el Consejo Superior. De igual forma, se están realizando acciones coordinadas con la Escuela Judicial para el Plan Anual de Capacitación; la Universidad de Costa Rica para la continuidad del apoyo en la emisión de peritajes culturales; la Contraloría de Servicios para las visitas periódicas a los territorios indígenas, entre otros, en cumplimiento de la normativa citada, en especial, la reciente Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

Con ocasión de lo expuesto, no es posible suministrar al Consejo Superior la información requerida de los despachos que están incumpliendo las circulares emitidas vinculadas con la tramitación de los procesos vinculados con poblaciones indígenas.

Así mismo, se aprovecha para remitirles atenta invitación a sumarse a las visitas periódicas que se realizan a los territorios indígenas, en forma coordinada con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, en la medida de que sus agendas se lo permitan, aparte de las convocatorias que Ustedes han venido realizando a la población indígena para que participen en las actividades de Consejos Ampliados.”



- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tomar nota de la comunicación de la máster Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, con respecto al incumplimiento de las circulares emitidas vinculadas con la tramitación de los procesos relacionados con poblaciones indígenas. **2.)** Reiterar a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas la necesidad de contar con el proyecto circular solicitado en la sesión N° 103-18 celebrada el 27 de noviembre de 2018, artículo C. **3.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, para lo que corresponda.**”**

**-0-**

Posteriormente el Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Subsecretario General a.i de la Corte Suprema de Justicia, remite oficio 1677-2020 de 19 de febrero de 2020, relacionado con el informe que se mantiene pendiente en la Secretaría de la Corte con el fin de contar con un proyecto de circular para la tramitación de los proceso relacionados con poblaciones indígenas.

1. **Magistrada**
2. **Máster Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora**
3. **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**

**Estimada señora:**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Plena y el Consejo Superior del Poder Judicial, en las sesiones celebradas el 10 y el 11 de diciembre de 2012, artículos XIII y XXV, respectivamente, en que se conoció el estudio efectuado por la Auditoría Judicial, denominado “Evaluación de la efectividad del proceso de seguimiento de las disposiciones emitidas por Corte Plena y Consejo Superior, que requieren estudios de algunos despachos para su resolución final.”, muy respetuosamente le remito listado sobre los informes o criterios técnicos solicitados al Departamento de Su dependencia, que según los registros existentes en esta Secretaría General están pendientes.

Lo anterior, para que en un plazo de 10 días contados a partir del recibo de esta comunicación, se remita el informe que corresponda o se indiquen los motivos por los que no se ha contestado oportunamente y se defina un plazo prudencial para su remisión. De haberse remitido la contestación, mucho le estimaré nos indiquen el oficio recibido en esta Secretaría.

 Con oficio CACC-214-2020 de 25 de mayo de 2020 la Máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora de la Unidad de Acceso la Justicia del Poder Judicial, comunicó lo dispuesto en la sesión de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas celebrada el 8 de mayo de 2020, artículo III, que literalmente indica:

**Señoras y señores**

**Integrantes**

**Consejo Superior, Poder Judicial**

**S.D.**

**Estimadas señoras, estimados señores:**

Por este medio se remite para su estimable conocimiento, el acuerdo tomado por la **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas** celebrada el pasado 08 de mayo de 2020, modalidad virtual, en donde se acordó:

**“ARTICULO III**

La Unidad de Acceso a la Justicia comunicó mediante el Oficio CACC-11-2020 a las personas que integran la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, las sugerencias realizadas por la Licenciada Ligia Jiménez a la Circular No. 10-09, cuyo contenido es el siguiente:

**CIRCULAR No. 10-09**

**Asunto**: Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas.

**A los despachos judiciales Se les hace saber que:**

El Consejo Superior en sesión 77-08, celebrada el 14 de octubre de 2008, artículo XLI, a solicitud de la Comisión de Accesibilidad y de la Subcomisión vinculada con los Grupos Indígenas, acordó comunicarles las siguientes **Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas:**

1. Las **autoridades judiciales** promoverán la realización de diligencias **in situ**, en aquellos lugares donde existan territorios indígenas.

1. Dentro de cada presupuesto de los distintos programas se contemplará un rubro para brindar ayuda económica a las personas usuarias indígenas que la requieran, para cubrir algunos gastos que origine su traslado a los despachos judiciales, y otro de viáticos para las y los funcionarios que participen en las diligencias in situ Los y las jueces, así como cualquier autoridad judicial establecerán como práctica la atención de las y los usuarios indígenas. **(Modificado por el Consejo Superior en sesión Nº 104-09 del 17 de noviembre de 2009, artículo XLVII)**
2. Las personas juzgadoras, así como los y las funcionarios (as) judiciales darán prioridad de trato a las personas indígenas que se apersonen a los despachos judiciales.
3. **Las personas juzgadoras deberán fijar los señalamientos de las audiencias y de los juicios dentro de un horario accesible, contemplando** las particularidades de cada zona.
4. **Las personas juzgadoras, así como las autoridades que requieran documentos de otras entidades en este tipo de asuntos, establecerán los canales de comunicación y coordinación necesarios para hacerlos llegar al caso concreto y a la brevedad posible;** y comunicarán a la Comisión de Acceso a la Justicia los obstáculos que se les presenten para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones.
5. **Se deberán aplicar las directrices de no revictimización, en aquellos casos donde una de las partes del proceso es una persona indígena, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.)**
6. La Contraloría de Servicios será la encargada de **velar por el cumplimiento de las recomendaciones propuestas)**
7. Colocar distintivos en los expedientes **en caso de que una de las partes del proceso sea una persona indígena, se deberá colocar el distintivo correspondiente en el expediente.)**
8. Las personas servidoras judiciales propiciarán y colaborarán, junto con otras instituciones públicas, la incorporación de las personas indígenas a los procesos de enseñanza secundaria y universitaria, que faciliten su participación en la solución de sus asuntos a partir de su propia perspectiva**.**
9. **Derecho a una persona intérprete o traductora**: La Administración de Justicia procederá a nombrar siempre a toda persona indígena intérprete y traductor en la lengua materna, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, **salvo que hable y comprenda el idioma español.** El intérprete y o traductor será nombrado dentro de la lista oficial, sin embargo, de modo excepcional, podrá nombrarse por inopia. En tal supuesto, la autoridad respectiva verificará que sea una persona idónea, considerando las particularidades de la situación concreta. Lo anterior sin perjuicio de que dicha persona nombre uno de su confianza, conforme lo establece el artículo 14 del Código Procesal Penal.
10. **Respeto a la diversidad cultural:** obligación del peritaje antropológico/cultural: Cuando se juzgue a una persona indígena, la persona juzgadora que conoce del caso dispondrá, cuando ello sea necesario para resolverlo, de oficio o a petición de parte y costeado por el Estado, el peritaje antropológico y/o cultural, con el fin de conocer las normas culturales particulares, la personalidad, vida del imputado, entre otras, vinculadas con el hecho atribuido, lo anterior de conformidad con el artículo 339 del Código Procesal Penal.

La administración de justicia procederá a elaborar una lista de peritos conocedores de las diferentes culturas indígenas, quienes tendrán por función efectuar, individual o conjuntamente, el peritaje requerido.

Se analiza la propuesta, la cual fue trasladada con anticipación a las personas integrantes de la Subcomisión, sin que se recibieran observaciones.

**SE ACUERDA:** Se toma nota de las propuestas planteadas por la señora Ligia Jiménez, representante de la Defensa Pública ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Se aprueba la propuesta y se dispone comunicar al Consejo Superior para su valoración y eventual aprobación. Por la importancia que reviste la propuesta se declara firme este acuerdo y se dispone comunicarlo por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia al Consejo Superior.-

-0-

Adicionalmente las Licenciadas Ligia Jiménez Zamora y Cheryl Bolaños Madrigal remiten sus comentarios sobre la circular No. 10-09 del tema Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones  Indígenas, en que manifiestan;

**“De:** Cheryl Bolaños Madrigal <cbolanosm@Poder-Judicial.go.cr>
**Enviado el:** lunes, 8 de junio de 2020 18:32
**Para:** Ligia Jeannette Jiménez Zamora <ljimenezz@Poder-Judicial.go.cr>; Damaris Vargas Vásquez <dvargas@Poder-Judicial.go.cr>; Jorge Olaso Alvarez <jolaso@Poder-Judicial.go.cr>; Melissa Benavides Víquez <mbenavidesv@Poder-Judicial.go.cr>; Angie Calderón Chaves <acalderonc@Poder-Judicial.go.cr>; Sandra Pizarro Gutiérrez <spizarro@Poder-Judicial.go.cr>; Wilbert Kidd Alvarado <wkidd@Poder-Judicial.go.cr>; Dixon Li Morales <dlim@Poder-Judicial.go.cr>; 'Geyner Blanco Acosta' <geyner.blanco@presidencia.go.cr>; 'Ilse Valeria Varas Rojas' <vvaras@inamu.go.cr>; Flor Arroyo Morera <farroyom@Poder-Judicial.go.cr>; Jean Carlo Monge Madrigal <jmongema@Poder-Judicial.go.cr>; Yolanda Alvarado Vargas <yalvaradov@Poder-Judicial.go.cr>; 'ali.garcia@ucr.ac.cr' <ali.garcia@ucr.ac.cr>; Vanessa Villalobos Montero <vvillalobos@Poder-Judicial.go.cr>; 'cescotofer@gmail.com' <cescotofer@gmail.com>; Ariana Céspedes López <acespedesl@Poder-Judicial.go.cr>; Tattiana Garcia Chaves <tgarciach@Poder-Judicial.go.cr>; Erick Alfaro Romero <ealfaror@Poder-Judicial.go.cr>; Carlos Romero Rivera <cromero@poder-judicial.go.cr>; Vivian Rímola Soto <vrimola@Poder-Judicial.go.cr>; 'Marjorie Herrera' <mherrera@dhr.go.cr>; Yorleny Ferreto Solano <yferreto@Poder-Judicial.go.cr>; Hugo Hernández Alfaro <hhernandez@Poder-Judicial.go.cr>; Indira Alfaro Castillo <ialfaro@Poder-Judicial.go.cr>; Roberth García González <rgarciag@Poder-Judicial.go.cr>; Jeremy Eduarte Aleman <jeduarte@Poder-Judicial.go.cr>; 'william.vega@one.un.org' <william.vega@one.un.org>; Cristian Alberto Martínez Hernández <cmartinezh@Poder-Judicial.go.cr>; Stephannie Phillips Asch <sphillips@Poder-Judicial.go.cr>; Centro Gestión Función Jurisdiccional-CACMFJ <centro\_gestion\_juris@Poder-Judicial.go.cr>; Stephannie Phillips Asch <sphillips@Poder-Judicial.go.cr>; Patricia Bonilla Rodríguez <pbonilla@Poder-Judicial.go.cr>; Roxana Arrieta Meléndez <rarrieta@Poder-Judicial.go.cr>; Alex Guevara Meza <aguevarame@Poder-Judicial.go.cr>; Jovanna Calderón Altamirano <jcalderona@Poder-Judicial.go.cr>; 'Franklin Paniagua Alfaro' <fpaniagua@mj.go.cr>; 'kpiedrac@mj.go.cr' <kpiedrac@mj.go.cr>; Lizeth Orozco Bolaños <lorozcob@Poder-Judicial.go.cr>; Flor Arroyo Morera <farroyom@Poder-Judicial.go.cr>
**CC:** Acceso a la Justicia <accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr>; Subcomisión de Pueblos Indígenas <spindigenas@Poder-Judicial.go.cr>; Alejandra Mena Cárdenas <amenac@Poder-Judicial.go.cr>; Yasmin Marchena Espinoza <ymarchena@Poder-Judicial.go.cr>
**Asunto:** RE: Oficio N° 5254-2020

Buenas tardes doña Ligia.

Estoy de acuerdo. Solo sugiero repasar lo discutido últimamente en relación a la realización de diligencias "in situ" que si implicara la realización de juicios, sabemos que la restricción de recursos no está permitiendo cumplir al máximo con este requerimiento por lo que considero que debería incluirse al final... siempre que los recursos y las posibilidades lo permitan.

De lo contrario, habría que agregar la formulación de los recursos para tales efectos en las instancias que lo requieran.

Saludos, Cheryl.

**De:** Ligia Jeannette Jiménez Zamora <ljimenezz@Poder-Judicial.go.cr>
**Enviado:** lunes, 8 de junio de 2020 07:19
**Para:** Damaris Vargas Vásquez <dvargas@Poder-Judicial.go.cr>; Jorge Olaso Alvarez <jolaso@Poder-Judicial.go.cr>; Melissa Benavides Víquez <mbenavidesv@Poder-Judicial.go.cr>; Angie Calderón Chaves <acalderonc@Poder-Judicial.go.cr>; Sandra Pizarro Gutiérrez <spizarro@Poder-Judicial.go.cr>; Wilbert Kidd Alvarado <wkidd@Poder-Judicial.go.cr>; Dixon Li Morales <dlim@Poder-Judicial.go.cr>; 'Geyner Blanco Acosta' <geyner.blanco@presidencia.go.cr>; 'Ilse Valeria Varas Rojas' <vvaras@inamu.go.cr>; Flor Arroyo Morera <farroyom@Poder-Judicial.go.cr>; Jean Carlo Monge Madrigal <jmongema@Poder-Judicial.go.cr>; Yolanda Alvarado Vargas <yalvaradov@Poder-Judicial.go.cr>; 'ali.garcia@ucr.ac.cr' <ali.garcia@ucr.ac.cr>; Vanessa Villalobos Montero <vvillalobos@Poder-Judicial.go.cr>; 'cescotofer@gmail.com' <cescotofer@gmail.com>; Ariana Céspedes López <acespedesl@Poder-Judicial.go.cr>; Tattiana Garcia Chaves <tgarciach@Poder-Judicial.go.cr>; Erick Alfaro Romero <ealfaror@Poder-Judicial.go.cr>; Carlos Romero Rivera <cromero@poder-judicial.go.cr>; Vivian Rímola Soto <vrimola@Poder-Judicial.go.cr>; 'Marjorie Herrera' <mherrera@dhr.go.cr>; Yorleny Ferreto Solano <yferreto@Poder-Judicial.go.cr>; Hugo Hernández Alfaro <hhernandez@Poder-Judicial.go.cr>; Indira Alfaro Castillo <ialfaro@Poder-Judicial.go.cr>; Cheryl Bolaños Madrigal <cbolanosm@Poder-Judicial.go.cr>; Roberth García González <rgarciag@Poder-Judicial.go.cr>; Jeremy Eduarte Aleman <jeduarte@Poder-Judicial.go.cr>; 'william.vega@one.un.org' <william.vega@one.un.org>; Cristian Alberto Martínez Hernández <cmartinezh@Poder-Judicial.go.cr>; Stephannie Phillips Asch <sphillips@Poder-Judicial.go.cr>; Centro Gestión Función Jurisdiccional-CACMFJ <centro\_gestion\_juris@Poder-Judicial.go.cr>; Stephannie Phillips Asch <sphillips@Poder-Judicial.go.cr>; Patricia Bonilla Rodríguez <pbonilla@Poder-Judicial.go.cr>; Roxana Arrieta Meléndez <rarrieta@Poder-Judicial.go.cr>; Alex Guevara Meza <aguevarame@Poder-Judicial.go.cr>; Jovanna Calderón Altamirano <jcalderona@Poder-Judicial.go.cr>; 'Franklin Paniagua Alfaro' <fpaniagua@mj.go.cr>; 'kpiedrac@mj.go.cr' <kpiedrac@mj.go.cr>; Lizeth Orozco Bolaños <lorozcob@Poder-Judicial.go.cr>; Flor Arroyo Morera <farroyom@Poder-Judicial.go.cr>
**Cc:** Acceso a la Justicia <accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr>; Subcomisión de Pueblos Indígenas <spindigenas@Poder-Judicial.go.cr>; Alejandra Mena Cárdenas <amenac@Poder-Judicial.go.cr>; Yasmin Marchena Espinoza <ymarchena@Poder-Judicial.go.cr>
**Asunto:** RE: Oficio N° 5254-2020

Buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo.

Me parece que es necesario solicitar una  adición ante el Consejo Superior, por parte de la Sub Comisión,  porque el documento que se aprobó en el Consejo Superior y está con  acuerdo firme son las reglas anteriores, no las que tienen los cambios.

Les adjunto el documento que se había socializado, con las reglas anteriores, los cambios a las mismas, y al final del documento están las reglas corregidas, para que por favor pidamos lo antes posible la corrección del Acuerdo del Consejo. Es un error corregible y necesario.

Gracias.

Lo correcto es:

El documento con los cambios quedaría así:

CIRCULAR No. 10-09

Asunto: Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones

Indígenas.

A los despachos judiciales Se les hace saber que:

El Consejo Superior en sesión 77-08, celebrada el 14 de octubre de 2008, artículo XLI, a solicitud de la Comisión de Accesibilidad y de la Subcomisión vinculada con los Grupos Indígenas, acordó comunicarles las siguientes Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas:

1. Las autoridades judiciales promoverán la realización de diligencias “in situ”, en aquellos lugares donde existan territorios indígenas.

2. Dentro de cada presupuesto de los distintos programas se contemplará un rubro para brindar ayuda económica a las personas usuarias indígenas que la requieran, para cubrir algunos gastos que origine su traslado a los despachos judiciales, y otro de viáticos para las personas funcionarias judiciales que participen en las diligencias “in situ”. Las personas juzgadoras, así como cualquier autoridad judicial establecerán como práctica la atención de las personas usuarias indígenas. (Modificado por el Consejo Superior en sesión Nº 104-09 del 17 de noviembre de 2009, artículo XLVII)

3. Las personas juzgadoras, así como las personas funcionarias judiciales darán prioridad de trato a las personas indígenas que se apersonen a los despachos judiciales.

4. Las personas juzgadoras deberán fijar los señalamientos de las audiencias y juicios dentro de un horario accesible, contemplando las particularidades de cada zona.

5.  Las personas juzgadoras, así como las autoridades judiciales que requieran documentos de otras entidades en este tipo de asuntos, establecerán los canales de comunicación y coordinación necesarios para hacerlos llegar al caso concreto y a la brevedad posible. Se comunicará a la Unidad de Acceso a la Justicia y al Sub Comisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas los obstáculos que se les presenten para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones.

6. Se deberán aplicar las directrices de no revictimización, en aquellos casos donde una de las partes del proceso es una persona indígena, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.

7. La Contraloría de Servicios será la encargada de velar por el cumplimiento de las recomendaciones propuestas.

8. En caso de que una de las partes del proceso sea una persona indígena, se deberá colocar el distintivo o destacado rojo en el expediente.

9. Los servidores judiciales propiciarán y colaborarán, junto con otras instituciones públicas, la incorporación de las personas indígenas a los procesos de enseñanza secundaria y universitaria, que faciliten su participación en la solución de sus asuntos a partir de su propia perspectiva.

10. Derecho a una persona intérprete o-y traductora: La Administración de Justicia procederá a nombrar siempre a toda persona indígena, una persona intérprete o-y traductora en su idioma materno, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, salvo que hable y comprenda el idioma español.

La persona intérprete y-o traductora será nombrada dentro de la lista oficial, sin embargo, de modo excepcional, podrá nombrarse por inopia. En tal supuesto, la autoridad respectiva verificará que sea una persona idónea, considerando las particularidades de la situación concreta. Lo anterior sin perjuicio de que dicha persona nombre una persona intérprete de su confianza, conforme lo establece el artículo 14 del Código Procesal Penal y el artículo 6 de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

11. Respeto a la diversidad cultural. Obligación del peritaje antropológico/cultural: Cuando se juzgue a una persona indígena, la persona juzgadora que conoce del caso dispondrá, cuando ello sea necesario para resolverlo, de oficio o a petición de parte y costeado por el Estado, el peritaje antropológico y/o cultural, con el fin de conocer las normas culturales particulares, la personalidad, la vida del imputado o persona indígena con proceso judicial, entre otras condiciones del contexto vinculadas con los

hechos.  Lo anterior de conformidad con el artículo 339 del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.

La administración de justicia procederá a elaborar una lista de peritos conocedores de las diferentes culturas indígenas, quienes tendrán por función efectuar, individual o conjuntamente, el peritaje requerido.

(Los incisos 10 y 11, fueron adicionados por el Consejo Superior en sesión Nº 61-11 del 7 de julio de 2011, artículo LIII) (Reiterada en virtud del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 16-2013, celebrada el 21 de febrero de 2013, artículo XLIV).

Los cambios fueron solicitados desde la Sub Comisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, de la Unidad de Acceso a la Justicia. Enero 2020”

**SE ACUERDA**: 1° Se toma nota. 2° Comunicar al Consejo Superior el documento propuesta debidamente actualizado -no el enviado inicialmente- y la propuesta de Circular respectiva para su valoración. 3° Se dispone comunicar este acuerdo por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.-

**ARTÍCULO XXVIII**

El Ingeniero Dixon Li Morales y la licenciada Ana Erika Rodríguez Araya, Jefe del Subproceso Ejecución de las Operaciones y Jefa del Subproceso de Estadística respectivamente -ambos- de la Dirección de Planificación en oficio 843-PLA-ES-2020 de 5 de junio de 2020, manifiestan:

“En atención al acuerdo tomado por la **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Población Afrodescendiente**, en sesióncelebrada el pasado 28 de febrero de 2020, artículo III**,** mediante el cual se solicita en el punto 4:

“Cursar invitación a Licda. Nacira Valverde Bermúdez para que designe alguna persona en representación de la Dirección de Planificación que nos pueda acompañar en la próxima sesión de la Subcomisión, con la finalidad de exponer la necesidad de contar con información estadística e indicadores en relación con los y las usuarias afrodescendientes que son parte de algún proceso judicial; ya que interesa conocer en qué tipos de procesos figura regularmente esta población, además de la duración de procesos, entre otros. Interesa generar información estadística a nivel nacional. Lo anterior en cumplimiento de la Meta N° 5 de la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Pueblos Afrodescendientes.”

Por otro lado, en el mismo contexto de identificación de estadísticas, relacionadas con las poblaciones usuarias del Poder Judicial, en condiciones de vulnerabilidad, se suman los siguientes oficios y acuerdos, en aras de consolidar una propuesta de atención integral:

| **Referencia Dirección de Planificación** | **Acuerdo o Gestión Principal** | **Detalle** | **Fecha** | **Documentos Vinculantes** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1485-2018 | Oficio CACC-348-2018, de la Unidad de Acceso a la Justicia.  | Acuerdo de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas Adultas Mayores, sesión 31 de agosto, artículo 2. Acuerdo 2.2. Instar al Departamento de Planificación, para que en el Compendio de Indicadores se visibilice en sus estadísticas a la Persona Adulta Mayor y a las Personas con Discapacidad, tal como se refleja en el SIGMA.  | 07-01-19 |  |
| 1491-2018 | Acta 08-SAJPAM-2018, de la sesión celebrada el día 31 de agosto, de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de las Personas Adultas Mayores.  | El acta describe los aspectos abordados en 5 artículos, en donde el artículo 2 corresponde al especificado en el ítem anterior, de la presente matriz, competente al Sub Proceso de Estadística.  | 07-01-19 |  |
| 103-2019 | Solicitud de la MBA. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, ante el Consejo Superior.  | Se gestiona la emisión de lineamientos a la Dirección de Planificación, para construir estadísticas con información actualizada, fiable y de calidad, asociada a los procesos en los cuales intervienen personas indígenas, para verificar la priorización en la atención de los procesos, en todas las materias y oficinas. Asimismo, se desea que los resultados de tales controles estadísticos deben ser debidamente divulgados ante la población indígena y ante la ciudadanía en general.  | 14-06-19 |  |
| 206-2019 | Comunicado de la MBA. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad.  | Se relaciona con el artículo IX, sesión 01-19, de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, en el sentido de consultar al Sub Proceso de Estadística si emitió pronunciamiento sobre la consulta que se le formuló, para que se establezcan estadísticas en las que se consigne la situación de discapacidad permanente o temporal de las personas usuarias, con opciones abiertas de posibles discapacidades, bajo el entendido de que las discapacidades que se incluyan en las estadísticas deben estar relacionadas con las personas usuarias físicas y no con las personas jurídicas, que fungen como representantes.  | 05-03-19 |  |
| 250-2019 | Acuerdo tomado por el Consejo Superior, en sesión Nº 07-19, artículo LXVI.  | La Dirección de Planificación debe valorar lo concerniente a la emisión de lineamientos, con el fin de construir estadísticas con información actualizada, fiable y de calidad, asociada a los procesos en los que intervienen personas indígenas, con el fin de verificar la priorización en la atención de este tipo de procesos, en todas las materias y oficinas. Esta diligencia corresponde a la solicitud de la MBA. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, ante el Consejo Superior, especificada en el ítem tras anterior.  | 05-03-19 |  |

En virtud de lo anterior, y con base en las 100 reglas de Brasilia, relacionadas con el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, **XIV Cumbre Judicial Iberoamericana**, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con estas características sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos, que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, donde se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas, que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, otorgando un trato adecuado a sus circunstancias singulares, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas, o por la gran incidencia de una de ellas.

En este sentido, se definen las siguientes acciones:

* **Población Vulnerable en los casos entrados, parte actora u ofendida / parte demandada imputada:** Incluir en las estadísticas los ejes transversales, definidos por las reglas de Brasilia, a saber: **“Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad:**  Una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas – culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, así como la victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”.
* **Las variables relacionadas con las poblaciones vulnerables, que se proponen incorporar al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales (SGDJ), al Escritorio Virtual, al Sistema de Seguimiento de Casos del Ministerio Público, al CEREDOC (Centro de Recepción de Documentos), a la aplicación Gestión en Línea del Poder Judicial y a la plataforma SIGMA son las siguientes:**
* **Persona perteneciente a pueblos y comunidades indígenas, Persona afrodescendiente**: Es identificada en el módulo de intervinientes, en el campo “grupo étnico-racial”. Actualmente, este concepto cuenta con la siguiente desagregación:



Asimismo, se recomienda desagregar la información relacionada con las personas indígenas en:

Persona Indígena-Cabécar

Persona Indígena-Huetar

Persona Indígena-Bribrí

Persona Indígena-Brunca o Boruca

Persona Indígena-Chorotega

Persona Indígena-Malekus

Persona Indígena-Guaymies o Ngabes

Persona Indígena-Térraba o Teribe

* **Persona adulta mayor:** Con solo ingresar el número de cédula de la persona, en el módulo de intervinientes, el sistema completa automáticamente las características sociodemográficas (estado civil, nacionalidad, sexo), estableciendo conexión con el Registro Civil costarricense. Con esta información el sistema calcula la edad; además, el módulo permite identificar la figura jurídica (persona física o entidad jurídica) y el tipo de interviniente (actor/ofendido o demandado/imputado, según corresponda).
* **Niñas, niños y adolescentes:** Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela, por parte de los órganos del sistema de justicia, en consideración a su desarrollo evolutivo. Prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad, cuando interactúan con el sistema de justicia.

Esta información se identifica en el módulo de intervinientes, al ingresar la fecha de nacimiento del interviniente, el sistema calcula la edad; además, el módulo permite identificar el tipo de interviniente (actor o demandado/ imputado, según corresponda).

Para los dos ítemes o poblaciones anteriores se recomiendan los siguientes conglomerados, de acuerdo con las clasificaciones utilizadas por el Poder Judicial y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Menores de 12 años: menores inimputables

De 12 a menos de 18 años: menores de edad

De 18 a menos de 35 años: adulto joven

De 35 a menos de 65 años: adulto

De 65 años y más: adulto mayor

* **Persona migrante:** El desplazamiento de una persona, fuera del territorio del Estado de su nacionalidad, puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de las personas trabajadoras migratorias y sus familiares. Se considera “trabajador migratorio” toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado alguna actividad remunerada, en un Estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a las personas beneficiarias del estatuto de “refugiado”, según las Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables. Con esta variable se puede identificar la cantidad de personas actoras o demandadas, que registraron en el campo: “tipo de identificación” su pasaporte o cédula de residencia.
* **Persona con discapacidad:** Se entiende por discapacidad la situación que resulta de la interacción con las personas que cuentan con deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y cualquier tipo de barreras de su entorno, que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. También se encuentran en situación de discapacidad, aquellas personas que de manera temporal presenten tales deficiencias, que les limiten o impidan el acceso a la justicia, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Bajo este concepto, se propone incluir en los sistemas informáticos institucionales que correspondan las siguientes denominaciones:

**Incapacidad temporal**. Definición según el Código de Trabajo. En su capítulo 4, artículo 223, el cual nos brinda la siguiente definición: “Incapacidad temporal, la constituida por la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita al trabajador para desempeñar el trabajo por algún tiempo. Esta incapacidad finaliza por alguna de las siguientes circunstancias: 1. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento. 2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237 (artículo derogado). 3. Por abandono injustificado de las prestaciones médico - sanitarias que se suministran. 4. Por la muerte del trabajador.”.

**Discapacidad física:** Recibe el nombre de discapacidad física o motora todo aquel tipo de limitación, generada por la presencia de una **problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas**, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual. Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica generadora de limitación física, amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares.

**Discapacidad sensorial**: La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones, derivadas de deficiencias **en alguno de los sentidos**, que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno**. Existen alteraciones en todos los sentidos, si bien, las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva.**

**Discapacidad intelectual:** La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual, que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral, poseyendo un coeficiente intelectual (CI) inferior a 70, e influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social. **Existen diferentes grados de discapacidad intelectual**, los cuales tienen diferentes implicaciones, a nivel del tipo de dificultades que pueden presentar. Se han conocido al menos tres denominaciones de este colectivo, a saber: **“deficiencia mental”, “retraso mental” y “discapacidad intelectual y del desarrollo”.**

**Discapacidad psíquica:** Hablamos de discapacidad psíquica cuando se está ante una situación, en que se presentan**alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo**, generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de **trastorno mental.**

**5. Discapacidad visceral**: Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y en la participación, en la comunidad del sujeto**.**Es el caso de las discapacidades que pueden generar **la diabetes o los problemas cardíacos.**

**6. Discapacidad múltiple:** Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones, provocadas por algunas de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico, con sordera.

* Persona con condiciones de vulnerabilidad múltiple: Se considera “múltiple” cuando una persona presenta dos o más condiciones de vulnerabilidad simultáneamente.

Para llevar a cabo la alimentación de estas variables en los sistemas informáticos se deben modificar las opciones existentes en las siguientes pantallas del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales. Le corresponde a la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial (DTI) valorar cada una de las opciones expuestas, para proceder a su implementación. Asimismo, le corresponde a la Comisión de Acceso a la Justicia, de la Secretaría Técnica de Género, capacitar a las personas servidoras judiciales, para efectos de alimentar la información en los sistemas informáticos institucionales, con la finalidad de distinguir los tipos de discapacidad propuestos y de además, abordar a las personas usuarias, de forma correcta.



En el caso de personas con condiciones de vulnerabilidad múltiple, se requiere que a nivel del Universo de Sigma se pueda construir una variable que identifique cuando un interviniente marcó varias condiciones de vulnerabilidad.

De aprobar las variables expuestas anteriormente y en concordancia con la Política Institucional de Acceso a la Justicia, se propone la construcción de los siguientes indicadores institucionales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Nivel de desagregación | Métrica |
| Porcentaje de casos con atención diferenciada en el Poder Judicial de las personas indígenas | \*Para la parte imputada o demandada\*Para la parte ofendida o actora\*Por Etnia\*Sexo | -Total de personas indígenas imputadas u demandadas / Total de personas imputadas o demandadas de un proceso judicial \*100-Total de personas indígenas ofendidas o demandantes / Total de personas ofendidas o demandantes de un proceso judicial \*100 |
| Porcentaje de casos con atención diferenciada en el Poder Judicial de las personas Afrodescendientes | \*Para la parte imputada odemandada\*Para la parte ofendida o actora\*por sexo | -Total de personas afrodescendientes imputadas u demandadas / Total de personas imputadas o demandadas de un proceso judicial \*100-Total de personas afrodescendientes ofendidas o demandantes / Total de personas ofendidas o demandantes de un proceso judicial \*100 |
| Porcentaje de casos con atención diferenciada en el Poder Judicial de las personas adultas mayores | \*Para la parte imputada o demandada\*Para la parte ofendida o actora\*por sexo | -Total de personas adultas mayores imputadas u demandadas / Total de personas imputadas o demandadas de un proceso judicial \*100-Total de personas adultas Mayores ofendidas o demandantes / Total de personas ofendidas o demandantes de un proceso judicial \*100 |
| Porcentaje de casos con atención diferenciada en el Poder Judicial de las personas con discapacidad | \*Para la parte imputada o demandada\*Para la parte ofendida o actoraTipos de discapacidad\*por sexo | -Total de personas con discapacidad imputadas u demandadas / Total de personas imputadas o demandadas de un proceso judicial \*100-Total de personas com discapacidad ofendidas o demandantes / Total de personas ofendidas o demandantes de un proceso judicial \*100 |
| Porcentaje de casos con atención diferenciada en el Poder Judicial de las personas migrantes | \*Para la parte imputada o demandada\*Para la parte ofendida o actora\*por sexo | -Total de personas migrantes imputadas u demandadas / Total de personas imputadas o demandadas de un proceso judicial \*100-Total de personas migrantes ofendidas o demandantes / Total de personas ofendidas o demandantes de un proceso judicial \*100 |
| Porcentaje de casos con atención diferenciada en el Poder Judicial de las personas con condiciones de vulnerabilidad múltiple  | \*Para la parte imputada o demandada\*Para la parte ofendida o actora\*Por sexo | -Total de personas con condiciones de vulnerabilidad múltiple imputadas u demandadas / Total de personas imputadas o demandadas de un proceso judicial \*100-Total de personas con condiciones de vulnerabilidad múltiple ofendidas o demandantes / Total de personas ofendidas o demandantes de un proceso judicial \*100 |

Finalmente, se remite el informe 1455- PLA-ES-2018 con la propuesta aprobada por el Consejos Superior en sesión N°85-18 celebrada el 27 de setiembre de 2018, para el registro de la orientación sexual e identidad de género en los procesos judiciales, de tal forma que a mediano plazo pueda el Poder Judicial contar con esa información en todas las materias.

|  |  |
| --- | --- |
| **Documento** | **Anexo** |
| Ofício 1455-PLA-ES-2020 |  |
| Oficio de Respuesta de la Dirección de Tecnología de la Información. |  |

**SE ACUERDA:** Se toma nota. Solicitar a la Comisión de Acceso a la Justicia instar a la Dirección de Planificación audiência para pronunciarse sobre dicho oficio debido a que desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas hay observaciones sobre el planteamiento, el cual se estima es muy relevante para las estadísticas institucionales. Se declara acuerdos firme por unanimidad. Comunicar este acuerdos a la Dirección de Planificación y a la Comisión de Acceso a la Justicia por medio de la Unidad de Acceso.-

**ARTÍCULO XXIX**

La señora Ana Isabel Hernández Ruiz, de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, siguiendo instrucciones superiores remite nota del 11 de junio del presente año, que literalmente indica:

“Atendiendo indicaciones superiores, me es grato dirigirme a ustedes en ocasión de hacer de su conocimiento la comunicación por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) sobre la convocatoria para la presentación de proyectos en el marco del Programa de Asesores Expertos World Friends Korea de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

Por lo anterior, adjunto se remite para su conocimiento y valoración documentación que contiene información más detallada sobre el Programa anteriormente citado, correspondiente a:

* Lista de Sectores y Áreas de Oportunidad del Programa de Expertos KOICA- World Friends Korea
* Lista de Sectores del Programa de Expertos de WFK-NIPA
* Formulario Programa de expertos de KOICA
* Procedimiento Programa de Expertos de KOICA
* Brochure expertos 2020

En este sentido en caso de existir algún interés para presentar propuestas de proyecto, se solicita de la manera más atenta se remita la propuesta de proyecto a más tardar el día 24 de junio de 2020 a la cuenta de correo mcalvoa@poder-judicial.go.cr con copia al correo ocri@poder-judicial.go.cr.

De parte de la Oficina quedamos a la disposición para atender cualquier consulta que requieran, por lo que pueden contactar a la señora María Fernanda Calvo Aguilar.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier consulta sobre la particular.

Con las muestras de mi más alta consideración y estima. “

-0-

Posteriormente se puso en conocimiento de los integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, con el fin de conocer las propuestas respectivas.

**SE ACUERDA**: 1° Se toma nota del informe enviado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales el 11 de junio de 2020. 2° Solicitar a la OCRI apoyo para que se haga un planteamiento de colaboración para la construcción de un proyecto referido a la actualización de la Política Indígena del Poder Judicial y otras actualizaciones de Políticas de Acceso a la Justicia de interés institucional si a bien lo tiene la Comisión de Acceso a la Justicia. 3° Instar a la OCRI para que apoye en Proyectos con colaboración internacional que permitan al país responder adecuadamente a las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, ante los requerimentos de la población indígena em general, y las personas beneficiarias de las Medidas en concreto. 4° Se declaran estos acuerdos firmes por su relevância institucional y se dispone comunicarlos a la OCRI y la Comisión de Acceso a la Justicia por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia a la mayor brevedad considerando el plazo conferido es muy corto.

**ARTÍCULO XXX**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas informa sobre las dos solicitudes de información enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el traslado que hizo a las principales jefaturas institucionales a efecto de poder dar una respuesta dentro del plazo concedido.

**SE ACUERDA:** Se toma nota.-

Se da por concluida la sesión al ser las 17:20 horas.-

1. Alineados con los 20 Ejes de Acción aprobados por Corte Plena en sesión n°20-19 del 27 de mayo de 2019, articulo XIX, entre otros documentos relacionados. [↑](#footnote-ref-2)
2. Norma 2.1 Ambiente de control, inciso c. “El mantenimiento de personal comprometido y con competencia profesional para el desarrollo de las actividades y para contribuir a la operación y el fortalecimiento del SCI” [↑](#footnote-ref-3)
3. Según lo establece la Ley General de Control Interno [↑](#footnote-ref-4)
4. Pueden brindar insumos importantes del tema. [↑](#footnote-ref-5)
5. Física o digital según se requiera. [↑](#footnote-ref-6)
6. Para dar cumplimiento a la política de fortalecimiento en la prestación del servicio público que nuestra Institución brinda a los usuarios y usuarias indígenas. [↑](#footnote-ref-7)
7. Esto da cumplimiento con esta obligación. [↑](#footnote-ref-8)
8. Medidas Cautelares N° 21-12 emitidas por la CIDH contra Costa Rica [↑](#footnote-ref-9)
9. Estos hechos dieron lugar a tales medidas para evitar su repetición. [↑](#footnote-ref-10)
10. Edificando confianza y diálogo intercultural, facilitando una comunicación efectiva y transparente. [↑](#footnote-ref-11)
11. Estos *se encuentren en armonía con los derechos humanos, según los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Kaliña y Lokono versus Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 y las disposiciones de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.* [↑](#footnote-ref-12)
12. Los indicadores son una excelente herramienta para el control y supervisión del despacho y las labores de todo el personal del despacho judicial [↑](#footnote-ref-13)
13. El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional. [↑](#footnote-ref-14)
14. [::[::[::[1]Según datos del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, para el Presupuesto del Poder Judicial 2019. [↑](#footnote-ref-15)
15. [[. ))…” -”A ic:[. ))…” -”A ic:         ()           1[2]Este dato es un estimado producto de la información suministrada por el Lic. Roy Garro León, Coordinador Administrativo de la Administración Regional. [↑](#footnote-ref-16)